

DICTAMEN
NÚMERO QUINCE

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Presente.

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 45, fracción II, 46, fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, párrafo 2, 30, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; respetuosamente sometemos a su consideración el Dictamen por el que se aprueba la **"INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos:

GLOSARIO

Comisión	Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos
Consejo General	Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California
Constitución General	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California
Iniciativa de Ley	Iniciativa de Ley por la que se expide la Nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California, que formula el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Instituto Electoral	Instituto Estatal Electoral de Baja California
Ley Electoral	Ley Electoral del Estado de Baja California
Reglamento Interior	Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Proyecto de Nueva Ley	Proyecto de Nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California

ANTECEDENTES

1. El 16 de febrero de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, la cual es regulatoria de los artículos 5, 8, 28, 34 y 112 de la Constitución Local y tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, consolidar y establecer los instrumentos y mecanismos que permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos.

Así mismo, mediante los decretos 85, 276, 160 y 165 publicados en el Periódico Oficial del Estado en fechas 5 de agosto de 2011, 21 de septiembre de 2012, 19 de enero, y 9 de marzo de 2018, respectivamente, se han llevado a cabo diversas reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, que en lo substancial versan sobre los siguientes temas:

- a) La disminución de porcentajes para solicitar los instrumentos de participación ciudadana, el establecimiento del voto electrónico para llevar a cabo la jornada de consulta, y la realización de consultas en día de las elecciones ordinarias;
- b) La incorporación a la ley como instrumento de participación ciudadana tanto de la consulta popular como del presupuesto participativo;
- c) La facultad de las organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de Educación Superior para que puedan presentar iniciativas ciudadanas ante el Congreso del Estado;
- d) Se incorpora la figura del Presupuesto Participativo como instrumento de participación ciudadana a nivel municipal;

2. El 15 de diciembre 2016, el Consejo General durante la decimosexta sesión ordinaria, aprobó el dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica relativo al "*Programa de Cultura Cívica y Política 2017*" con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la cultura democrática en el Estado.

Con ese fin y teniendo como uno de sus ejes estratégicos el diálogo, se establecieron en el "*Programa de Cultura Cívica y Política del año 2017*" diversas líneas de acción diseñadas para configurar espacios donde se privilegiara la interacción, el intercambio y la discusión de ideas y posiciones entre múltiples actores, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia.

De entre las líneas de acción, destaca la de organizar “*conversatorios*” con la sociedad civil, jóvenes, academias y partidos políticos, con la finalidad de recoger sus impresiones acerca de los instrumentos de participación ciudadana, establecidos en la Ley y, en su caso, elaborar con la sociedad en su conjunto, propuestas de reforma al marco legal aplicable, para mejorar la implementación de los instrumentos de participación ciudadana.

3. Del 19 de septiembre al 24 de octubre de 2017, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, celebró 5 encuentros ciudadanos denominados “*Formación Cívica y Política desarrollo para la Democracia*” a través de conversatorios y consultas sobre los instrumentos de participación ciudadana, con la finalidad de indagar sobre la percepción de las ciudadanas y ciudadanos sobre tales instrumentos, así como recoger sus propuestas. Los encuentros se llevaron a cabo en todos los municipios del Estado de Baja California.

4. El 1 de febrero de 2018, el Consejo General en la segunda sesión extraordinaria aprobó el “*Programa de Cultura Cívica y Participación Política 2018*”, cuyo objetivo es dar continuidad al programa mencionado en el antecedente 2, entre las actividades específicas se estableció la de realizar foros para socializar el “*Proyecto de modificación a la Ley de Participación Ciudadana*” con diversos grupos de la sociedad civil, instituciones académicas, partidos políticos, cabildos municipales y el Congreso del Estado.

5. Del 10 al 18 de abril de 2018, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica celebró 6 mesas de trabajo en los Municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana, con la finalidad de socializar el Proyecto de Nueva Ley.

6. Del 1 al 19 de junio de 2018, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, celebró 6 foros municipales relativos a socializar al Proyecto de Nueva Ley en los municipios de Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Mexicali.

7. El 9 de agosto de 2018, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, realizó la presentación del Proyecto de Nueva Ley a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali.

8. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General celebró sesión pública en la que declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California, en el que habrían de renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado de Baja California.

9. El 4 de octubre de 2018, el Consejo General en la segunda sesión extraordinaria aprobó el Punto de Acuerdo por el que se autoriza al **"CONSEJERO PRESIDENTE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FORMULADO POR EL INSTITUTO"**, mismo que fue impugnado por diversos integrantes del Consejo General ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.

10. El 9 de noviembre de 2018, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California resolvió el Recurso de Inconformidad RI-21/2018 y su acumulado, mediante el cual revocó el Punto de Acuerdo descrito en el antecedente 9, para efectos de que sea sometido a conocimiento del Consejo General el Proyecto de Nueva Ley, a fin de que se analice, discuta, delibere y, en su caso, apruebe, cumpliendo con las formalidades del procedimiento para una iniciativa de ley o reforma en materia electoral, en términos de lo previsto en la Ley Electoral y el Reglamento Interior.

11. El 12 de noviembre de 2018, el Consejero Presidente mediante el oficio número IEEBC/CGE/2282/2018, remitió a la Comisión, el Proyecto de Nueva Ley, con la finalidad de que la Comisión entrara a su análisis y estudio para su posterior dictaminación.

12. El 21 de enero de 2019, el Consejo General aprobó el dictamen número siete de la Comisión por el que se determinó **"INVIABLE REALIZAR EL ESTUDIO DE FONDO DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**, al encontrarse en desarrollo el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.

13. El 7 de octubre de 2019, el Consejo General durante la quincuagésima cuarta sesión extraordinaria realizó la declaratoria formal de conclusión del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en cual se renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado de Baja California.

14. El 5 de noviembre de 2019, la Comisión celebró reunión de trabajo con los integrantes del Consejo General a fin de presentar un resumen ejecutivo del contenido del Proyecto de Nueva Ley, toda vez que en atención a lo ordenado por el Consejo General en el dictamen número Siete de la Comisión, el Proyecto de Nueva Ley se analizaría una vez concluido el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.

15. El 8 de noviembre de 2019, la Comisión mediante oficio IEEBC/CRAJ/421/2019 hizo del conocimiento del Consejero Presidente del Consejo General, que en cumplimiento al Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018, así como a lo previsto en el artículo 24, párrafo 4, del Reglamento Interior, determinó de común acuerdo que la Presidencia de dicha comisión, para el periodo comprendido del 9 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020, recaería en el Consejero Electoral Daniel García García. Por lo que, la integración de la Comisión quedó de la manera siguiente:

Presidente	Consejero Electoral Daniel García García
Vocal	Consejera Electoral Lorena Gabriela Soberanes Eguía
Vocal	Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez

16. El 22 de noviembre de 2019, el Consejero Presidente mediante oficio IEEBC/CGE/4849/2019 remitió a la Comisión, en cumplimiento a lo dispuesto en el resolutivo segundo del dictamen aludido en el antecedente 12, el Proyecto de Nueva Ley, a efecto de que procediera a su análisis y dictaminara lo que en derecho correspondiera.

17. El 20 de diciembre de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución General, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, mismo que entró en vigor al día siguiente; esto es, el 21 de diciembre del mismo año.

18. El 16 de enero de 2020, el Consejo General durante la primera sesión ordinaria aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CRAJ-PA01-2020 que presentó el Presidente de la Comisión relativo a la **"SOLICITUD DE PRÓRROGA DE HASTA QUINCE DÍAS HÁBILES PARA FORMULAR EL PROYECTO QUE EN DERECHO CORRESPONDA RESPECTO DEL PROYECTO DE NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA"** en el cual se determinó como fecha límite para la formulación del mismo, el 18 de febrero de 2020.

19. El 17 de enero de 2020, la Comisión celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, analizar y discutir el Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, y el C. José Luis Ángel Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California.

En esta reunión se presentó por parte de la Comisión a los presentes el Proyecto de Nueva Ley, analizándose los artículos 1 al 15. Se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y los asistentes, a continuación, se plasman los artículos de los cuales se acordaron cambios o adiciones:

- **Artículo 1:** se sugieren cambios en los artículos que son reglamentados con el proyecto, a fin de especificar el inciso o apartado a que corresponde cada uno de los artículos;
- **Artículo 2:** se agrega la iniciativa ciudadana y se modifica el orden de los instrumentos de participación ciudadana quedando de la siguiente forma: Plebiscito, Referéndum, Consulta popular, Revocación de Mandato, Iniciativa ciudadana, Presupuesto Participativo, Cabildo Abierto, Congreso Abierto, Gobierno Abierto y Panel de Revisión. Asimismo, se solicitó la revisión de la definición del principio de no discriminación y la incorporación de los principios de máxima publicidad y accesibilidad;

- **Artículo 3:** referente a la aplicación y ejecución de las normas se elimina el párrafo segundo por encontrarse inmerso en el artículo 4;
- **Artículo 5:** se solicitó reformular el artículo para que el contenido se encontrara en un solo párrafo;
- **Artículo 11:** referente a las materias materia de plebiscito se realizó una adecuación en el párrafo primero eliminándose lo correspondiente a la trascendencia, y se solicitó incorporar las materias susceptibles de un plebiscito, haciendo la distinción entre los actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los Ayuntamientos, y la incorporación de nuevas materias tal y como se encuentran establecidas en el Modelo de Ley Integral de Participación Ciudadana;
- **Artículo 12:** se solicitó un cambio en el inciso d) correspondiente al porcentaje de representación requerido de participación ciudadana, y la realización de un ejercicio matemático para el cálculo del porcentaje para los plebiscitos de carácter estatal y municipal.
- **Artículo 13:** se modificó el contenido del artículo para que el Instituto Electoral organizara los plebiscitos relativos a la creación y supresión de municipios y no fuera potestad del Congreso del Estado, y
- **Artículo 15:** en relación con los actos que no son materia de plebiscito, se determinó que se incorporaran los siguientes: aquellos que realice la autoridad que corresponda por mandato de autoridad judicial, aquellos relacionados con el régimen interno y de organización de los Poderes del Estado, así como de los Ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos del Estado, aquellos que restrinjan los derechos humanos.

La Comisión determinó decretar un receso en la reunión referida, a fin de continuar en fecha posterior.

20. El 22 de enero de 2020, la Comisión reanudó la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, y el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California.

En esta reunión, se analizaron y discutieron los artículos 16 al 23. Se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y los asistentes, a continuación, se plasman los artículos de los cuales se acordaron cambios o adiciones.

- **Artículo 16:** referente al referéndum se solicitó eliminar lo correspondiente a la trascendencia;
- **Artículo 18:** referente a quienes puede solicitar el referéndum constitucional se solicitó agregar en caso de los Ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando menos la mitad más uno de los municipios del Estado con la aprobación de la mayoría calificada de sus integrantes; tratándose de referéndum legislativo, con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo, y en caso de referéndum municipal, con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento respectivo;
- **Artículo 19:** referente a la organización del proceso, se sugirió eliminar lo relacionado con el aviso de intención y eliminar lo correspondiente al estudio de la trascendencia. Así mismo, se solicitó la utilización de lenguaje incluyente en el contenido íntegro del proyecto;
- **Artículo 21:** referente a la solicitud de plebiscito, se agrega en el primer párrafo a la emisión del acto o publicación de norma o normas en el Periódico del Estado o Gaceta Municipal, según corresponda;
- **Artículo 22:** se elimina el tercer párrafo de este artículo referente al aviso de intención, y
- **Artículo 23:** en relación con el formato para la obtención de firmas, se solicitó incorporar en el inciso a) el acto o norma que se procede a someter a contener; en el inciso d) agregándose el nombre completo, apellidos, clave de elector y firma de la ciudadanía solicitante, así como las causas por las que no se computarán válidos los apoyos ciudadanos.

La Comisión determinó decretar un receso en la reunión referida, a fin de continuar en fecha posterior.

21. El 24 de enero de 2020, la Comisión reanudó la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, y el C. Luis Enrique Sánchez Peña, Representante Suplente de Morena.

En esta reunión, se analizaron y discutieron los artículos 24 al 32. Se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y los asistentes, a continuación, se plasman los artículos de los cuales se acordaron cambios o adiciones.

- **Artículo 24:** se solicitó incorporar la prohibición de desistimiento por parte de las autoridades y las ciudadanas y ciudadanos una vez presentada la solicitud;
- **Artículo 26:** referente a los requisitos de la solicitud, en el inciso b) se acordó agregar el nombre completo, apellidos paterno y materno, así como la eliminación de lo correspondiente al estudio de la trascendencia;
- **Artículo 27:** referente a la solicitud que venga de los ciudadanos, en el inciso b) se realiza el cambio de los requisitos de los formatos oficiales para la obtención de firmas, estableciendo que deben contener nombre completo, y además apellido paterno y materno;
- **Artículo 28:** se suprime lo relacionado con la justificación de la trascendencia del acto que se propone someter a consulta;
- **Artículo 29:** se solicitó establecer la obligación de notificar a los solicitantes para que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de las inconsistencias encontradas en las firmas de apoyo,
- **Artículo 30:** se solicitó agregar lo relacionado con la notificación por estrados en caso de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones;
- **Artículo 31:** referente a la improcedencia de la solicitud, se suprime la causal relacionada con la intrascendencia del acto o norma, también se suprimió la causal relacionada con que el escrito de solicitud sea insultante, y
- **Artículo 32:** Se solicitó la eliminación del artículo por referirse al periodo adicional para recabar firmas en caso de decretarse la intrascendencia de la solicitud, esto en virtud de que dicha causal ya se había desincorporado del proyecto.

La Comisión determinó decretar un receso en la reunión referida, a fin de continuar en fecha posterior.

22. El 27 de enero de 2020, la Comisión reanudó la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María

Elena Camacho Soberanes, Representante Propietario del Partido del Trabajo; el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, y el C. José Luis Ángel Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California.

En esta reunión, se analizaron y discutieron los artículos 33 al 58. Se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y los asistentes, a continuación, se plasman los artículos de los cuales se acordaron cambios o adiciones.

- **Artículo 33:** referente a las causales de improcedencia, se eliminó el inciso a), se sustituye ciudadanos por ciudadanía en el inciso d) y la eliminación del inciso h);
- **Artículo 34:** se solicitó la eliminación del artículo por referirse a la trascendencia;
- **Artículo 35:** se solicitó la eliminación de lo relativo a la trascendencia;
- **Artículo 39:** referente al efecto vinculante de los resultados del plebiscito, se solicitó replantear los mismos para el caso de los plebiscitos de carácter estatal el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. En cuanto a los plebiscitos de carácter municipal el efecto vinculante se propone de conformidad con lo siguiente: a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, y d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;
- **Artículo 40:** referente al referéndum constitucional, se acordó una redacción uniforme del primer y segundo párrafo;
- **Artículo 42:** se acordó trasladarlo al capítulo de disposiciones generales, así como la eliminación de lo relativo a la inscripción del Padrón Electoral como requisito para participar en los procesos de consulta, ya que basta con la inscripción en la Lista Nominal;
- **Artículo 43:** se traslada el contenido al artículo 50 relativo a la estructura y suficiencia presupuestal para la realización de los instrumentos de participación ciudadana;
- **Artículo 44:** referente a los trabajos de organización, se solicitó agregar explícitamente los instrumentos de plebiscito y referéndum;
- **Artículo 46:** referente a las jornadas de consulta, se solicitó la incorporación de los centros de votación en el caso de los procesos que se celebren fuera de la jornada electoral y la incorporación de mesas directivas de casilla en caso de que la jornada de consulta se celebre simultáneamente con una jornada electoral. Así mismo, se estableció la integración

de los centros de votación como sigue: conformadas al menos, por seis ciudadanas o ciudadanos, que ejercerán las funciones de presidente, secretario, dos escrutadores y, en su caso, dos suplentes generales, con las atribuciones que, a los miembros de la mesa directiva de casilla establece la LEEBC;

- **Artículo 49**, referente al proceso de consulta, se solicitó trasladar el contenido del artículo al diverso 46;
- **Artículo 51**: referente al contenido de las boletas para la emisión del voto en las jornadas de consulta, en el inciso a) se mueve el orden quedando de la siguiente manera: Entidad, Municipio y Distrito Electoral;
- **Artículo 53**: referente a la difusión se acordó que se modificara el contenido para que se estableciera la prohibición de difusión en los mismos términos de la reforma constitucional en materia de revocación de mandato;
- **Artículo 54**: se solicitó la eliminación del artículo por considerarse innecesario su contenido, y
- **Artículo 55**: se propuso la unificación con el artículo 56 relacionados con cómputo y declaración de validez de los resultados de los instrumentos de participación ciudadana, en los términos establecidos en los lineamientos de cómputo que para tal efecto apruebe el Consejo General.

La Comisión determinó decretar un receso en la reunión referida, a fin de continuar en fecha posterior.

23. El 29 de enero de 2020, la Comisión reanudó la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente; la C. Lorenza Gabriela Soberanes en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo, y el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California.

En esta reunión, se analizaron y discutieron los artículos 59 al 100. Se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y los asistentes, a continuación, se plasman los artículos de los cuales se acordaron cambios o adiciones.

- **Artículo 59:** Se solicitó como prohibición de materias objeto de Iniciativa Ciudadana aquellas relacionados con el régimen interno y de organización de los Poderes del Estado, así como de los Ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos del Estado, y aquellas que restrinjan los derechos humanos;
- **Artículo 60:** se solicitó que los formatos para presentar iniciativas ciudadanas los elaborara el Instituto Electoral y que se encontraran en el portal de internet para su descarga y consulta, así como la disponibilidad de los formatos para personas con discapacidad visual, y lenguas indígenas;
- **Artículo 61:** se eliminó lo referente a las Organizaciones de la Sociedad Civil contenidos en los párrafos primero y segundo;
- **Artículo 62:** se estableció el plazo máximo de dos meses para que el pleno del Poder Legislativo del Estado votara una iniciativa declarada procedente;
- **Artículo 65:** se solicitó adecuar el contenido del artículo en términos de lo establecido en la Iniciativa Ciudadana Estatal;
- **Artículo 67:** correspondiente al resultado vinculante del instrumento de consulta popular trasladarlo al final del capítulo;
- **Artículo 68:** se solicitó eliminar lo correspondiente a la trascendencia;
- **Artículo 71:** se dispuso incorporar el contenido del artículo al apartado de disposiciones generales;
- **Artículo 72:** se dispuso incorporar el contenido del artículo a al apartado de disposiciones generales, y
- **Artículos del 74 al 100:** el articulado abarca el procedimiento desde la presentación del instrumento hasta los resultados, por lo que se propuso incluir en un procedimiento común para plebiscito, referéndum y consulta popular.

La Comisión determinó decretar un receso en la reunión referida, a fin de continuar en fecha posterior.

24. El 04 de febrero de 2020, la Comisión reanudó la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, y el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California.

En esta reunión se presentó por parte de la Comisión a los presentes el análisis y discusión de la propuesta referida, en esta reunión, la dinámica, contraria a las reuniones anteriores, fue continuar con el instrumento relativo a la Revocación de Mandato, figura regulada en los artículos del 143 al 153 del Proyecto de Nueva Ley, no así con el orden del articulado, por lo cual se inició con el análisis de dichos artículos para posteriormente continuar con el análisis de los artículos del 101 al 114.

En razón de lo anterior, se plasman en primer término las modificaciones o adiciones a los artículos correspondientes al instrumento de revocación de mandato.

- **Artículo 143:** se eliminó la posibilidad de solicitar dicho instrumento para la revocación de Diputados Locales, Municipales de los Ayuntamientos, Regidurías de los Ayuntamientos, Titular de la Sindicatura Municipal, quedando para efectos de este artículo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Así mismo, se determinó como única causal para la solicitud de la revocación de mandato la relativa a la pérdida de la confianza, en términos de la reforma constitucional de la materia;
- **Artículo 145:** se añadió el plazo de tres meses para solicitar el inicio del instrumento una vez concluida la mitad del periodo constitucional del cargo,
- **Artículo 146:** se determinó que el porcentaje requerido para la solicitud del instrumento además del diez por ciento de la Lista Nominal, que dicho porcentaje se encontrara distribuido en la mitad más uno de los municipios del Estado, y que estuviera distribuido cuando menos el 2% en cada uno de los municipios;
- **Artículo 147:** se eliminó el artículo por referirse a la revocación de mandato de diputados, y
- **Artículo 148:** se eliminó el artículo por referirse a la revocación de mandato de autoridades municipales.

Ahora bien, una vez concluido el análisis de la revocación de mandato, se continuó con el orden del articulado de la reunión precedente, esto es, a partir del artículo 101 al 114. Los cambios que en los artículos referidos, son los siguientes:

- **Artículo 101:** referente al Cabildo Abierto se elimina el párrafo ocho por considerarse que el Instituto Electoral no se encuentra facultado para tomar medidas en relación con las propuestas, toda vez que la autoridad ante la que se presenta y desarrolla el instrumento es el Ayuntamiento;
- **Artículo 102:** se modificó el párrafo 6 para añadir que las ciudadanas y ciudadanos del municipio preferentemente, deben exponer en su solicitud los antecedentes y propuesta de solución del asunto de interés público que pretenden someter a cabildo abierto. Así mismo, se añadió el párrafo 8 para determinar que lo no previsto en el capítulo de dicho instrumento, debía observarse en lo dispuesto en la normatividad aplicable de los Ayuntamientos, y

- **Artículo 103 al 105:** se solicitó el análisis de las disposiciones relativas al instrumento de Congreso Abierto para determinar el procedimiento acorde con la naturaleza del instrumento.

A partir del **artículo 107** se encuentra regulado el Presupuesto Participativo, instrumento que generó un gran debate entre los asistentes a la reunión, pues se realizaron diversos comentarios en relación con la procedencia e instrumentación del mismo. Siendo medularmente modificados los artículos siguientes:

- **Artículo 107:** se determinó que el ámbito territorial de aplicación del instrumento fuesen los Ayuntamientos, en sus respectivas colonias;
- **Artículo 110:** se eliminó el contenido del artículo por referirse a principios que ya se encuentran contenidos en el Proyecto de Nueva Ley;
- **Artículo 111:** se incorporó el contenido del artículo al capítulo de disposiciones comunes;
- **Artículo 114:** se sugirió la modificación de la integración de la Comisión para que se conformara por un número impar de integrantes, así como la eliminación del representante del Consejo Coordinador Empresarial del Estado.

La Comisión determinó decretar un receso en la reunión referida, a fin de continuar en fecha posterior.

25. El 06 de febrero de 2020, la Comisión reanudó la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente el Consejero Presidente, C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, y el C. Luis Eduardo Ruíz Sánchez, Representante de Morena ante la Comisión.

En esta reunión se presentó por parte de la Comisión a los presentes, el análisis y discusión de la propuesta de un nuevo articulado, conteniendo 4 títulos, 22 capítulos y 76 artículos, los cuales se expusieron a los asistentes.

Así mismo, se presentó la propuesta del nuevo procedimiento común para los instrumentos de participación ciudadana: plebiscito, referéndum y consulta popular. Una vez realizada la exposición de la propuesta de reestructuración del proyecto a la modificación del articulado derivado de los múltiples comentarios vertidos en las reuniones precedentes, se continuó con la revisión de los artículos correspondientes al Presupuesto Participativo a partir del artículo 119, a saber:

- **Artículo 119:** referente al Presupuesto Participativo Municipal, se acordó aumentar el porcentaje del 3% al 4% correspondiente a la asignación de presupuesto.

Se continuó con un amplio debate en torno a la figura del Presupuesto Participativo por lo que se solicitó a la Secretaría Técnica una propuesta de nuevo articulado para dicho instrumento.

- **Artículos del 127 al 142:** se acordó la eliminación del instrumento de Panel de Revisión, de este proyecto, atendiendo a su similitud con los instrumentos de Congreso Abierto e Iniciativa Ciudadana. Además de la complejidad para su instrumentación al ser una figura retomada de países extranjeros sin que existan antecedentes en la legislación mexicana para llevarlo a cabo,
- **Artículo 154:** Se reordenó el contenido del artículo, el párrafo 2 se trasladó al párrafo 1 y se eliminó el párrafo 3 por referirse a la organización de la consulta para creación y supresión de municipios a cargo del Poder Legislativo del Estado, cuestión que se modificó para que el Instituto Electoral organice dicho instrumento;
- **Artículo 156:** se determinó la eliminación de dicho artículo, pues el contenido ya se encontraba inmerso en el artículo correspondiente a la difusión de los instrumentos, y
- **Artículo Transitorio Quinto:** se modificó el plazo de 120 a 180 días para la emisión de reglamentos o lineamientos necesarios para la instrumentación del Proyecto de Nueva Ley por parte del Instituto Electoral.

La Comisión determinó decretar un receso en la reunión referida, a fin de continuar en fecha posterior.

26. El 10 de febrero de 2020, la Comisión reanudó la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California; el C. Luis Eduardo Ruíz Sánchez, Representante de Morena ante la Comisión, y el C. José Luis Ángel Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California.

En esta reunión se presentó por parte de la Comisión a los presentes el análisis y discusión los artículos 1 al 41 de la nueva propuesta de articulado de la Iniciativa de Ley, presentándose diversos comentarios por parte de los asistentes, entre los que destacan:

- Se solicitó modificar el nombre del Capítulo Segundo para quedar como Disposiciones comunes para Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular.
- **Artículos 10 y 11:** se solicitó modificar el contenido del artículo para que se enunciaran los instrumentos de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular de manera explícita, y no se hiciera referencia a otro artículo de la Ley;
- **Artículo 12,** referente a los temas que no se puede someterse a consulta de instrumentos de participación ciudadana y se analizó la pertinencia de incluir lo correspondiente a los actos que se emiten por ministerio de Ley y se solicitó la modificación del inciso d), para que se redactara en términos de la imposibilidad de restituir las cosas al estado en que se encontraban;
- **Artículo 14:** se solicitó modificar el contenido del artículo para que se enunciaran los instrumentos de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular de manera explícita;
- **Artículo 15:** se eliminó el inciso b) correspondiente a los instrumentos presentados por autoridades, toda vez que ya se encontraba señalado en el párrafo 2 de ese artículo, y
- **Capítulo Séptimo:** se modificó el orden de los capítulos para quedar el capítulo séptimo para regular la Iniciativa Ciudadana y el Capítulo Octavo el Presupuesto Participativo.

Una vez revisado el contenido de la nueva propuesta de articulado, se continuó con el debate en torno a la figura del Presupuesto Participativo presentada en la reunión, solicitándose la presentación de un procedimiento más sencillo, tomando como referencia la distribución geográfica del Estado de Baja California.

La Comisión determinó decretar un receso en la reunión referida, a fin de continuar en fecha posterior.

27. El 13 de febrero de 2020, la Comisión reanudó la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el estudio, análisis y discusión del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunión de trabajo asistieron por parte de la Comisión; el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente, la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, y como invitada a la reunión de trabajo la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral. Por los partidos políticos asistieron el C. Luis Alberto Aguilar Coronado, Representante Suplente del Partido Acción Nacional; el C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, el C. Luis Eduardo Ruiz Sánchez, Representante de Morena ante la Comisión.

En esta reunión se presentó por parte de la Comisión a las y los presentes el análisis y discusión de la propuesta reestructurada de la figura del Presupuesto Participativo, regulada en los artículos 55 al 60 presentándose las modificaciones siguientes:

- **Artículo 60:** Se modificó para incluir una disposición donde se estableciera que en caso de que alguna colonia no presentara proyecto para someterse a Presupuesto Participativo, el Ayuntamiento estaría obligado a realizar obras en las colonias no se hubieran presentado proyectos, a fin de ejercer los recursos destinados a esta figura ciudadana, y así evitar el regreso del recurso a la hacienda pública, y además impulsar las mejoras en cada una de las colonias de los Ayuntamientos.

28. El 17 de febrero de 2020, la Comisión con fundamento en los artículos 23, numeral 2, 25, numerales 1, 2 y 3, inciso d) y, 30, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen número quince por el que se aprueba la **"INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**, a esta sesión asistieron por parte de la Comisión el C. Daniel García García, en su carácter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Olga Viridiana Maciel Sánchez, ambas en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvo presente, la C. Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco; el C. Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda. Por los Partidos Políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; el C. Fernando Mata Lizárraga, Representante Suplente del Partido de Baja California; el C. Luis Eduardo Ruíz Sánchez, Representante de Morena ante la Comisión; José Luis Ángel Oliva Rojo, Representante del Partido Encuentro Social de Baja California.

En ese sentido, agotada su discusión, se procedió a someter a votación el proyecto de dictamen número quince, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión presentes.

Con base en los antecedentes previos, y

CONSIDERANDO

I. Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 45, fracción II, de la Ley Electoral, y 30, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior, la Comisión tiene como atribución **"Conocer y dictaminar los estudios y anteproyectos de reformas y adiciones a la legislación electoral"**.

En ese sentido resulta competente para dictaminar sobre el **"Proyecto de Nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California"** formulado por el Departamento de Procesos Electorales, Participación Ciudadana y Educación Cívica, y presentado ante la Comisión, a fin de determinar, en su caso, su viabilidad.

Por su parte, el Consejo General es competente para aprobar la iniciativa de conformidad con el artículo 46, fracción I, de la Ley Electoral, que establece como atribución de dicho órgano colegiado el **aprobar las iniciativas de Ley o Decreto en materia electoral para ser enviadas al Congreso del Estado**.

II. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, Apartado C, Numeral 9 de la Constitución General, las elecciones locales en las entidades federativas estarán a cargo de organismos públicos locales y que además cuentan con la facultad de ejercer funciones de organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local.

III. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, Apartado B, de la Constitución Local, en relación con el artículo 33, de la Ley Electoral, dispone que la organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público, autónomo e independiente denominado Instituto Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario de la autoridad electoral en la entidad, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en los términos de la ley en la materia.

En el ejercicio de esta función pública, el Instituto Electoral, se regirá bajo los principios rectores, de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Así mismo, establece como actividad que el Instituto Electoral desempeñará de forma directa e integral, entre otras, la siguiente:

ARTÍCULO 5. ...

[...]

APARTADO B. del Instituto Estatal Electoral.

[...]

VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;

[...]

Por su parte, el Apartado C, de la citada disposición constitucional mandata, que los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la Consulta Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana, así mismo que, la Ley respectiva fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana; igualmente establecerá las reglas que permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos, sujetándose a las bases que establece la Constitución Local.

IV. Que de acuerdo con el artículo 27, fracción I, de la Constitución Local, es facultad del Congreso del Estado, entre otras, la de legislar sobre todos los ramos que sean competencia del Estado y reformar, abrogar, y derogar las leyes y decretos que hubiere expedido, así como participar en las reformas a la Constitución Local, observando para ello, los requisitos establecidos.

V. Que el artículo 28, fracción V, de la Constitución Local faculta a este Instituto Electoral para presentar iniciativas de ley y decretos, en los siguientes términos:

Artículo 28. La iniciativa de las leyes y decretos corresponde

[...]

V. Al Instituto Estatal Electoral exclusivamente en materia electoral, y

[...]

De la lectura de la norma citada se advierte que este Instituto Electoral cuenta con la facultad señalada, la cual se limita exclusivamente a la materia electoral.

VI. Que, conforme con lo establecido en el artículo 35, de la Ley Electoral, son fines del Instituto Electoral los siguientes:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;
- II. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de sus obligaciones;

- III. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado;
- IV. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
- V. Realizar los procesos de consultar popular, plebiscito y referéndum en los términos de la ley de la materia, y
- VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política.
(énfasis añadido)

VII. Que el artículo 36, fracción I, de la Ley Electoral, señala que el Instituto Electoral se integra, entre otros órganos, por:

- I. Un Órgano de Dirección, que es el Consejo General del Instituto;
- [...]
- III. Órganos Técnicos que son:
 - a) Las comisiones permanentes del Consejo General;
 - [...]

VIII. Que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios rectores de la materia guíen las actividades del Instituto Electoral, según se prevé en el artículo 37 de la Ley Electoral.

IX. Que, dentro del marco competencial del Consejo General, encontramos en el artículo 46, fracciones I y II, de la Ley de Electoral, las atribuciones de aprobar las iniciativas de ley o decreto en materia electoral para ser enviadas al Congreso del Estado, así como para expedir los acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Electoral.

X. Que según lo señala el artículo 47, fracción XIII, de la Ley Electoral, es atribución del Consejero Presidente del Consejo General, el remitir al Congreso del Estado las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el Consejo General.

XI. Que de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, las iniciativas que se presenten al Congreso del Estado podrán ser:

- a) Iniciativa de ley o de reformas a una ley vigente;
- b) Iniciativa con proyecto de Decreto, y
- c) Proposición de acuerdo económico.

XII. Que, en consonancia con lo señalado en el considerando previo, los diversos 111, 112, 113 y 114, de la referida Ley Orgánica del Poder Legislativo, definen los tipos de iniciativa señalados, en los siguientes términos:

ARTICULO 111. *Son Iniciativas de ley, las que tiendan a una resolución que contemple la formación de un ordenamiento jurídico que no existía o que abrogue uno anterior.*

ARTICULO 112. *Son Iniciativas de reformas de ley, las que tiendan a introducir reformas consistentes en modificación, derogación o adición a un ordenamiento jurídico vigente.*

ARTICULO 113. *Es Iniciativa con proyecto de decreto aquella que tienda a una resolución que otorgue derechos o imponga obligaciones a determinadas personas físicas o morales en mandamientos particulares y concretos.*

De las hipótesis legales transcritas, es posible arribar a la conclusión que la iniciativa que formula este Instituto Electoral encuadra en la señalada en el artículo 111, toda vez que la misma pretende crear un ordenamiento jurídico y abrogar uno vigente, como en el caso lo es, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California señalada en el antecedente 1, del presente Dictamen.

XIII. Que el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California estatuye que toda iniciativa debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentarse al Presidente del Congreso por escrito y firmada, y
- Acompañarse de una exposición de motivos, la cual debe contener:
 - Autor o autores,

- Las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una Ley, y
- Artículo de la iniciativa o decreto.

XIV. Que el diverso 120 de la multicitada Ley Orgánica, precisa que las Comisiones de Dictamen Legislativo respectivas del Congreso del Estado, anunciarán, a los diversos entes públicos, entre los que se encuentra al Instituto Electoral, cuando menos con cinco días de anticipación la fecha de la sesión, a efecto de que concurra al desahogo de las sesiones si lo estima conveniente; a presentar o hacer valer sus opiniones o alegatos, cuando la iniciativa se refiera a los asuntos de carácter electoral.

XV. Que tal y como se menciona en el antecedente 10, del presente dictamen, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California resolvió el Recurso de Inconformidad RI-21/2018 y acumulado, determinando que el Proyecto de Nueva Ley de referencia sea sometido al conocimiento del Consejo General, a fin de que se analice, discuta, delibere y, en su caso, apruebe, cumpliendo con las formalidades del procedimiento para una iniciativa de ley o reforma en materia electoral, en términos de la Ley Electoral y del Reglamento Interior.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que del análisis integral dicha sentencia se desprende que según los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir las tesis de rubros "PARTIDOS POLÍTICOS. TIENEN DERECHO A INTEGRAR ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES RESPECTO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LEGISLACIÓN DE SONORA)" y "PLEBISCITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. PROCEDE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL", las cuales señalan que los conceptos de comicios y elecciones, deben entenderse referidos a los procesos instaurados para la utilización de los instrumentos de democracia directa, a través de los cuales el pueblo ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario en decisiones o actos de gobierno, como son los procesos de participación ciudadana, toda vez que los instrumentos o procesos de democracia directa quedan comprendidos dentro de la materia electoral.

Mismo razonamiento fue realizado por la Sala SUP-JE-33/2017 al establecer que la materia electoral comprende entre otros aspectos:

[...]

- El régimen democrático en sus vertientes directa – tratándose de figuras como el plebiscito y el referéndum, entre otras- e indirecta, mediante la elección de representantes populares.
- Los derechos político-electorales del ciudadano, tales como el derecho al voto en ambas vertientes, el de asociación política (en materia electoral) y el de acceso y efectivo ejercicio del cargo, así como todos los derechos fundamentales que aun cuando su núcleo no sea estrictamente electoral, se encuentren vinculados con este campo del Derecho.
- Los principios y reglas que norman la organización y la celebración de cada una de las etapas y actos jurídicos que se desarrollan en los procesos electorales, a fin de garantizar que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas.

[...]

De esta manera, para determinar que un acto es de naturaleza electoral, no basta que la normatividad cuestionada o la norma en que se apoya, se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral o provenga de una autoridad formalmente electoral, por lo que además es fundamental valorar el contenido material que tiene la normatividad, acto o resolución impugnado, según se trate, para establecer si es de índole electoral. Para tal fin, debe considerarse que la materia electoral abarca las normas, actos y resoluciones relacionados con los procesos comiciales que se celebran para renovar a los poderes públicos mediante el sufragio ciudadano, así como aquellas normas, determinaciones y actos enlazados a tales procesos o que deban influir en ellos de alguna manera y, los vinculados a la actividad política referente a la multifacética participación de los gobernados en la cosa pública.

[...]"

XVI. Que, a manera de resumen, el Proyecto de Nueva Ley remitido para el análisis correspondiente por parte de la Comisión, contiene una iniciativa con un total de 160 artículos organizados en 2 títulos, los que se dividen en 12 capítulos, así como 8 artículos transitorios. En ese sentido, se describe el contenido del Proyecto de Nueva Ley:

TÍTULO PRIMERO "DISPOSICIONES PRELIMINARES".

Este título contiene un capítulo único se denomina "Objeto de la Ley", en el que se establecen además del objeto de la ley el cual se circunscribe a fomentar, impulsar, promover, consolidar y regular los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito de competencia estatal y municipal, indicando que la misma es de orden e interés público y de observancia

general. Cuestiones relativas a los instrumentos de participación ciudadana, sus principios rectores, un catálogo de derechos y obligaciones tanto para las autoridades como para los ciudadanos y la forma de interpretación y la supletoriedad de la ley, como a continuación se detalla.

Se establece que los instrumentos de participación ciudadana son el plebiscito; el referéndum; la iniciativa; la consulta popular; el cabildo abierto; el congreso abierto; el gobierno abierto; el presupuesto participativo; el panel de revisión, y la revocación de mandato.

Se establecen además los principios rectores de la participación ciudadana entre los que se encuentran la libertad, la democracia, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien general, la subsidiariedad, la legalidad, la sustentabilidad, la tolerancia, la equidad, la no discriminación y la máxima publicidad.

Por otro lado, se establece un sistema de distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo del Estado; el Congreso del Estado; los Ayuntamientos del Estado; el Instituto Estatal Electoral de Baja California, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Aunado a lo anterior, se indica la forma en que deberá ser interpretada la ley y, la forma de suplir las deficiencias de la misma, remitiendo para tal efecto a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Baja California, los acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, los criterios obligatorios establecidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y los principios generales del derecho.

Se establece además un glosario para permitir evitar reproducciones de locuciones extensas, en virtud de su uso reiterado en el anteproyecto, de este modo se hace menos pesado el estilo de las disposiciones contenidas.

Finalmente, se establecen los derechos y obligaciones tanto para los ciudadanos como para las autoridades encargadas de materializar las disposiciones previstas en la ley.

TÍTULO SEGUNDO "DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Este título contiene 11 capítulos, a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO "DEL PLEBISCITO Y REFERÉNDUM".

Se establece el objeto del plebiscito el cual se resume en consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a los actos del titular del Poder Ejecutivo, de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado, trascendentes para la vida pública del Estado; estableciendo la oportunidad para la presentación de la solicitud respectiva, la cual se construye a los 60 días hábiles siguientes de aprobado y publicado el acto de que se trate, en el periódico oficial del Estado.

Así mismo, se establece cuando los actos de referencia son trascendentes cuando se traten de las siguientes materias: medio ambiente, agua y saneamiento; salud y asistencia social; seguridad pública; derechos humanos; comunicaciones, vialidad y transporte; educación, cultura y turismo; desarrollo económico; y desarrollo urbano.

De igual forma, se indica la facultad de diferentes entes para realizar la solicitud de plebiscito entre los que se encuentra: el gobernador; el congreso del estado con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; los ayuntamientos, y los ciudadanos que tenga vecindad en el estado, que representen cuando menos el 0.5% del electorado de la lista nominal utilizada en la elección local ordinaria inmediata anterior, o en su caso, la correspondiente al municipio respectivo.

Por otro lado, se establece la competencia del Instituto como responsable de la organización y desarrollo del proceso de plebiscito con la excepción del plebiscito relativo a la creación o supresión de municipios, ya que, en esa materia será el órgano responsable el Congreso del Estado.

Finalmente, por lo que respecta al plebiscito, se establecen las materias relativas en contra de las cuales no procede la realización de un plebiscito, entre dichas restricciones se encuentran: los egresos del Estado, el régimen interno y de organización de la Administración Pública del Estado; los actos de índole tributario o fiscal, los actos en materia de expropiación o de limitación a la propiedad particular, y los demás actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables y reglamentos respectivos.

Por otra parte, también se establece en este capítulo lo relativo al referéndum, el cual se entiende como el proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Local; la creación, modificación, reformas, adición, derogación o abrogación de las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado, y la creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de los reglamentos que sean trascendentes para la vida pública del ámbito territorial que se trate.

Al igual que para el plebiscito, se establece la oportunidad de interposición de la solicitud, la cual debe ser presentada dentro de los 60 días hábiles siguientes de que la norma de referencia sea publicada en el periódico oficial o gaceta municipal, según corresponda.

Se establecen además los tipos de referéndums que existen, atendiendo a la materia y a su eficacia, así como los entes que se encuentran facultados para la solicitud del mismo, entre los que se hallan el gobernador; los ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando menos dos de estos, y los ciudadanos que representen cuando menos el 1.5% de la lista nominal utilizada en la elección local ordinaria inmediata anterior, para referéndum constitucional; y el 0.5% para referéndum legislativo.

Aunado a lo anterior, se indica la competencia del Instituto, como órgano responsable de la organización y desarrollo del proceso de referéndum y las materias que no podrán someterse a referéndum y que se limita a las siguientes materias: Tributario o fiscal; egresos del Estado; régimen interno y de organización de la administración pública del Estado; regulación interna del Congreso del Estado; regulación interna del Poder Judicial del Estado, y las que determinen la Constitución Local, y demás leyes.

En cuanto hace a la sustanciación de estos instrumentos de participación se establece la necesidad de presentar un aviso de intención por parte de los ciudadanos dentro de los 30 días posteriores a la publicación en el periódico oficial del Estado del acto o de la ley que se pretende someter a consulta.

Para que posteriormente el Consejo General emita una constancia acompañando los formatos respectivos para la obtención de las firmas, los cuales debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la ley.

Así mismo, se otorga a los ciudadanos que realizaron su aviso de intención un término de 90 días naturales para posteriores a la emisión de la constancia que acredita la presentación del aviso de intención para presentar su solicitud de plebiscito o referéndum la cual debe cumplir con los requisitos establecidos en el Proyecto de Nueva Ley y una vez realizado esto, se establece el procedimiento a seguir para darle el trámite correspondiente a la solicitud y una vez agotado el procedimiento y aprobada la procedencia, que se expida por parte del Consejo General la convocatoria de consulta respectiva.

Por otro lado, se establecen las causales de improcedencia de la solicitud de consulta, las cuales se limitan a que el acto o norma no sea trascendente para la vida pública, que el acto o norma no sea objeto de plebiscito o referéndum; que el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea; la solicitud realizada por ciudadanos, no cuente con firmas de apoyo auténticas, los ciudadanos firmantes no aparezcan incluidos en la Lista Nominal, o el porcentaje sea menor al requerido por esta Ley, el acto objeto del plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad; la norma o normas objeto de referéndum se hayan modificado; la norma o normas objeto del referéndum no existan, y el escrito de solicitud sea insultante, atente contra las instituciones o sea ilegible o su exposición de motivos no contenga una relación directa entre los motivos expuestos y el acto o norma.

Se establecen además entre otras cosas, la facultad del Consejo General de ampliar los plazos establecidos en la ley, el carácter vinculatorio de los resultados del plebiscito o referéndum, los requisitos que deban cumplir los ciudadanos que pretendan participar en las consultas, las etapas de las consultas y la calificación de la validez del proceso de plebiscito y de referéndum.

B) CAPÍTULO SEGUNDO "DE LAS INICIATIVAS".

Con respecto a las iniciativas, se establecen dos tipos, las de carácter estatal y las municipales, y se conceptualizan las mismas como los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos podrán presentar al congreso del estado, o al ayuntamiento de que se trate, los proyectos de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes, decretos o reglamentos.

Se establecen además materias que no podrán ser objeto de iniciativa ciudadana, entre las que se contemplan las concernientes al régimen interno de la Administración Pública Estatal o Municipal; la regulación interna del Congreso del Estado, y la regulación interna del Poder Judicial del Estado.

Por otra parte, se contempla el procedimiento a seguir para el trámite de las mismas, así como la facultad de las Organizaciones de la Sociedad Civil de cualquier naturaleza, para presentar por conducto de su Presidente, iniciativas de leyes o de reformas a leyes, siempre y cuando hubiesen sido aprobadas por dos terceras partes del total de los integrantes de su asamblea general, y sean relativas al objeto para el cual fueron constituidas, el mismo derecho se les reconoce a las instituciones de Educación Superior del Estado, por conducto de su Rector, y a los ciudadanos en un número de 500 ciudadanos de la Lista Nominal para iniciativa a nivel estatal y 200 a nivel municipal.

C) CAPÍTULO TERCERO "DE LA CONSULTA POPULAR".

Se define a la misma como el instrumento a través del cual el Ejecutivo del Estado, el Congreso del Estado, los Ayuntamientos y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas temas de amplio interés en el Estado o Municipio.

Se establece que el resultado de la misma es vinculatorio cuando la participación total corresponda, al menos al diez por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores con corte a la fecha que se haga la consulta.

Se indica además que se consideran temas trascendentes cuando repercutan en la mayor parte del territorio estatal o municipal, e impacten en una parte significativa de la población del Estado o municipio. Así mismo, se establecen los requisitos que debe reunir la ciudadanía para participar en las consultas populares, así como las restricciones de las consultas populares cuyas propuestas no deben contener restricciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución General, la Constitución Local, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado o Municipio y la seguridad nacional.

De igual forma se faculta al Poder Ejecutivo, al Congreso del Estado y al 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores utilizada en la elección local ordinaria inmediata anterior, para solicitar una consulta popular, la cual deberá presentarse al Congreso del Estado o la Secretaría del Ayuntamiento que corresponda.

Al igual que para el referéndum o el plebiscito se contempla la presentación de un aviso de intención previo a la presentación de la solicitud correspondiente, sus requisitos, la obligación de la autoridad de prevenir a los solicitantes para que subsanen errores u omisiones; el contenido de la convocatoria respectiva en caso de resultar procedente la solicitud, la obligación de dar publicidad a la misma; las etapas del proceso y la distribución de competencias entre las diversas autoridades involucradas en la organización de la consulta.

D) CAPÍTULO CUARTO "CABILDO ABIERTO".

Se contempla al Cabildo Abierto, como un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebración de una sesión, en la cual los habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento. Estableciéndose reglas claras y precisas para que los ciudadanos presenten sus peticiones y las mismas sean atendidas por el órgano. Así mismo, se contempla la calendarización de las sesiones de cabildo abierto de forma anual, con la finalidad de que los ciudadanos sepan cuando se realizarán las mismas.

E) CAPÍTULO QUINTO "CONGRESO ABIERTO"

Se establece el Congreso Abierto como un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual, quienes integran el Congreso del Estado, dialogan con la ciudadanía para generar, reformar o abrogar las normas que rigen la vida pública, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como la calidad, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de la administración pública, la impartición de justicia, el manejo del presupuesto público y otros asuntos de la vida pública. Lo anterior, siempre y cuando los ciudadanos requieran participar de manera activa en la sesión del Congreso del Estado o en mesas técnicas legislativas, para que, mediante el diálogo y la deliberación, se dé solución a las exigencias de los diversos sectores sociales, la trascendencia del asunto a tratar lo vuelva de interés general para los ciudadanos, o se trate sobre asuntos relacionados a legislar en materia de derechos humanos, rendición de cuentas o reformas a la Constitución Local.

Se encuentran facultados para promover la celebración del congreso abierto las organizaciones de la sociedad civil, Consejos ciudadanos, Cámaras empresariales y Colegios de profesionistas, la ciudadanía cuando lo soliciten por lo menos 200 ciudadanos inscritos en la lista nominal vigente o el Presidente de la Mesa Directiva o los Presidentes de las Comisiones del Congreso del Estado.

Así mismo, se estatuye que el proceso de discusión, análisis y votación de la reforma constitucional o creación o modificación de una Ley deberá ser bajo el principio de máxima publicidad y transparencia proactiva. Para lo que se deberán implementar mesas técnicas legislativas y foros virtuales, donde la ciudadanía participe de manera efectiva y quede constancia de los estudios, aportaciones y recomendaciones hechas por los participantes durante el proceso de análisis y discusión.

F) CAPÍTULO SEXTO "GOBIERNO ABIERTO"

Se presenta al gobierno Abierto como un mecanismo que permite la participación democrática de toda persona en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas públicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. El cual se rige por la transparencia, la participación y la colaboración, cuyo objetivo es la rendición de cuentas.

A través de este mecanismo, se propone obligar a la autoridad para que realice anualmente una convocatoria con la finalidad de definir en conjunto con la sociedad civil un plan de trabajo anual que permita atender las problemáticas más relevantes, con compromisos específicos, concretos, incluyentes, estratégicos y medibles; auxiliándose para ello de conversatorios, glosas ciudadanas, paneles de discusión y mesas técnicas de trabajo, para la definición de las problemáticas y compromisos que se asumirán.

G) CAPÍTULO SÉPTIMO "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"

Se plantea el Presupuesto Participativo como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplicarán recursos públicos en proyectos específicos y cuyo objetivo es recuperar el espacio público, beneficiar a la mayoría de los habitantes del Estado o Municipios, propiciar una distribución democrática de los recursos públicos de que disponen el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal correspondiente, estrechar la relación entre las autoridades gubernamentales y los organismos de la sociedad civil y ciudadanos en general y fomentar la democracia participativa en la gestión pública.

Y el cual debe ser destinado a Obras y servicios; equipamiento e infraestructura urbana; sustentabilidad ecológica, salud, grupos vulnerables, prevención del delito y tecnología de la información o actividades culturales, deportivas y recreativas.

Acotando que el Presupuesto Participativo se guiará por los principios de solidaridad, subsidiariedad, bien común, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas y puede ser de índole estatal o municipal

H) CAPÍTULO OCTAVO "DEL PANEL DE REVISIÓN"

Se estatuye como un instrumento por el cual el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los Ayuntamientos del Estado hacen participe a los ciudadanos en el proceso de creación o reforma de una Ley o Reglamento, por medio de la deliberación grupal. Acotando la procedencia del mismo, pues no es aplicable a la materia fiscal; a los egresos del Estado; al régimen interno y de organización de la Administración Pública del Estado, del Congreso del Estado, del Poder Judicial del Estado, y las demás que determine la Constitución Local, y demás leyes.

Se establece que puede ser solicitado por el Poder Ejecutivo; el Poder Legislativo, o el Ayuntamiento de cada Municipio. Los requisitos que debe colmar la solicitud, el procedimiento para solicitar el panel de revisión, los requisitos de la convocatoria para la integración del mismo y la forma de designar a sus integrantes; las etapas del proceso de organización.

I) CAPÍTULO NOVENO "REVOCACIÓN DE MANDATO"

Para efectos del Proyecto de Nueva Ley, la Revocación de Mandato, es un instrumento de participación ciudadana, exclusivo de los ciudadanos del estado, mediante el cual deciden que un representante de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en esta Ley; y puede solicitarse para el titular del Ejecutivo del Estado, las diputaciones Locales, por ambos principios y los municipios.

Se establece que el Instituto será la única instancia facultada para recibir la solicitud de revocación de mandato, decidir sobre su procedencia, organizar y realizar la consulta, así como hacer la declaración de validez de los resultados en el ámbito distrital, municipal o estatal según corresponda, que la misma podrá solicitarse transcurrida la mitad del periodo constitucional correspondiente al ejercicio del cargo del representante electo; así mismo, se establecen los requisitos que deberá colmar la solicitud y el trámite y forma de sustanciación del mecanismo.

Finalmente se contemplan las causales para solicitar la misma y los requisitos para participar por parte de la ciudadanía.

J) CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO "DEL FINANCIAMIENTO".

Se establece que los gastos que se originen por la implementación de consultas de instrumentos de participación ciudadana deberán ser erogados por sus iniciadores, por lo que el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, los Ayuntamientos y el Instituto Electoral deberán establecer en sus presupuestos de egresos anuales un rubro para tal efecto, y para los instrumentos que les corresponda, y que el presupuesto que no se ejerza debe ser devuelto a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

K) CAPÍTULO DÉCIMO "DEL RECURSO".

Se establece que el recurso de inconformidad deberá interponerse ante la autoridad que realizó el acto o resolución, dentro de los cinco días hábiles siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugna, sujetándose para tal efecto a lo establecido en la Ley electoral; así mismo se indica quien se encuentra facultado para interponer el mismo y que la competencia para sustanciar el mismo pertenece al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Se establecen 8 artículos transitorios relativos al inicio de vigencia de la ley, la abrogación de la Ley de Participación expedida el 16 de febrero de 2001, la derogación de todas las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la Ley; a la tramitación de los procesos de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta norma estatal, la adecuación y creación de reglamentos, lineamientos y demás documentos necesarios referentes a los instrumentos de participación ciudadana; la implementación de una campaña masiva de educación, capacitación, difusión y fomento de la ley y, a las modificaciones necesarias en el Presupuesto de Egresos del Ejecutivo y Legislativo del Estado, de los Ayuntamientos y del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

XVII. Que tal como se menciona en el antecedente 17 de este Dictamen, el pasado 20 de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución General, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

Las reformas más relevantes en materia de Revocación de Mandato y que son de impacto en las entidades federativas, versan sobre lo siguiente:

- a) La obligación de reformar las constituciones locales dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto, a efecto de garantizar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local;
- b) Que la solicitud de Revocación de Mandato habría de plantearse dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad;
- c) Que dicho instrumento de participación ciudadana podría llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta;
- d) Que los efectos serían vinculantes cuando la participación correspondiera como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista nominal y la votación sea por mayoría absoluta, y
- e) Que la jornada de votación se debía efectuar en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales.

Con base en el Decreto referido, esta Comisión estimó necesario replantear la figura de la Revocación de Mandato prevista en el Proyecto de Nueva Ley, por lo que resultó necesario hacer una serie de modificaciones al articulado, tal como ya se expuso en el cuerpo de antecedentes de este Dictamen.

XVIII. Que tal y como se mandató en el Dictamen siete de esta Comisión, una vez hecha la declaratoria formal de conclusión del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, debían retomarse los trabajos de análisis del Proyecto de Nueva Ley.

En función de ello, esta Comisión desarrollo nueve reuniones de trabajo, con la finalidad de analizar acuciosamente el Proyecto de Nueva Ley, reuniones en las que se desarrollaron amplios debates entre los asistentes. En las reuniones referidas, se detectaron aspectos a considerar para la modificación del Proyecto de Nueva Ley, tales como disposiciones que regulaban un mismo tema dispersas en todo el ordenamiento, así como repetición innecesaria de disposiciones, razón por la que esta Comisión determinó generar una reestructuración del Proyecto de Nueva Ley; por ello, se creó un apartado de disposiciones comunes, en el que se regulara un nuevo procedimiento común aplicable para el plebiscito, referéndum y consulta popular.

En cuanto a las solicitudes de inicio de los instrumentos, esta Comisión propone la incorporación de un procedimiento más sencillo y accesible que propicie la participación de las ciudadanas y ciudadanos. Por lo anterior, durante el desarrollo de las reuniones de trabajo de referencia, se instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión la presentación de un nuevo articulado que recogiera las propuestas vertidas y que facilitara la comprensión y aplicación del Proyecto de Nueva Ley.

Derivado de lo expuesto, la Secretaría Técnica de la Comisión presentó una nueva propuesta de articulado que recogió los múltiples comentarios vertidos en las reuniones de trabajo por consejeras y consejeros electorales y representantes de partidos políticos, la cual consistió en una versión reestructurada del Proyecto de Nueva Ley, así como la inclusión de aspectos relevantes, de entre los cuales destacan los siguientes:

- a) Reestructuración del capitulado y articulado del Proyecto de Nueva Ley;
- b) Capítulo de disposiciones comunes para Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular;
- c) Nuevo procedimiento para los instrumentos de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, pues se eliminó el estudio de la trascendencia contemplado en la Ley de Participación Ciudadana vigente. Con este nuevo procedimiento se propone eliminar las trabas legales para llevar a cabo los instrumentos de participación ciudadana antes referidos y se busca fomentar el ejercicio de los mismos, tomando en consideración el respaldo de las ciudadanas y ciudadanos como el factor más relevante para llevar a cabo tales instrumentos;

- d) Se actualizó la figura de Revocación de Mandato, ya que esta se circunscribió únicamente para la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, en términos de la reforma constitucional en dicha materia;
- e) Se reconfiguró la figura del Presupuesto Participativo, se delineó un procedimiento sencillo para su implementación por parte de los Ayuntamientos, suprimiéndose la figura del presupuesto participativo estatal atendiendo a la naturaleza del instrumento, ya que este tiene por objeto dar herramientas a las ciudadanas y ciudadanos de las colonias de cada municipio para impulsar proyectos de beneficio para estas;
- f) Se suprimió la figura denominada Panel de Revisión, toda vez que de su análisis se concluyó que guarda una estrecha similitud con las figuras de Iniciativa Ciudadana y Congreso Abierto;
- g) Se reconfiguró la figura de Iniciativa Ciudadana, toda vez que el Proyecto de Nueva Ley contemplaba dos apartados para la Iniciativa Estatal y Municipal; sin embargo, se conjuntaron las disposiciones en un solo capítulo, haciendo la distinción atendiendo a su ámbito de aplicación, y
- h) Tomando en cuenta el compromiso de este Instituto Electoral con la inclusión y no discriminación, se incorporó al articulado el uso de lenguaje incluyente.

De conformidad con lo expuesto, esta Comisión construyó una Iniciativa de Ley, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, misma se agrega al presente dictamen como **ANEXO ÚNICO**, la cual contiene un total de 87 artículo divididos en 4 Títulos y 24 capítulos, así como un régimen transitorio de 8 artículos. El contenido de la Iniciativa de Ley, se describe de forma sintética de la siguiente manera:

TÍTULO PRIMERO "DISPOSICIONES GENERALES".

Este título contiene dos capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO "OBJETO DE LA LEY".

En ese capítulo se establece el objeto de la ley, el cual se circunscribe a fomentar, impulsar, promover, consolidar y regular los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito de competencia estatal y municipal, indicando que la misma es de orden e interés público y de observancia general. Se reconoce el derecho humano a la participación ciudadana, y define a esta última; se establece la obligación del Estado para garantizar la utilización de medios de comunicación, que permita entre otras cosas brindar difusión y educación en cuanto al desarrollo de una cultura democrática.

Asimismo, se plasma un glosario con el objeto de evitar reproducciones de locuciones extensas, en virtud de su uso reiterado en el ordenamiento legal, de este modo se hace menos pesado el estilo de las disposiciones contenidas.

Por otro lado, se establece un sistema de distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo del Estado; el Poder Legislativo del Estado; los Ayuntamientos del Estado; el Instituto Estatal Electoral de Baja California, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, los cuales en todo momento deberán fomentar y garantizar el respeto de los derechos previstos en la Ley.

Se indica además la forma en que deberá ser interpretada la ley y, la forma de suplir las deficiencias de la misma, remitiendo para tal efecto a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Baja California, los acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, los criterios obligatorios establecidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y los principios generales del derecho.

Por último, se establecen los principios rectores de la participación ciudadana que consisten en libertad, democracia, corresponsabilidad, solidaridad, bien general, subsidiariedad, legalidad, sustentabilidad, tolerancia, equidad, no discriminación, máxima publicidad y accesibilidad.

B) CAPÍTULO SEGUNDO "DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CIUDADANÍA".

Se establece lo correspondiente a la vecindad en el Estado; así como los derechos de los ciudadanos en cuanto a los instrumentos de participación ciudadana, de igual forma los requisitos a cumplir por la ciudadanía para participar en los procesos de consulta previstos en la Ley que nos ocupa.

TÍTULO SEGUNDO "DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA".

Este título contiene 11 capítulos, a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO "DE LOS INSTRUMENTOS".

Se enlistan los nueve instrumentos de participación ciudadana que conforman la Ley, mismos que son: Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular, Revocación De Mandato, Iniciativa Ciudadana, Presupuesto Participativo, Cabildo Abierto, Congreso Abierto y Gobierno Abierto.

B) CAPÍTULO SEGUNDO "DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR".

En este capítulo se integraron las disposiciones comunes en cuanto al procedimiento que se debe llevar a cabo para la realización del Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular con el fin de incorporar el mismo contenido en un solo capítulo y con ello evitar ser repetitivos de un procedimiento que es idéntico para estos tres instrumentos.

Además, se establece que las autoridades que podrán solicitar dichos instrumentos serán el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Legislativo del Estado, los Ayuntamientos del Estado, y las ciudadanas y los ciudadanos del Estado.

Por otro lado, se enlistan las restricciones en cuanto a los temas de consulta y las causales de improcedencia, también se establece el número de consultas que para cada jornada podrán presentar las autoridades, especificándose que las y los ciudadanos no encuentran limitación en este rubro, así como la prohibición de desistimiento de las solicitudes.

Asimismo, se establecen los requisitos del escrito de solicitud del instrumento, así como el trámite interno de verificación de dichos requisitos, y en su caso el derecho de audiencia de la parte solicitante.

En cuanto a la redacción de la pregunta, se desglosan los requisitos que esta deberá cumplir, entre los que destaca que deberá formularse en sentido claro y preciso de manera que genere una respuesta positiva o negativa; que deberá referirse directamente al acto, norma o tema objeto de la consulta; contener un solo enunciado por pregunta, y no contener posicionamientos y ningún tipo de juicio valorativo.

Por lo que se refiere a la revisión de los requisitos de la solicitud, se determina el procedimiento que la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica deberá seguir, entre lo que destaca que de encontrarse alguna inconsistencia o causal de improcedencia se otorgará la garantía de audiencia al solicitante, y cumplidos los términos en ella previsto se procederá a la emisión del proyecto de resolución, que deberá ser aprobado por el Consejo General Electoral, la cual deberá ser afirmativa y deberá ser notificada personalmente al solicitante junto con el formato de solicitud de firmas.

En cuanto a la recolección de las firmas, se desglosa el contenido mínimo de los formatos y la disponibilidad de los mismos; se prevé la recolección mediante mecanismos tecnológicos, el periodo de recolección y el término para su presentación ante el Instituto Estatal Electoral.

Aunado a lo anterior, se establece el procedimiento del Instituto Electoral para llevar a cabo la revisión y valoración de las firmas en colaboración con el INE, así como los plazos previstos para la otorgar garantía de audiencia.

En cuanto a los formatos para la presentación de las firmas de apoyo se deja en claro que los únicos considerados para el porcentaje serán los emitidos por el Instituto Electoral, y se establecen los supuestos en los que no serán considerados los apoyos ciudadanos.

Asimismo, se redactan los términos en que deberá presentarse el dictamen final; su contenido; la autoridad que lo emite para su aprobación por el Consejo General Electoral, y el procedimiento a seguir en caso de su procedencia.

En cuanto a la difusión de los instrumentos de participación ciudadana se determina al Instituto Electoral como la única autoridad competente para realizarla, estableciendo limitaciones en la difusión a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, se contempla la realización de las jornadas de consulta simultáneamente con la jornada electoral, siempre que se solicite dentro los plazos previstos en la propia Ley.

C) CAPÍTULO TERCERO "DEL PLEBISCITO".

Se establece el objeto del plebiscito el cual se resume en consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a los actos del titular del Poder Ejecutivo, de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado; definiéndose que se entiende por estos actos; enlistándose los actos que son materia de este instrumento de acuerdo a la autoridad emisora; normando la oportunidad para la presentación de la solicitud respectiva, y la presentación de más de un plebiscitos por los ciudadanos, siempre que no sea de manera simultánea.

Asimismo, se prevén los supuestos de creación y supresión de municipios como actos del Poder Legislativo, remitiéndose a lo establecido en la Constitución Local y en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.

Por otra parte, se indican los porcentajes necesarios para iniciar un plebiscito atendiendo a su ámbito espacial y territorial, de tal suerte que si es de ámbito estatal bastará con el 1% de la ciudadanía; de ser municipal del 8% para municipios menores de 50 mil habitantes, del 4% cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, del 1.5% para un rango comprendido entre doscientos cincuenta mil a quinientos mil y del 1% cuando la lista nominal supere los quinientos mil ciudadanos.

En cuanto a los efectos vinculantes para el plebiscito estatal, se determina que bastará con la mayoría de la votación válida emitida y la votación de al menos el 15% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, mientras para el municipal se determinará de acuerdo al número de la población del municipio.

D) CAPÍTULO CUARTO "DEL REFERÉNDUM".

Se define al referéndum como el proceso mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo a determinada norma o normas para la cual se enuncia de manera específica cada una de ellas; se establece como solicitantes de este instrumento al Poder Legislativo, los Ayuntamientos y las y los ciudadanos; enunciándose cinco tipos de referéndum atendiendo a su materia o a su eficacia, a saber: constitucional, legislativo, reglamentario municipal, constitutivo, abrogatorio y derogatorio.

Por otra parte, se determina como porcentaje de representación del referéndum presentado por la ciudadanía el 1.5% de la lista nominal para referéndum constitucional y el 0.5% para el referéndum legislativo; por lo que respecta al porcentaje para referéndum municipal se establece el 8% para municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, 4% con lista nominal mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, 1.5% cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, y 1% tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil.

Asimismo, se indica que no procederá el trámite simultáneo de instrumentos que se contrapongan entre sí, y de ser así se determina cual será procedente; en cuanto a los efectos vinculantes de este instrumento se determina que deberán haber obtenido la mayoría de votación válidamente emitida y el porcentaje es establecido de acuerdo al tipo de referéndum y el número de la población de la lista nominal, siendo para el referéndum legislativo del 10%, y para el municipal del 25%, 20%, 15% y 10%, según sea el caso en relación con la cantidad de personas inscritas en lista nominal del municipio de que se trate.

E) CAPÍTULO QUINTO "DE LA CONSULTA POPULAR".

Se define la consulta popular como el instrumento a través del cual se someten a consideración de las ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interés en el Estado o Municipio según corresponda, por medio de preguntas directas.

Aunado a lo anterior, se determina como facultados para su ejercicio a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a los Ayuntamientos y a la ciudadanía que represente cuando menos el 1% de la lista nominal en el ámbito estatal, mientras que en el ámbito municipal del 8%, 4%, 1.5% y 1% cuando la lista nominal sea menor de cincuenta mil, mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, mayor a doscientos cincuenta mil y menor a quinientos mil, y mayor a quinientos mil, respectivamente.

Al igual que los demás instrumentos se establece como requisito para que este instrumento, ya sea estatal o municipal, tenga efecto vinculante que se obtenga la mayoría de votación válidamente emitida, determinándose los porcentajes de votación del 15% para el estatal y para la consulta popular municipal el mismo porcentaje que para el referéndum.

F) CAPÍTULO SEXTO "DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO".

Se define a la revocación de mandato como un instrumento de participación ciudadana, mediante el cual la ciudadanía decide la conclusión anticipada de la persona Titular del Poder Ejecutivo al ejercicio del cargo para el que fue electo, a partir de la pérdida de la confianza.

Asimismo, se establece el periodo en el que podrá realizarse el procedimiento, mismo que corresponde a partir del mes previo a la mitad del mandato del Titular del Ejecutivo y hasta tres meses después, así como que la solicitud solo podrá hacerse una sola vez durante el mandato constitucional.

Como autoridad competente para recibir la solicitud de este instrumento, se determina al Consejo General Electoral y como solicitantes a la ciudadanía que represente cuando menos el 10% de la lista nominal distribuida en la mitad más uno de los municipios, distribuido por lo menos el 2% a cada municipio.

Por otra parte, se establecen los requisitos que deberá contener la solicitud y que esta deberá presentarse mediante los formatos oficiales que emita el Instituto Electoral.

Asimismo, se determina como autoridad competente de la verificación de los requisitos a la Comisión de Participación Ciudadana y de Educación Cívica en colaboración con el INE, así como la resolución de procedencia; los términos de las etapas del proceso y el derecho a la garantía de audiencia a los solicitantes ante la invalidez de las firmas.

Por lo que respecta a la vinculatoriedad del proceso, será necesario que participe cuando menos el 40% de las personas inscritas en el listado nominal y que de estas voten a favor la mayoría absoluta.

Dentro de las limitantes que se observan en este instrumento a los solicitantes, particulares y órganos de gobierno se encuentra la prohibición del uso de recursos públicos para recabar firmas y la realización de promoción o propaganda, facultando únicamente para ello al Instituto Estatal Electoral.

G) CAPÍTULO SÉPTIMO "DE LA INICIATIVA CIUDADANA".

Se define a la iniciativa ciudadana como el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las Instituciones de Educación Superior del Estado, pueden presentar ante el Poder Legislativo y los Ayuntamientos la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes estatales o de reglamentos municipales, respectivamente.

Asimismo, se establecen las materias que no podrán ser objeto de este instrumento, así como los requisitos que este deberá contener entre los que se encuentran el propósito, la autoridad competente y el representante común con domicilio para oír y recibir notificaciones, observándose como un requisito más que la solicitud sea apoyada por al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del Estado y al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio, según sea Iniciativa Ciudadana Estatal o Municipal; reiterándose de nueva cuenta que los formatos utilizados deberán ser los emitidos y publicados por el Instituto Electoral.

Para el caso de las Instituciones de Educación Superior del Estado deberán ser aprobadas por las dos terceras partes del total de los miembros y se marca disposiciones especiales para la presentación de la solicitud.

A diferencia de los instrumentos anteriores, se determina que el procedimiento de la iniciativa ciudadana cuando se presente ante el Poder Legislativo o en el Ayuntamiento, según sea el caso, será a través de sus comisiones u organización interna, quienes revisaran el cumplimiento de los requisitos y dictaminarán sobre su viabilidad e inviabilidad, limitándose la

competencia del Instituto Electoral a la verificación de la situación registral en la Lista Nominal que corresponda con la colaboración del INE.

Finalmente, se establecen las limitantes para su posterior presentación cuando éstas han sido rechazadas por el Pleno Poder Ejecutivo o el Pleno del Ayuntamiento respectivo.

H) CAPÍTULO OCTAVO "DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO".

Se define al presupuesto participativo como el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que destina el Ayuntamiento, para que sus habitantes optimicen su entorno proponiendo proyectos para mejora de sus colonias.

Se determina 4% como porcentaje del monto que deberá ser destinado del presupuesto de egresos anual, del cual el 50% se distribuirá en las colonias de la localidad urbana y el otro 50% a las colonias de la localidad rural.

Asimismo, se enuncian las necesidades que deberán ser atendidas con este presupuesto, el proceso que deberá seguir el Ayuntamiento para su realización, y se establece que Instituto Electoral podrá participar de la siguiente manera: colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realización de la consulta, y convenir con los Ayuntamientos para dar asesoría y apoyo técnico en la organización, desarrollo, cómputo y declaración de sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participativo, así como para supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten.

Se establece además que para el desarrollo de este instrumento el Ayuntamiento deberá conformar un órgano dictaminador, quien deberá realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyecto, así como su integración.

Otro aspecto a resaltar es lo correspondiente a la disposición que establece que en caso que no se ejerciera la totalidad del recurso asignado al Presupuesto Participativo, éste deberá ser destinado por parte de los Ayuntamientos a la satisfacción de las necesidades colectivas de la comunidad, tales como recuperación de espacios públicos, infraestructura rural y urbano, seguridad pública, medio ambiente, obras y servicios públicos, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.

Por último, se establecieron a la Auditoría Superior del Estado y a las Sindicaturas de los Ayuntamientos como las autoridades responsables de la vigilancia de la aplicación del recurso asignado o la sanción correspondiente, en su caso.

I) CAPÍTULO NOVENO "DEL CABILDO ABIERTO".

Se define al cabildo abierto como un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebración de una sesión, en la cual los habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento.

En ese orden de ideas, se establece que todas las solicitudes presentadas deberán ser discutidas y analizadas por el Ayuntamiento en la sesión de que se trate a o más tardar dentro de la sesión siguiente, también se dispuso la obligatoriedad de la difusión en el portal de internet tanto de la solicitud como de la respuesta recaída a la misma.

Asimismo, se determina la obligatoriedad de la celebración de las sesiones de cabildo abierto de forma mensual, con carácter público y con transmisión en tiempo real en internet, así como la elaboración de un calendario anual para la celebración de sesiones.

Finalmente, se establece el procedimiento para la celebración de cabildo abierto, entre el que destaca la emisión de una convocatoria de 5 a 10 días hábiles antes de la celebración de la sesión, el contenido y orden de los asuntos enlistados, así como la participación de las ciudadanas y ciudadanos que solicitaron la inclusión de algún asunto en el orden del día.

J) CAPÍTULO DÉCIMO "DEL CONGRESO ABIERTO".

Se define al Congreso Abierto como un mecanismo mediante el cual, quienes integran el Poder Legislativo, dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las normas que rigen la vida pública, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como la calidad, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de la administración pública, la impartición de justicia, el manejo del presupuesto público y otros asuntos de la vida pública.

Un aspecto a resaltar es que esta figura se ligó con el instrumento de Iniciativa Ciudadana, para promover la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la discusión de las iniciativas en las sesiones de dictaminación o en la mesa técnica legislativa correspondiente. Incluyéndose la posibilidad de la realización de foros virtuales aprovechando el uso de tecnologías de la información

K) CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO "DEL GOBIERNO ABIERTO".

Se define al gobierno abierto como el mecanismo que permite la participación democrática de la ciudadanía en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas públicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

Para lo anterior, se establece la obligación a cargo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos de realizar una convocatoria anual para que con la colaboración de la ciudadanía se emita el plan de trabajo anual con el objeto de atender las problemáticas más relevantes, con compromisos específicos, concretos, incluyentes, estratégicos y medibles, que finalmente con los resultados acordado por las partes se denominará "Plan de Acción".

De conformidad con lo anterior, se determina que a partir de la presentación del Plan de Acción al público se contará con un año para el cumplimiento sus actividades las cuales deberán ser documentadas en los portales de internet del Poder Ejecutivo y del Ayuntamiento.

TÍTULO TERCERO "DE LOS PROCESOS DE LA CONSULTA".

Este título contiene 7 capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO "DE LA CONVOCATORIA".

Se determina que los procesos de consulta inician con la publicación de una convocatoria en el Periódico Oficial emitida por el Instituto Electoral, misma que deberá contener los siguientes requisitos: fundamentos legales aplicables; fecha y hora en que habrá de realizarse la jornada de consulta, o en su caso si se celebra en la jornada electoral local los datos de esta; breve descripción del acto, norma o tema que se somete a consulta, la pregunta a consultar; circunscripción territorial en que se realizará; requisitos para participar, y el lugar y fecha de la emisión de la convocatoria.

B) CAPÍTULO SEGUNDO "DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA".

En este capítulo se establece la organización y desarrollo del proceso de consulta para el Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación De Mandato, indicándose que este se compone de las siguientes etapas: preparación, jornada de consulta cómputos y calificación de resultados y declaración de los efectos.

Por otra parte, se determina la participación de los partidos políticos en la vigilancia, organización y desarrollo de estos procesos.

Asimismo, se define al instituto como el órgano encargado de preparar el proyecto de para la realización de estos procesos a través de la Comisión de Participación Ciudadana y de Educación Cívica, y de su aprobación a través del Consejo General Electoral.

Por último, para la realización de estos procesos se prevé la utilización de nuevas tecnologías como la urna electrónica, el voto electrónico y la instalación de centros de votación; asimismo se contempla la posibilidad de requerir por el Instituto apoyo económico a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en caso de ser necesario.

C) CAPÍTULO TERCERO "DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN".

En este capítulo se establece que los centros de votación serán instalados a determinación del Consejo General únicamente en las jornadas de consulta que no sean coincidentes a la jornada electoral; la forma en que estos deberán integrarse; sus atribuciones; la forma en que los funcionarios que integraran los centros de votación serán designados y la determinación del número y ubicación de los centros de votación.

Se estableció además que en el caso de la realización de las jornadas de consulta sean coincidentes con la jornada electoral local se estará a lo que dispuesto en la Ley Electoral local en materia de instalación y ubicación de mesas directivas de casilla y en caso de elecciones concurrentes conforme a la dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

D) CAPÍTULO CUARTO "DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA".

En este capítulo se establece que para el ejercicio del voto en las jornadas de consulta podrán ser utilizadas boletas de votación, o en su caso el uso de la tecnología siempre y cuando se observen las medidas que garanticen la efectividad y secrecía del voto, de conformidad con la normatividad aplicable.

E) CAPÍTULO QUINTO "DE LA JORNADA DE CONSULTA".

Se establece que la jornada de consulta se deberá desarrollar en el horario y términos que la Ley Electoral local prevé para la jornada electoral de los procesos electorales, así como la viabilidad de realizar conteos rápidos.

F) CAPÍTULO SEXTO "DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN".

Se define al escrutinio y cómputo como el procedimiento por el cual los integrantes del centro de votación determinan el número de ciudadanas y ciudadanos que votaron; el número de votos emitidos en favor y en contra de la consulta del instrumento de participación ciudadana, el número de votos nulos, y el número de boletas recibidas y sobrantes. Asimismo, se establece la facultad del Consejo General Electoral de emitir las reglas que se deberán seguir para llevar a cabo dicho procedimiento.

G) CAPÍTULO SÉPTIMO "DE LOS RESULTADOS Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ".

Se establece que el Consejo General será el órgano encargado de efectuar el cómputo y declaración de validez de los instrumentos de participación ciudadana, que estos deberán publicarse en el Periódico Oficial, en un periódico de mayor circulación en el Estado o en el Municipio que corresponda y a través de la página de internet oficial del Instituto Electoral; que sus resultados deberán notificarse al solicitante y a la autoridad correspondiente; el término de la notificación, y que en caso de este resulte vinculante tendrá efectos durante los tres años siguientes una vez hecha la declaración de validez por el Consejo General Electoral.

TÍTULO CUARTO "DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS".

Este título contiene 4 capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO "DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN".

Se establece al recurso de inconformidad como el medio de impugnación procedente para recurrir los actos, omisiones o resoluciones dictados con motivo de la tramitación de los instrumentos de participación ciudadana.

B) CAPÍTULO SEGUNDO "DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA".

En este capítulo se establece que el Instituto Electoral es el responsable de erogar los recursos necesarios para realizar procesos de consulta promovidos por las ciudadanas y ciudadanos; para el caso de los procesos promovidos por autoridades de los tres niveles de gobierno, la erogación corre a cargo de estos. En ambos casos, tanto el Instituto como las autoridades deben establecer una partida presupuestal en su proyecto de presupuestos de egresos para tales efectos.

C) CAPÍTULO TERCERO "DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTA LEY".

Se indica que los plazos de la Ley podrán ser ampliados por el Consejo General cuando exista imposibilidad material para realizar actividades o actos para los instrumentos de participación ciudadana, y que estos deberán ser publicados en el Periódico Oficial dentro de los tres días siguientes a su aprobación.

D) CAPÍTULO CUARTO "DE LAS REFORMAS A LA LEY".

Se establece la obligatoriedad de la realización de un referéndum Legislativo para reformas o adiciones a la Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Se establecen 8 artículos transitorios relativos al inicio de vigencia de la ley, la abrogación de la Ley de Participación expedida el 16 de febrero de 2001 así como sus reformas o adiciones; la derogación de todas las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la Ley; a la tramitación de los procesos de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta norma; los plazos con los que cuenta el Instituto Electoral a partir de la entrada en vigor de esta Ley para adecuar su normatividad interna; la obligación de los poderes Legislativo y Ejecutivo para autorizar las modificaciones en sus presupuestos de egresos, en el de los Ayuntamientos y del Instituto Electoral para el cumplimiento de la Ley, la obligación del Instituto Electoral de establecer en su proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal inmediato siguiente a la publicación de la Ley las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones en materia de participación ciudadana, y la implementación de una campaña masiva de educación, capacitación, difusión y fomento de la ley por parte de los tres poderes del Estado, el Ayuntamiento y el Instituto Electoral.

XIX. Que en resumen, la Iniciativa de Ley que formula esta Comisión, recoge la opinión de sociedad civil, instituciones académicas, así como de representantes de partidos políticos, a través de los distintos foros realizados para su discusión y análisis, así como las múltiples reuniones de trabajo celebradas, donde se fortaleció el contenido de la misma con la finalidad de obtener lo que conocimos con el Proyecto de Nueva Ley, el cual tenía como eje rector potencializar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos para que ejerzan su derecho a la participación política, a través de los instrumentos de participación ciudadana.

En ese sentido, esta Comisión dictamina que la Iniciativa de Ley que se formula, se construyó bajo los parámetros legales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en ejercicio de la atribución constitucional y legal conferida al Instituto Electoral como órgano autónomo encargado de la función pública de organizar las elecciones estatales y los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana, para presentar ante el Congreso del Estado de Baja California iniciativas en materia electoral.

En consonancia con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción XIII, de la Ley Electoral, corresponde al Consejero Presidente remitir al Poder Legislativo la presente Iniciativa de Ley una vez aprobada por el Consejo General.

Por las consideraciones antes expuestas, fundado y motivado, respetuosamente se someten a la consideración de este órgano superior de dirección los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Se aprueba la **"INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,** en los términos del **ANEXO ÚNICO** que forma parte integral del presente Dictamen.

SEGUNDO. Remítase la Iniciativa de Ley señalada en el punto que antecede, por conducto de la Presidencia del Consejo General, a la XXIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a efecto de darle el trámite legislativo previsto en la Constitución Local y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

TERCERO. Notifíquese el presente dictamen al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del Recurso de Inconformidad identificado con la clave RI-21/2018 y su acumulado.

CUARTO. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet institucional dentro del término previsto en el artículo 22, párrafo 4, del Reglamento Interior.

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS



C. DANIEL GARCÍA GARCÍA

PRESIDENTE



C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA

VOCAL



C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ

VOCAL



C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ

SECRETARIO TÉCNICO

INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE EL DICTAMEN QUINCE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS, EN FECHA ____ DE FEBRERO DE 2020.

**C. VICTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.**

Las y los que suscriben, CC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, GRACIELA AMEZOLA CANSECO, DANIEL GARCÍA GARCÍA, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA Y OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 46, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 111, 115, fracción V, y 117, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos someter a la consideración de esa Soberanía la siguiente **INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México la participación ciudadana constituye la institución través de la cual el pueblo mexicano ejerce su derecho soberano de intervenir en los asuntos de Gobierno, ya sea de índole federal, estatal o municipal.

Para llegar a ello, México ha pasado por una serie de cambios que han traído como resultado la creación de diversos mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, esto no siempre ha sido así, ya que esta figura adquirió relevante importancia en México durante los últimos años.

Es así que a partir de la década de los ochenta nacen las consultas populares en México, y se llevan a cabo los primeros comités y consejos consultivos en el gobierno federal, fomentándose así la participación de la sociedad en la planeación del desarrollo del país.

Ahora bien, en 1983 con la reforma del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se invistió de personalidad jurídica a los municipios de los Estados sobre su patrimonio, y se otorgan ciertas competencias reglamentarias; situación que permitió a los municipios ejercer facultades para involucrar a las y los ciudadanos habitantes de su municipio en los asuntos públicos de los ayuntamientos.

A partir de esta reforma, nace la figura del referéndum; sin embargo no fue hasta la década de los noventa que los temas de participación social causaron efectos positivos sobre la normatividad, toda vez que en diversos estados de la república se realizaron reformas a sus constituciones locales en materia de participación ciudadana, abriendo el abanico de posibilidades de crear instrumentos jurídicos que fundamentaran la participación de los ciudadanos en temas públicos de trascendencia para la vida de su comunidad.

De esta forma, es importante resaltar que si bien a partir del reconocimiento del derecho a la participación ciudadana en nuestra Carta Magna se dio inicio al reconocimiento legal del derecho de las ciudadanas y ciudadanos de participar en temas de gobierno que sean de su interés, así como de elegir a sus representantes mediante elecciones democráticas y directas, poco se había impulsado o fomentado a la ciudadanía y las instituciones públicas a participar en las decisiones del poder ejecutivo federal, estatal y municipal, y mucho menos a instrumentar o fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, para que estos se puedan ejercer mediante procedimientos que impulsen su procedencia.

El Instituto Estatal Electoral de Baja California como una instancia obligada a promover valores y prácticas democráticas para incidir en la formación de la ciudadanía, ha aprobado desde 2017 diversos Programas de Cultura Cívica y Política con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la cultura democrática en el Estado.

Con ese fin y teniendo como uno de sus ejes estratégicos el diálogo, se establecieron diversas líneas de acción diseñadas para configurar espacios donde se privilegie la interacción, el intercambio y la discusión de ideas y posiciones entre múltiples actores, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia.:

De entre las líneas de acción, destaca la organización de conversatorios con la sociedad civil, jóvenes, miembros de la academia y partidos políticos, con la finalidad de recoger sus impresiones acerca de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley y, en su caso, elaborar con la sociedad en su conjunto, propuestas de reforma al marco legal aplicable, para mejorar la implementación de los instrumentos de participación ciudadana.

Posteriormente, el Consejo General Electoral aprobó el "Programa de Cultura Cívica y Participación Política 2018", el cual entre sus actividades específicas estableció la realización de foros para socializar el "Proyecto de modificación a la Ley de Participación Ciudadana" con diversos grupos de la sociedad civil, instituciones académicas, partidos políticos, cabildos municipales y el Poder Legislativo del Estado. En relación con el cumplimiento de este objetivo se celebraron mesas de trabajo y foros en todos los municipios del Estado.

Dichas acciones trajeron como consecuencia el análisis del Proyecto de Nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California al interior del Instituto Estatal Electoral, una vez concluido el Proceso Local Ordinario 2018-2019 y la posterior emisión de la Iniciativa de Ley que se presenta ante esta Soberanía.

La Iniciativa de Ley que se propone, tiene como objetivo principal privilegiar la participación ciudadana, entendiéndose esta como aquella donde la sociedad posee una injerencia directa en el actuar del Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas.

En ese sentido, los instrumentos de participación ciudadana son muy importantes en los regímenes democráticos, porque nos permiten vigilar y controlar la gestión de nuestros gobernantes; además, es la manera en que la ciudadanía se hace escuchar y puede tomar parte en los asuntos públicos.

Actualmente se cuenta con muchos canales institucionales y con un marco jurídico que regula la injerencia de los actores privados en las políticas gubernamentales. Definitivamente esto se ha logrado gracias al interés de las autoridades por incluir la participación ciudadana en su gestión. Sin embargo, aunque ya está reglamentada, todavía permanece en un estado de aletargamiento. Si bien existe un número de personas que participan activamente en los asuntos públicos, hay una cantidad mucho mayor que no está interesada en esas cuestiones.

La participación ciudadana se ha venido desarrollando en nuestro país de manera constante, pero pausada. Hasta ahora se han aprobado leyes y programas que establecen nuevos mecanismos de participación. El reto es que, a la par de los nuevos espacios, se construya una nueva cultura de participación, así como la manera en que los ciudadanos utilicen estas nuevas herramientas, contribuirá a definir el futuro de la participación ciudadana en nuestro país.

Comúnmente cuando se habla de participación ciudadana, básicamente se parte de la idea que el referéndum y el plebiscito, son participación. Pero cuando hablamos de democracia participativa nos estamos refiriendo a múltiples mecanismos a través de los cuales la ciudadanía interviene en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas. Como sabemos las formas de la democracia evolucionaron a lo largo de la historia y no solamente las formas, sino también la concepción de los alcances y los límites del Estado. Es por ello que, en la Iniciativa de Ley propuesta, se incorporan nuevos instrumentos de participación ciudadana como Cabildo Abierto, Congreso Abierto y el Presupuesto Participativo, además del fortalecimiento y simplificación de los instrumentos ya existentes.

El proceso para construir democracia depende básicamente de tres cosas: de la motivación de los actores gubernamentales, de la capacidad de ejercer presión de los ciudadanos a fin de suscitar la motivación gubernamental y de que ambos tengan, como una perspectiva compartida, la formación de ciudadanía. El binomio autoridades-ciudadanía que propicie la participación ciudadana, está condicionado invariablemente

el entorno, condiciones individuales y voluntad de los individuos, es decir, las razones que llevan a los individuos a participar. En cuanto al entorno, lo más importante a entender es que la participación ciudadana requiere que haya mecanismos a través de los cuales se garantice el ejercicio pleno de los derechos que el propio marco constitucional y legal de un sistema democrático ofrece a sus ciudadanos, que no solamente se entreguen esos derechos como un regalo de las autoridades a la sociedad, sino que la sociedad tenga mecanismos para exigir, para compartir la responsabilidad de que esos derechos efectivamente se cumplan en la realidad, en la práctica cotidiana.

La participación ciudadana es el elemento esencial para el logro del desarrollo humano sostenible. En esta participación el o la ciudadana se integra en forma personal o colectiva en las tomas de decisiones, en la fiscalización, en el control y en la ejecución de las acciones en los asuntos públicos.

En cuanto a los instrumentos de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, se prevé un procedimiento común para su presentación ante el Instituto Estatal Electoral y se definen de manera puntual las etapas del mismo, eliminándose el estudio de la trascendencia que se encuentra en la Ley de Participación Ciudadana vigente, incorporándose el elemento del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos como factor determinante para la procedencia de dichos instrumentos de participación ciudadana, atendiendo al principio de accesibilidad plasmado en la Iniciativa de Ley.

Estos mecanismos constituyen la forma en que las ciudadanas y ciudadanos pueden emitir sus opiniones y el derecho a que cada una de ellas sea escuchada, de manera que puedan participar en las decisiones de los asuntos públicos, a través de una democracia directa o semidirecta.

Sin bien, en la Ley vigente para el Estado, ya se encuentran regulados cinco instrumentos de participación ciudadana, con esta iniciativa se propone la creación de cuatro instrumentos más que permitan a la ciudadana y al ciudadano involucrarse en los asuntos de interés público. Aunado a lo anterior y con base en la experiencia del Instituto Electoral en la organización y desarrollo de instrumentos de participación ciudadana, en la presente iniciativa se proponen procedimientos más sencillos para que las ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho a participar en temas que consideren de trascendencia e importancia en su vida cotidiana.

En ese tenor, la Iniciativa de Ley que se presenta, consta de nueve instrumentos de participación ciudadana a saber: plebiscito, referéndum, consulta popular, revocación de mandato, iniciativa ciudadana, presupuesto participativo, cabildo abierto, congreso abierto y gobierno abierto, correspondiendo a los de nueva creación los último cuatro, los cuales son regulados a través de 4 Títulos, 24 capítulos, 87 artículos y 8 artículos transitorios, estableciéndose en ellos sus generalidades y sus particularidades. A continuación, se presenta el contenido de la Iniciativa de Ley:

TÍTULO PRIMERO "DISPOSICIONES GENERALES".

Este título contiene dos capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO "OBJETO DE LA LEY".

En ese capítulo se establece el objeto de la ley, el cual se circunscribe a fomentar, impulsar, promover, consolidar y regular los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito de competencia estatal y municipal, indicando que la misma es de orden e interés público y de observancia general. Se reconoce el derecho humano a la participación ciudadana, y define a esta última; se establece la obligación del Estado para garantizar la utilización de medios de comunicación, que permita entre otras cosas brindar difusión y educación en cuanto al desarrollo de una cultura democrática.

Asimismo, se plasma un glosario con el objeto de evitar reproducciones de locuciones extensas, en virtud de su uso reiterado en el ordenamiento legal, de este modo se hace menos pesado el estilo de las disposiciones contenidas.

Por otro lado, se establece un sistema de distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo del Estado; el Poder Legislativo del Estado; los Ayuntamientos del Estado; el Instituto Estatal Electoral de Baja California, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, los cuales en todo momento deberán fomentar y garantizar el respeto de los derechos previstos en la Ley.

Se indica además la forma en que deberá ser interpretada la ley y, la forma de suplir las deficiencias de la misma, remitiendo para tal efecto a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Baja California, los

acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, los criterios obligatorios establecidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y los principios generales del derecho.

Por último, se establecen los principios rectores de la participación ciudadana que consisten en libertad, democracia, corresponsabilidad, solidaridad, bien general, subsidiariedad, legalidad, sustentabilidad, tolerancia, equidad, no discriminación, máxima publicidad y accesibilidad.

B) CAPÍTULO SEGUNDO "DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CIUDADANÍA".

Se establece lo correspondiente a la vecindad en el Estado; así como los derechos de los ciudadanos en cuanto a los instrumentos de participación ciudadana, de igual forma los requisitos a cumplir por la ciudadanía para participar en los procesos de consulta previstos en la Ley que nos ocupa.

TÍTULO SEGUNDO "DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA".

Este título contiene 11 capítulos, a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO "DE LOS INSTRUMENTOS".

Se enlistan los nueve instrumentos de participación ciudadana que conforman la Ley, mismos que son: Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular, Revocación De Mandato, Iniciativa Ciudadana, Presupuesto Participativo, Cabildo Abierto, Congreso Abierto y Gobierno Abierto.

B) CAPÍTULO SEGUNDO "DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR".

En este capítulo se integraron las disposiciones comunes en cuanto al procedimiento que se debe llevar a cabo para la realización del Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular con el fin de incorporar el mismo contenido en un solo capítulo y con ello evitar ser repetitivos de un procedimiento que es idéntico para estos tres instrumentos.

Además, se establece que las autoridades que podrán solicitar dichos instrumentos serán el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Legislativo del Estado, el Ayuntamientos del Estado, y las ciudadanas y los ciudadanos del Estado.

Por otro lado, se enlistan las restricciones en cuanto a los temas de consulta y las causales de improcedencia, también se establece el número de consultas que para cada jornada podrán presentar las autoridades, especificándose que las y los ciudadanos no encuentran limitación en este rubro, así como la prohibición de desistimiento de las solicitudes.

Asimismo, se establecen los requisitos del escrito de solicitud del instrumento, así como el trámite interno de verificación de dichos requisitos, y en su caso el derecho de audiencia de la parte solicitante.

En cuanto a la redacción de la pregunta, se desglosan los requisitos que esta deberá cumplir, entre los que destaca que deberá formularse en sentido claro y preciso de manera que genere una respuesta positiva o negativa; que deberá referirse directamente al acto, norma o tema objeto de la consulta; contener un solo enunciado por pregunta, y no contener posicionamientos y ningún tipo de juicio valorativo.

Por lo que se refiere a la revisión de los requisitos de la solicitud, se determina el procedimiento que la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica deberá seguir, entre lo que destaca que de encontrarse alguna inconsistencia o causal de improcedencia se otorgará la garantía de audiencia al solicitante, y cumplidos los términos en ella previsto se procederá a la emisión del proyecto de resolución, que deberá ser aprobado por el Consejo General Electoral, la cual deberá ser afirmativa y deberá ser notificada personalmente al solicitante junto con el formato de solicitud de firmas.

En cuanto a la recolección de las firmas, se desglosa el contenido mínimo de los formatos y la disponibilidad de los mismos; se prevé la recolección mediante mecanismos tecnológicos, el periodo de recolección y el término para su presentación ante el Instituto Estatal Electoral.

Aunado a lo anterior, se establece el procedimiento del Instituto Electoral para llevar a cabo la revisión y valoración de las firmas en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, así como los plazos previstos para la otorgar garantía de audiencia.

En cuanto a los formatos para la presentación de las firmas de apoyo se deja en claro que los únicos considerados para el porcentaje serán los emitidos por el Instituto Electoral, y se establecen los supuestos en los que no serán considerados los apoyos ciudadanos.

Asimismo, se redactan los términos en que deberá presentarse el dictamen final; su contenido; la autoridad que lo emite para su aprobación por el Consejo General Electoral, y el procedimiento a seguir en caso de su procedencia.

En cuanto a la difusión de los instrumentos de participación ciudadana se determina al Instituto Electoral como la única autoridad competente para realizarla, estableciendo limitaciones en la difusión a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, se contempla la realización de las jornadas de consulta simultáneamente con la jornada electoral, siempre que se solicite dentro los plazos previstos en la propia Ley.

C) CAPÍTULO TERCERO "DEL PLEBISCITO".

Se establece el objeto del plebiscito el cual se resume en consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a los actos del titular del Poder Ejecutivo, de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado; definiéndose que se entiende por estos actos; enlistándose los actos que son materia de este instrumento de acuerdo a la autoridad emisora; normando la oportunidad para la presentación de la solicitud respectiva, y la presentación de más de un plebiscitos por los ciudadanos, siempre que no sea de manera simultánea.

Asimismo, se prevén los supuestos de creación y supresión de municipios como actos del Poder Legislativo, remitiéndose a lo establecido en la Constitución Local y en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.

Por otra parte, se indican los porcentajes necesarios para iniciar un plebiscito atendiendo a su ámbito espacial y territorial, de tal suerte que si es de ámbito estatal bastará con el 1% de la ciudadanía; de ser municipal del 8% para municipios menores de 50 mil habitantes, del 4% cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, del 1.5% para un rango comprendido entre doscientos cincuenta mil a quinientos mil y del 1% cuando la lista nominal supere los quinientos mil ciudadanos.

En cuanto a los efectos vinculantes para el plebiscito estatal, se determina que bastará con la mayoría de la votación válida emitida y la votación de al menos el 15% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, mientras para el municipal se determinará de acuerdo al número de la población del municipio.

D) CAPÍTULO CUARTO "DEL REFERÉNDUM".

Se define al referéndum como el proceso mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo a determinada norma o normas para la cual se enuncia de manera específica cada una de ellas; se establece como solicitantes de este instrumento al Poder Legislativo, los Ayuntamientos y las y los ciudadanos; enunciándose cinco tipos de referéndum atendiendo a su materia o a su eficacia, a saber: constitucional, legislativo, reglamentario municipal, constitutivo, abrogatorio y derogatorio.

Por otra parte, se determina como porcentaje de representación del referéndum presentado por la ciudadanía el 1.5% de la lista nominal para referéndum constitucional y el 0.5% para el referéndum legislativo; por lo que respecta al porcentaje para referéndum municipal se establece el 8% para municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, 4% con lista nominal mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, 1.5% cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, y 1% tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil.

Asimismo, se indica que no procederá el trámite simultáneo de instrumentos que se contrapongan entre sí, y de ser así se determina cual será procedente; en cuanto a los efectos vinculantes de este instrumento se

determina que deberán haber obtenido la mayoría de votación válidamente emitida y el porcentaje es establecido de acuerdo al tipo de referéndum y el número de la población de la lista nominal, siendo para el referéndum legislativo del 10%, y para el municipal del 25%, 20%, 15% y 10%, según sea el caso en relación con la cantidad de personas inscritas en lista nominal del municipio de que se trate.

E) CAPÍTULO QUINTO "DE LA CONSULTA POPULAR".

Se define la consulta popular como el instrumento a través del cual se someten a consideración de las ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interés en el Estado o Municipio según corresponda, por medio de preguntas directas.

Aunado a lo anterior, se determina como facultados para su ejercicio a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a los Ayuntamientos y a la ciudadanía que represente cuando menos el 1% de la lista nominal en el ámbito estatal, mientras que en el ámbito municipal del 8%, 4%, 1.5% y 1% cuando la lista nominal sea menor de cincuenta mil, mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, mayor a doscientos cincuenta mil y menor a quinientos mil, y mayor a quinientos mil, respectivamente.

Al igual que los demás instrumentos se establece como requisito para que este instrumento, ya sea estatal o municipal, tenga efecto vinculante que se obtenga la mayoría de votación válidamente emitida, determinándose los porcentajes votación del 15% para el estatal y para la consulta popular municipal el mismo porcentaje que para el referéndum.

F) CAPÍTULO SEXTO "DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO".

Se define a la revocación de mandato como un instrumento de participación ciudadana, mediante el cual la ciudadanía decide la conclusión anticipada de la persona Titular del Poder Ejecutivo al ejercicio del cargo para el que fue electo, a partir de la pérdida de la confianza.

Asimismo, se establece el periodo en el que podrá realizarse el procedimiento, mismo que corresponde a partir del mes previo a la mitad del mandato del Titular del Ejecutivo y hasta tres meses después, así como que la solicitud solo podrá hacerse una sola vez durante el mandato constitucional.

Como autoridad competente para recibir la solicitud de este instrumento, se determina al Consejo General Electoral y como solicitantes a la ciudadanía que represente cuando menos el 10% de la lista nominal distribuida en la mitad más uno de los municipios, distribuido por lo menos el 2% a cada municipio.

Por otra parte, se establecen los requisitos que deberá contener la solicitud y que esta deberá presentarse mediante los formatos oficiales que emita el Instituto Electoral.

Asimismo, se determina como autoridad competente de la verificación de los requisitos a la Comisión de Participación Ciudadana y de Educación Cívica en colaboración con el INE, así como la resolución de procedencia; los términos de las etapas del proceso y el derecho a la garantía de audiencia a los solicitantes ante la invalidez de las firmas.

Por lo que respecta a la vinculatoriedad del proceso, será necesario que participe cuando menos el 40% de las personas inscritas en el listado nominal y que de estas voten a favor la mayoría absoluta.

Dentro de las limitantes que se observan en este instrumento a los solicitantes, particulares y órganos de gobierno se encuentra la prohibición del uso de recursos públicos para recabar firmas y la realización de promoción o propaganda, facultando únicamente para ello al Instituto Estatal Electoral.

G) CAPÍTULO SÉPTIMO "DE LA INICIATIVA CIUDADANA".

Se define a la iniciativa ciudadana como el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las Instituciones de Educación Superior del Estado, pueden presentar ante el Poder Legislativo y los Ayuntamientos la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes estatales o de reglamentos municipales, respectivamente.

Asimismo, se establecen las materias que no podrán ser objeto de este instrumento, así como los requisitos que este deberá contener entre los que se encuentran el propósito, la autoridad competente y el representante común con domicilio para oír y recibir notificaciones, observándose como un requisito más que la solicitud sea apoyada por al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del Estado y al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio, según

sea Iniciativa Ciudadana Estatal o Municipal; reiterándose de nueva cuenta que los formatos utilizados deberán ser los emitidos y publicados por el Instituto Electoral.

Para el caso de las Instituciones de Educación Superior del Estado deberán ser aprobadas por las dos terceras partes del total de los miembros y se marca disposiciones especiales para la presentación de la solicitud.

A diferencia de los instrumentos anteriores, se determina que el procedimiento de la iniciativa ciudadana cuando se presente ante el Poder Legislativo o en el Ayuntamiento, según sea el caso, será a través de sus comisiones u organización interna, quienes revisaran el cumplimiento de los requisitos y dictaminarán sobre su viabilidad e inviabilidad, limitándose la competencia del Instituto Electoral a la verificación de la situación registral en la Lista Nominal que corresponda con la colaboración del INE.

Finalmente, se establecen las limitantes para su posterior presentación cuando éstas han sido rechazadas por el Pleno Poder Ejecutivo o el Pleno del Ayuntamiento respectivo.

H) CAPÍTULO OCTAVO "DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO".

Se define al presupuesto participativo como el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que destina el Ayuntamiento, para que sus habitantes optimicen su entorno proponiendo proyectos para mejora de sus colonias.

Se determina 4% como porcentaje del monto que deberá ser destinado del presupuesto de egresos anual, del cual el 50% se distribuirá en las colonias de la localidad urbana y el otro 50% a las colonias de la localidad rural.

Asimismo, se enuncian las necesidades que deberán ser atendidas con este presupuesto, el proceso que deberá seguir el Ayuntamiento para su realización, y se establece que Instituto Electoral podrá participar de la siguiente manera: colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realización de la consulta, y convenir con los Ayuntamientos para dar asesoría y apoyo técnico en la organización, desarrollo, cómputo y

declaración de sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participativo, así como para supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten.

Se establece además que para el desarrollo de este instrumento el Ayuntamiento deberá conformar un órgano dictaminador, quien deberá realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyecto, así como su integración.

Otro aspecto a resaltar es lo correspondiente a la disposición que establece que en caso que no se ejerciera la totalidad del recurso asignado al Presupuesto Participativo, éste deberá ser destinado por parte de los Ayuntamientos a la satisfacción de las necesidades colectivas de la comunidad, tales como recuperación de espacios públicos, infraestructura rural y urbano, seguridad pública, medio ambiente, obras y servicios públicos, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.

Por último, se establecieron a la Auditoría Superior del Estado y a las Sindicaturas de los Ayuntamientos como las autoridades responsables de la vigilancia de la aplicación del recurso asignado o la sanción correspondiente, en su caso.

I) CAPÍTULO NOVENO "DEL CABILDO ABIERTO".

Se define al cabildo abierto como un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebración de una sesión, en la cual los habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento.

En ese orden de ideas, se establece que todas las solicitudes presentadas deberán ser discutidas y analizadas por el Ayuntamiento en la sesión de que se trate a o más tardar dentro de la sesión siguiente, también se dispuso la obligatoriedad de la difusión en el portal de internet tanto de la solicitud como de la respuesta recaída a la misma.

Asimismo, se determina la obligatoriedad de la celebración de las sesiones de cabildo abierto de forma mensual, con carácter público y con transmisión en tiempo real en internet, así como la elaboración de un calendario anual para la celebración de sesiones.

Finalmente, se establece el procedimiento para la celebración de cabildo abierto, entre el que destaca la emisión de una convocatoria de 5 a 10 días hábiles antes de la celebración de la sesión, el contenido y orden de los asuntos enlistados, así como la participación de las ciudadanas y ciudadanos que solicitaron la inclusión de algún asunto en el orden del día.

J) CAPÍTULO DÉCIMO “DEL CONGRESO ABIERTO”.

Se define al Congreso Abierto como un mecanismo mediante el cual, quienes integran el Poder Legislativo, dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las normas que rigen la vida pública, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como la calidad, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de la administración pública, la impartición de justicia, el manejo del presupuesto público y otros asuntos de la vida pública.

Un aspecto a resaltar es que esta figura se ligó con el instrumento de Iniciativa Ciudadana, para promover la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la discusión de las iniciativas en las sesiones de dictaminación o en la mesa técnica legislativa correspondiente. Incluyéndose la posibilidad de la realización de foros virtuales aprovechando el uso de tecnologías de la información.

K) CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO “DEL GOBIERNO ABIERTO”.

Se define al gobierno abierto como el mecanismo que permite la participación democrática de la ciudadanía en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas públicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

Para lo anterior, se establece la obligación a cargo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos de realizar una convocatoria anual para que con la colaboración de la ciudadanía se emita el plan de trabajo anual con el objeto de atender las problemáticas más relevantes, con compromisos específicos, concretos, incluyentes, estratégicos y medibles, que finalmente con los resultados acordado por las partes se denominará “Plan de Acción”.

De conformidad con lo anterior, se determina que a partir de la presentación del Plan de Acción al público se contará con un año para el cumplimiento sus actividades las cuales deberán ser documentadas en los portales de internet del Poder Ejecutivo y del Ayuntamiento.

TÍTULO TERCERO "DE LOS PROCESOS DE LA CONSULTA".

Este título contiene 7 capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO "DE LA CONVOCATORIA".

Se determina que los procesos de consulta inician con la publicación de una convocatoria en el Periódico Oficial emitida por el Instituto Electoral, misma que deberá contener los siguientes requisitos: fundamentos legales aplicables; fecha y hora en que habrá de realizarse la jornada de consulta, o en su caso si se celebra en la jornada electoral local los datos de esta; breve descripción del acto, norma o tema que se somete a consulta; la pregunta a consultar; circunscripción territorial en que se realizará; requisitos para participar, y el lugar y fecha de la emisión de la convocatoria.

B) CAPÍTULO SEGUNDO "DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA".

En este capítulo se establece la organización y desarrollo del proceso de consulta para el Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación De Mandato, indicándose que este se compone de las siguientes etapas: preparación, jornada de consulta cómputos y calificación de resultados y declaración de los efectos.

Por otra parte, se determina la participación de los partidos políticos en la vigilancia, organización y desarrollo de estos procesos.

Asimismo, se define al instituto como el órgano encargado de preparar el proyecto de para la realización de estos procesos a través de la Comisión de Participación Ciudadana y de Educación Cívica, y de su aprobación a través del Consejo General Electoral.

Por último, para la realización de estos procesos se prevé la utilización de nuevas tecnologías como la urna electrónica, el voto electrónico y la instalación de centros de votación; asimismo se contempla la posibilidad de requerir por el Instituto apoyo económico a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en caso de ser necesario.

C) CAPÍTULO TERCERO “DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN”.

En este capítulo se establece que los centros de votación serán instalados a determinación del Consejo General únicamente en las jornadas de consulta que no sean coincidentes a la jornada electoral; la forma en que estos deberán integrarse; sus atribuciones; la forma en que los funcionarios que integraran los centros de votación serán designados y la determinación del número y ubicación de los centros de votación.

Se estableció además que en el caso de la realización de las jornadas de consulta sean coincidentes con la jornada electoral local se estará a lo que dispuesto en la Ley Electoral local en materia de instalación y ubicación de mesas directivas de casilla y en caso de elecciones concurrentes conforme a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

D) CAPÍTULO CUARTO “DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA”.

En este capítulo se establece que para el ejercicio del voto en las jornadas de consulta podrán ser utilizadas boletas de votación, o en su caso el uso de la tecnología siempre y cuando se observen las medidas que garanticen la efectividad y secrecía del voto, de conformidad con la normatividad aplicable.

E) CAPÍTULO QUINTO “DE LA JORNADA DE CONSULTA”.

Se establece que la jornada de consulta se deberá desarrollar en el horario y términos que la Ley Electoral local prevé para la jornada electoral de los procesos electorales, así como la viabilidad de realizar conteos rápidos.

F) CAPÍTULO SEXTO “DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN”.

Se define al escrutinio y cómputo como el procedimiento por el cual los integrantes del centro de votación determinan el número de ciudadanas y ciudadanos que votaron; el número de votos emitidos en favor y en contra de la consulta del instrumento de participación ciudadana; el número de votos nulos, y el número de

boletas recibidas y sobrantes. Asimismo, se establece la facultad del Consejo General Electoral de emitir las reglas que se deberán seguir para llevar a cabo dicho procedimiento.

G) CAPÍTULO SÉPTIMO “DE LOS RESULTADOS Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ”.

Se establece que el Consejo General será el órgano encargado de efectuar el cómputo y declaración de validez de los instrumentos de participación ciudadana; que estos deberán publicarse en el Periódico Oficial, en un periódico de mayor circulación en el Estado o en el Municipio que corresponda y a través de la página de internet oficial del Instituto Electoral; que sus resultados deberán notificarse al solicitante y a la autoridad correspondiente; el término de la notificación, y que en caso de este resulte vinculante tendrá efectos durante los tres años siguientes una vez hecha la declaración de validez por el Consejo General Electoral.

TÍTULO CUARTO “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS”.

Este título contiene 4 capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO “DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN”.

Se establece al recurso de inconformidad como el medio de impugnación procedente para recurrir los actos, omisiones o resoluciones dictados con motivo de la tramitación de los instrumentos de participación ciudadana.

B) CAPÍTULO SEGUNDO “DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.

En este capítulo se establece que el Instituto Electoral es el responsable de erogar los recursos necesarios para realizar procesos de consulta promovidos por las ciudadanas y ciudadanos; para el caso de los procesos promovidos por autoridades de los tres niveles de gobierno, la erogación corre a cargo de estos. En ambos casos, tanto el Instituto como las autoridades deben establecer una partida presupuestal en su proyecto de presupuestos de egresos para tales efectos.

C) CAPÍTULO TERCERO "DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTA LEY".

Se indica que los plazos de la Ley podrán ser ampliados por el Consejo General cuando exista imposibilidad material para realizar actividades o actos para los instrumentos de participación ciudadana, y que estos deberán ser publicados en el Periódico Oficial dentro de los tres días siguientes a su aprobación.

D) CAPÍTULO CUARTO "DE LAS REFORMAS A LA LEY".

Se establece la obligatoriedad de la realización de un referéndum Legislativo para reformas o adiciones a la Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Se establecen 8 artículos transitorios relativos al inicio de vigencia de la ley, la abrogación de la Ley de Participación expedida el 16 de febrero de 2001 así como sus reformas o adiciones; la derogación de todas las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la Ley; a la tramitación de los procesos de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta norma; los plazos con los que cuenta el Instituto Electoral a partir de la entrada en vigor de esta Ley para adecuar su normatividad interna; la obligación de los poderes Legislativo y Ejecutivo para autorizar las modificaciones en sus presupuestos de egresos, en el de los Ayuntamientos y del Instituto Electoral para el cumplimiento de la Ley; la obligación del Instituto Electoral de establecer en su proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal inmediato siguiente a la publicación de la Ley las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones en materia de participación ciudadana, y la implementación de una campaña masiva de educación, capacitación, difusión y fomento de la ley por parte de los tres poderes del Estado, el Ayuntamiento y el Instituto Electoral.

En resumen, la Iniciativa de Ley que se presenta pretende simplificar la tramitación de los instrumentos de participación ciudadana con la finalidad de promover la democracia participativa, con el reforzamiento de los instrumentos ya existentes de manera que sean más prácticos, eficaces y accesibles para los solicitantes, así como la adición de nuevos instrumentos a partir de los cuales las ciudadanas y ciudadanos adquieren mayor participación y presencia en los temas públicos.

Con base en los motivos expuestos, el Instituto Estatal Electoral de Baja California somete a la consideración de esa XXIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la presente iniciativa de ley por la que se expide la:

NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO ÚNICO. Se **EXPIDE** la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO OBJETO DE LA LEY

Artículo 1.

1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 5, Apartado C, 8, fracción IV, inciso b), 12, 28, 34, 76, 85 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, es de orden social e interés público y de observancia general en materia de participación ciudadana en el Estado de Baja California; tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, consolidar y regular los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito de competencia Estatal y Municipal.

2. Las disposiciones de esta Ley reconocen el derecho humano a la participación ciudadana, entendiéndose este como el derecho de las personas habitantes del Estado para intervenir en las decisiones públicas, así como deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, e incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno.

3. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, por lo que el Estado debe garantizar la utilización de los medios de comunicación a su alcance, para proveer la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática.

Artículo 2.

1. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- a) Ayuntamientos: Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Baja California;
- b) Centros de Votación: Los espacios públicos que además de cumplir con los requerimientos de ubicación, cumplan con las condiciones que permitan incorporar una infraestructura tecnológica más robusta y segura que la utilizada en las casillas electorales, permitiendo un alto flujo de votantes;
- c) Consejo General: El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California;
- d) Constitución del Estado: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;
- e) Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- f) Credencial para Votar: La credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral;
- g) Estado: Al Estado Libre y Soberano de Baja California;
- h) Infraestructura física: Se refiere a la construcción de obras civiles de gran tamaño, como puentes, puertos y autopistas;
- i) Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral;
- j) Instituto o Instituto Electoral: El Instituto Estatal Electoral de Baja California;
- k) Jornada de Consulta: La jornada de votación de los instrumentos de participación ciudadana;
- l) LEEBC: La Ley Electoral del Estado de Baja California;
- m) Ley: La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California;
- n) LGIPE: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
- o) Lista Nominal: La lista nominal de electores con fotografía elaborada por el Instituto Nacional Electoral en la parte correspondiente al Estado de Baja California;
- p) Padrón Electoral: El padrón electoral elaborado por el Instituto Nacional Electoral en la parte correspondiente al Estado de Baja California;
- q) Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Estado de Baja California;

- r) Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California;
- s) Poder Legislativo: El Poder Legislativo del Estado de Baja California;
- t) Tribunal Electoral: El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;
- u) Urna Electrónica: La máquina receptora de votos y emisora de comprobantes de votación y resultados de la jornada de consulta, y
- v) Voto Electrónico: El conjunto de elementos técnicos y metodológicos diseñados por los órganos del Instituto, y aprobados por el Consejo General, para llevar a cabo de manera automatizada la jornada de consulta y cómputo y calificación de resultados a través de sistema electrónico por internet.

Artículo 3.

1. La aplicación y ejecución de las normas contenidas en esta Ley, dentro de su respectivo ámbito de competencia, corresponden al:

- a) Poder Ejecutivo;
- b) Poder Legislativo;
- c) Ayuntamientos;
- d) Instituto Electoral, y
- e) Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

2. Para el desempeño de sus funciones, los órganos previstos en esta Ley, contarán con el apoyo de las autoridades estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de su competencia. Los cuales establecerán las garantías necesarias para que los instrumentos de participación ciudadana sean reales, efectivos y democráticos.

3. Es obligación de las autoridades estatales y municipales, en su ámbito de competencia, fomentar y garantizar el respeto de los derechos previstos en esta Ley.

Artículo 4.

1. La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará tomando en cuenta su objeto, así como los principios rectores de la participación ciudadana previstos en el artículo 5, atendiendo indistintamente a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

2. A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto en la LEEBC, en los acuerdos del Consejo General dictados dentro de su competencia, los criterios obligatorios que dicte el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y a los principios generales del derecho.

Artículo 5.

1. Los principios rectores de la participación ciudadana son:

a) Libertad: Facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.

b) Democracia: Participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones comunes y en igualdad de condiciones.

c) Corresponsabilidad: Compromiso y deber compartido entre las ciudadanas y ciudadanos y el gobierno, de aceptar y atender el resultado de las decisiones que mutuamente se convinieron.

d) Solidaridad: Disposición recíproca de la sociedad y Gobierno para apoyarse y ayudarse mutuamente de modo fraterno, surge de los intereses por el bienestar de nuestro Estado y se basa en un sentimiento de pertenencia y unidad.

e) Bien General: Fin social hacia el cual tienden todos los objetivos del Gobierno y las personas en su conjunto.

f) Subsidiariedad: Presencia justa del poder político que respete la libertad e iniciativa de los gobernados.

g) Legalidad: Toda acción que se lleve a cabo deberá estar apegada y sustentada en la normatividad vigente.

h) Sustentabilidad: Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones del presente asegurando que impactarán de manera positiva los recursos en el futuro.

i) Tolerancia: Respeto y consideración hacia la diversidad y la diferencia de quienes conforman nuestra sociedad, así como a sus opiniones y expresiones.

j) **Equidad:** Entendida como un criterio de justicia que se basa en las decisiones tomadas apegadas a la normatividad, buscando el mayor beneficio de las personas.

k) **No Discriminación:** El impedimento a toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por objeto o resultado impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

l) **Máxima Publicidad:** Todos los actos y la información en materia de instrumentos de participación ciudadana son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los casos expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas circunstancias, y

m) **Accesibilidad:** Permite que cualquier instrumento de participación ciudadana sea utilizado por las ciudadanas y ciudadanos, evitando al máximo los obstáculos legales que impidan su ejercicio.

CAPÍTULO SEGUNDO

DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS

Artículo 6.

1. Adquieren la ciudadanía mexicana, los hombres y mujeres que reúnan los requisitos previstos en los artículos 34 de la Constitución Federal y 8 de la Constitución del Estado.

2. Las ciudadanas y ciudadanos en relación con los instrumentos de participación ciudadana reconocidos en la Constitución del Estado y esta Ley, tendrán los derechos y obligaciones siguientes:

a) Ejercer los derechos que les otorga esta Ley, sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes;

b) Promover, participar, ejercer y hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana a que se refiere esta Ley;

c) Ser informado, capacitado y tener acceso a la información relativa a los instrumentos de participación ciudadana;

- d) Cumplir con las disposiciones de esta Ley y aquellas disposiciones que de ella emanen;
- e) Los demás que establezca esta Ley, y la demás normatividad aplicable.

Artículo 7.

1. Para los efectos de esta Ley, son vecinos del Estado las ciudadanas y ciudadanos que tengan residencia efectiva en su territorio de por lo menos seis meses. La calidad de vecino no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de dirección nacional de partido político, por motivo de estudios o por causas ajenas a su voluntad, tenga que residir fuera del territorio del Estado por más de seis meses.

2. La calidad de vecino se acreditará mediante protesta de decir verdad, a través de la dirección que conste en la credencial para votar con fotografía.

Artículo 8.

1. En los procesos de consulta previstos en esta Ley solo podrán participar las ciudadanas y ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Tener vecindad en el estado o municipio de que se trate, con residencia efectiva de por lo menos seis meses;
- b) Estar inscrito en la Lista Nominal;
- c) Tener credencial para votar, y
- d) No estar suspendido en sus derechos políticos.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO PRIMERO DE LOS INSTRUMENTOS

Artículo 9.

1. Los instrumentos de participación ciudadana son:

- a) Plebiscito;
- b) Referéndum;
- c) Consulta Popular;
- d) Revocación de Mandato;
- e) Iniciativa Ciudadana;
- f) Presupuesto Participativo;
- g) Cabildo Abierto;
- h) Congreso Abierto, y
- i) Gobierno Abierto.

CAPÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES COMUNES PARA
PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR

Artículo 10.

1. El Instituto, a través del Consejo General, es el órgano responsable de la organización y desarrollo de los procesos de consulta relacionados con los instrumentos de participación ciudadana como Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular.

2. El Consejo General será la autoridad competente para recibir la solicitud, verificar los requisitos legales, calificar la procedencia; así como el cómputo de los resultados y ordenar, en su caso, los actos que sean necesarios de acuerdo a esta Ley, en los casos relacionados con los instrumentos de participación ciudadana referidos en el párrafo anterior.

Artículo 11.

1. Podrán solicitar la instrumentación de los instrumentos de participación ciudadana como son el Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, conforme a lo previsto en esta Ley:

- a) El Titular del Poder Ejecutivo;

- b) El Poder Legislativo, siempre que sea solicitado por las dos terceras partes de sus integrantes;
- c) Los Ayuntamientos, siempre que sea solicitado por las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo,
y
- d) Las ciudadanas y ciudadanos, conforme lo prevé esta Ley.

Artículo 12.

1. No podrán someterse a consulta, mediante algún instrumento de participación ciudadana, los actos, normas o temas, respecto de lo siguiente:

- a) Aquellos que realice la autoridad que corresponda por mandato de autoridad judicial;
- b) Aquellos relacionados con el régimen interno y de organización de los Poderes del Estado, así como de los Ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos del Estado, y
- c) Aquellos que restrinjan los derechos humanos.

Artículo 13.

1. Serán causas de improcedencia de los instrumentos de participación ciudadana reconocidos en esta Ley, las siguientes:

- a) Que no sean objeto de algún instrumento de participación ciudadana;
- c) Que el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea;
- d) Que la solicitud realizada por las ciudadanas y ciudadanos, no sea respaldada por el porcentaje requerido por esta Ley;
- e) Que se haya consumado y no pueda restituirse a la situación que guardaban con anterioridad, y
- f) Que los actos o normas que se pretendan someter a consulta no existan.

Artículo 14.

1. Las autoridades señaladas en el artículo 11, podrán presentar hasta tres solicitudes para cada jornada de consulta respecto de los instrumentos de participación ciudadana como el Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular. Tratándose de solicitudes promovidas por las ciudadanas y ciudadanos estas no tendrán límite alguno.

2. Las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser motivo de desistimiento una vez que se haya presentado la solicitud.

Artículo 15.

1. Para solicitar el inicio de los instrumentos de participación ciudadana como el Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, se deberá presentar ante el Instituto, un escrito que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Nombre completo, apellido paterno y materno, firma y copia de la credencial para votar de la persona solicitante;
- b) El tipo de instrumento de participación ciudadana solicitado;
- c) Propósito del instrumento de participación ciudadana de que se trate, así como su motivación;
- d) Precisar el acto, norma o tema y autoridad implicados en el instrumento de participación ciudadana que se solicita;
- e) Contener la redacción de la propuesta de pregunta para la consulta, y
- f) Domicilio ubicado en la ciudad sede del Instituto, para oír y recibir notificaciones.

2. En caso de que la solicitud provenga de las autoridades señaladas en el artículo 11, además de lo establecido en el párrafo anterior, deberá acompañarse el documento que acredite que la solicitud fue aprobada por el número de integrantes que esta Ley requiere.

Artículo 16.

1. La redacción de la propuesta de pregunta para la jornada de consulta, cumplirá con los requisitos siguientes:

- a) Se formulará en sentido claro y preciso, sin tecnicismos, de manera que permita una respuesta afirmativa o negativa;
- b) Referirse directamente al acto, norma o tema objeto de la consulta;
- c) Contener un solo enunciado por pregunta, y
- d) No contener posicionamientos y ningún tipo de juicio valorativo.

2. Cuando la redacción de la propuesta de pregunta incumpla con alguno de los requisitos señalados, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica prevendrá al solicitante dentro del plazo previsto en el artículo 17, señalando las inconsistencias encontradas, a efecto de que, dentro del plazo de dos días hábiles reformule la redacción de la misma. De no cumplirse con lo requerido, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica procederá a elaborar una nueva propuesta de pregunta bajo las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 17.

1. Una vez recibida la solicitud por el Instituto, el Consejero Presidente la turnará a la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, a fin de que en un plazo no mayor a tres días hábiles determine si la misma cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior. En caso de que, la solicitud incumpla con alguno de los requisitos señalados en los incisos a) al e) del artículo anterior, se prevendrá al solicitante a fin de que, dentro de un plazo de dos días hábiles, subsane las inconsistencias encontradas, bajo el apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento se tendrá por no presentada la solicitud.

2. En caso de que la solicitud no contenga domicilio para oír y recibir notificaciones, o bien este se señale fuera de la ciudad sede del Instituto, las notificaciones se practicarán a través de los estrados del Instituto.

Artículo 18.

1. Si la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica advierte el cumplimiento de los requisitos formales señalados en los artículos 15 y 16 procederá de la siguiente manera:

- a) Llevará a cabo la revisión de la ausencia de cualquier causal de improcedencia o impedimento legal previsto en los artículos 12 y 13, con excepción de la referida al porcentaje de firmas de apoyo que debe sustentar la solicitud promovida por las ciudadanas y ciudadanos;
- b) Se dará vista con la solicitud de inicio a la autoridad implicada a fin de que, dentro del plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su interés convenga;

c) Concluido lo anterior, se realizará el proyecto de resolución que corresponda, para ser propuesto al Consejo General. El proyecto de resolución respectivo será presentado dentro de los diez días hábiles siguientes a que concluya el plazo referido en el inciso anterior.

Artículo 19.

1. La resolución del Consejo General que apruebe el inicio del instrumento de participación ciudadana deberá ser notificada personalmente al solicitante, para lo cual deberá entregarse el formato oficial para la recolección de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, en los términos previstos en esta Ley.

2. La recolección de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos se realizará a través del formato oficial en instrumento de papel y/o, en su caso, mediante los mecanismos tecnológicos que apruebe el Consejo General.

3. El formato oficial para la recolección de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos contendrá, al menos:

- a) El tipo de instrumento de participación ciudadana de que se trate;
- b) El acto, norma o tema, según corresponda, que se pretende someter a consulta;
- c) La propuesta de pregunta;
- d) El espacio para el folio de cada hoja;
- e) El espacio para asentar nombre completo, apellidos paterno y materno, clave de elector, y firma de la ciudadana o ciudadano solicitante; y
- f) La fecha de expedición.

Artículo 20.

1. El periodo para recolectar las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos será de cuarenta y cinco días naturales, y este plazo iniciará a partir de que el formato oficial quede a disposición del solicitante. Se entenderá lo anterior, una vez que la resolución aprobada por el Consejo General sea notificada en forma personal al solicitante, acto en que se hará entrega de un ejemplar impreso del formato oficial, así como en medio digital.

2. El Instituto pondrá a disposición permanente de las personas interesadas el formato oficial, tanto en sus oficinas, así como en su portal oficial de internet. De igual manera, procurará que los formatos oficiales estén disponibles para las personas con alguna discapacidad visual y en las lenguas indígenas de los pueblos originarios con mayor representación en el Estado.

Artículo 21.

1. Concluido el plazo para recolectar las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, dentro de los tres días hábiles siguientes, la persona solicitante deberá presentar ante el Instituto la totalidad de los formatos oficiales recabados.

2. Una vez recibidos los formatos oficiales que respaldan la solicitud del instrumento de participación ciudadana, el Instituto procederá a su verificación de su situación registral en la Lista Nominal que corresponda, para ello deberá realizar las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional.

Artículo 22.

1. El Instituto contará con un plazo de quince días hábiles para obtener los resultados de la verificación de la situación registral de cada uno de los apoyos de las ciudadanas y ciudadanos que sustentan la solicitud.

2. Recibido el reporte detallado sobre la revisión del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica notificará dentro de los dos días hábiles siguientes al solicitante, a efecto de que dentro de un plazo de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga respecto de las inconsistencias encontradas.

Artículo 23.

1. En caso de que la recolección de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos se realice en formatos distintos a los aprobados por el Consejo General, estos no serán considerados para el porcentaje de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos exigido por esta Ley. Asimismo, no serán computados aquellos formatos oficiales que se hayan entregado de forma extemporánea.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los apoyos de las ciudadanas y ciudadanos no serán contabilizados para efecto del porcentaje requerido por esta Ley, en los supuestos siguientes:

- a) Nombres o claves de elector con datos erróneos;
- b) La ciudadana o ciudadano no tenga su domicilio en la demarcación territorial en la que se delimita el instrumento de participación ciudadana de que se trate;
- c) La ciudadana o ciudadano no sea localizado en la Lista Nominal que corresponda, y
- d) Cuando una misma persona haya otorgado su respaldo dos o más veces, solo se contabilizará una de las firmas.

Artículo 24.

1. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de los plazos señalados en el artículo 22, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica presentará al Consejo General el dictamen por el que se determina la revisión del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que se acompaña a la solicitud.

2. El Dictamen que formule la Comisión de Participación Ciudadana y Educación precisará, cuando menos el número y porcentaje de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que resultaron válidos e inválidos, así como la propuesta de procedencia o improcedencia del instrumento de participación ciudadana.

3. En caso de que en el Dictamen se determine la procedencia del instrumento de participación ciudadana, una vez aprobado por el Consejo General se deberá notificar en un plazo no mayor a tres días hábiles a la autoridad implicada, a los solicitantes y publicarse en el Periódico Oficial, y en su caso, en un diario de mayor circulación en el Estado o, en su caso, en uno del Municipio que corresponda.

Artículo 25.

1. En la tramitación de los instrumentos de participación ciudadana como el Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con estos.

2. El Instituto promoverá la participación de las ciudadanas y ciudadanos y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Dentro de las actividades de difusión que desarrolle, podrá contemplar la organización y celebración de debates cuando lo considere conveniente.

3. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las ciudadanas y ciudadanos.

4. Durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana señalados en el párrafo 1, es decir, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de consulta, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

5. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

Artículo 26.

1. Las jornadas de consulta de los instrumentos de participación ciudadana referente al Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular podrán verificarse simultáneamente con una jornada electoral, siempre y cuando se soliciten a más tardar ciento ochenta días naturales antes de la jornada electoral respectiva.

2. Las jornadas de consulta de los instrumentos de participación ciudadana solicitadas en año no electoral o treinta días después de la jornada electoral, se verificarán dentro de los noventa días siguientes de la emisión de la convocatoria.

3. Se excluye de lo señalado en el párrafo 1 del presente artículo la jornada de consulta relativa a los instrumentos de participación ciudadana correspondiente a la Revocación de Mandato, para lo cual se estará a lo previsto en el apartado correspondiente de esta Ley.

Artículo 27.

1. Los actos, normas o temas que hayan sido objeto de plebiscito, referéndum o consulta popular, respectivamente, no podrán serlo de uno posterior dentro del mismo año calendario en que se hayan consultado.

**CAPÍTULO TERCERO
DEL PLEBISCITO**

Artículo 28.

1. El plebiscito tiene por objeto el consultar a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a:

- a) Los actos del Poder Ejecutivo;
- b) Los actos del Poder Legislativo, y
- c) Los actos de los Ayuntamientos;

2. Se entiende por actos del Poder Ejecutivo aquellos emitidos por su Titular, comprendiéndose también los emitidos por las personas titulares de las secretarías o dependencias de la administración pública centralizada o paraestatal.

3. Se entiende por actos de los Ayuntamientos aquellos emitidos por la persona que ocupa la Presidencia municipal, comprendiéndose también los emitidos por el Cabildo y las personas titulares de las secretarías o dependencias de la administración pública municipal.

4. El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos podrán consultar mediante el plebiscito a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo previo a la realización de actos o decisiones de su competencia.

5. Las ciudadanas y ciudadanos podrán solicitar se someta a plebiscito un acto de autoridad estatal o municipal previo a su realización, o una vez aprobado y, en su caso, publicado en el Periódico Oficial o la gaceta municipal, según corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su emisión o publicación.

Artículo 29.

1. Para efectos del presente capítulo se identifican como actos materia de plebiscito, de manera enunciativa, más no limitativa los siguientes:

a) En el Poder Ejecutivo:

- I. La creación de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la población indígena del Estado; así como de las personas con discapacidad o preferencias sexuales diferentes, así como sujetas a cualquier forma de discriminación;
- II. La construcción de infraestructura física;
- III. La planeación del Desarrollo Estatal y Regional;
- IV. Las políticas de preservación del medio ambiente;
- V. La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas;
- VI. La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
- VII. Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico;
- VIII. Los permisos de uso de suelo, y
- IX. La contratación de deuda pública.

b) En el Poder Legislativo:

- I. La creación, fusión y supresión de municipios;
- II. La aprobación sobre la formación de nuevos municipios o territorios; y
- III. El arreglo de límites municipales.

c) En los municipios:

- I. El otorgamiento de concesiones, permisos y la prestación de los servicios públicos municipales;
- II. La contratación de deuda pública;
- III. La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;
- IV. Las políticas de preservación del medio ambiente;

- V. La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas;
- VI. El cambio de denominación del Municipio, y
- VII. Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.

Artículo 30.

1. Tratándose del Plebiscito para someter a consulta los actos del Poder Legislativo se estará a lo siguiente:

- a) Cuando la solicitud se trate de la formación o supresión de un municipio, el plebiscito deberá aplicarse a las ciudadanas y ciudadanos del Municipio que se pretenda afectar. En el caso de la fusión de dos o más Municipios, este deberá aplicarse en cada uno de ellos, y
- b) En la formación de un municipio o en su supresión, se estará a lo dispuesto en los artículos 76 de la Constitución del Estado y 27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.

Artículo 31.

1. Podrán iniciar un plebiscito en el ámbito estatal, las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno por ciento de la Lista Nominal.

2. Las ciudadanas y ciudadanos podrán iniciar un plebiscito en el ámbito municipal de conformidad con las reglas siguientes:

- a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal;
- b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro por ciento de la Lista Nominal;
- c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y
- d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal.

3. Las ciudadanas y ciudadanos podrán respaldar más de un plebiscito, pero no procederá el trámite simultáneo de los plebiscitos que se contrapongan entre sí, en este caso procederá la solicitud que tenga más firmas de apoyo.

Artículo 32.

1. Los resultados del plebiscito estatal tendrán efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación y acuda a votar al menos el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

2. El resultado del plebiscito municipal tendrá efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación y de conformidad con lo siguiente:

a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;

b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;

c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, y

d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

CAPÍTULO CUARTO DEL REFERÉNDUM

Artículo 33.

1. El referéndum es el proceso mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a la norma o normas siguientes:

- a) La modificación, reforma, adición o derogación de disposiciones de la Constitución del Estado;
- b) La creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos que expida el Poder Legislativo, y
- c) La creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de reglamentos municipales.

2. El Poder Legislativo y los Ayuntamientos mediante el referéndum podrán consultar a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo previo a la aprobación de la norma o normas objeto del referéndum, de acuerdo al ámbito de su competencia y a las reglas siguientes:

- a) Tratándose de referéndum constitucional, en el caso del Poder Legislativo con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, y en caso de que sean los Ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando menos la mitad más uno de los municipios del Estado con la aprobación de la mayoría calificada de los integrantes del Cabildo;
- b) Tratándose de referéndum legislativo, con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo, y
- c) En caso de referéndum municipal, con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento respectivo.

3. Las ciudadanas y ciudadanos podrán solicitar se someta a referéndum la norma o normas una vez publicadas en el Periódico Oficial o gaceta municipal, según corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su publicación.

Artículo 34.

1. El referéndum podrá ser:

a) Atendiendo a la materia:

I. Referéndum constitucional, que tiene por objeto aprobar o rechazar modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución del Estado;

II. Referéndum legislativo, que tiene por objeto aprobar o rechazar la creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de las leyes o decretos que expida el Poder Legislativo, y

III. Referéndum reglamentario municipal, que tiene por objeto aprobar o rechazar, la creación, modificación, derogación o abrogación de reglamentos municipales.

b) Atendiendo a su eficacia:

I. Constitutivo, que tiene por resultado aprobar en su totalidad el ordenamiento que se someta a consulta;

II. Abrogatorio, que tiene por resultado rechazar totalmente el ordenamiento que se someta a consulta, y

III. Derogatorio, que tiene por resultado rechazar sólo una parte del total del ordenamiento que se somete a consulta.

Artículo 35.

1. Podrán iniciar un referéndum las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal cuando se trate de referéndum constitucional, y cuando corresponda a referéndum legislativo deberá representar cuando menos el punto cinco por ciento de la Lista Nominal.

2. Tratándose de la solicitud de referéndum municipal, este se solicitará de conformidad con las reglas siguientes:

a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal;

b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro por ciento de la Lista Nominal;

c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y

d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal.

3. Las ciudadanas y ciudadanos podrán respaldar más de un referéndum, pero no procederá el trámite simultáneo de los referéndums que se contrapongan entre sí, en este caso procederá la solicitud que tenga más firmas de apoyo.

Artículo 36.

1. Los resultados del referéndum constitucional tendrán efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida y acuda a votar al menos el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y este se distribuya en la mitad más uno de los municipios del Estado.

2. Los resultados del referéndum legislativo tendrán efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación y acuda a votar al menos el equivalente al diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

3. El resultado del referéndum municipal tendrá efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación y, de conformidad con lo siguiente:

a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos inscrita en la Lista Nominal;

b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos inscrita en la Lista Nominal;

c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, y

d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 37.

1. La Consulta Popular es el instrumento a través del cual los poderes Ejecutivo y Legislativo, los Ayuntamientos y las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, someten a consideración de las ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interés en el Estado o Municipio según corresponda, por medio de preguntas directas.

Artículo 38.

1. Podrán iniciar una consulta popular las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno por ciento de la Lista Nominal.

2. Las ciudadanas y ciudadanos podrán iniciar una consulta popular en el ámbito municipal, de conformidad con las reglas siguientes:

- a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal;
- b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro por ciento de la Lista Nominal;
- c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y
- d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal.

3. Las ciudadanas y ciudadanos podrán respaldar más de una solicitud de consulta popular, pero no procederá el trámite simultáneo de las consultas que se contrapongan entre sí, en este caso procederá la solicitud que tenga más firmas de apoyo.

Artículo 39.

1. Los resultados de la Consulta Popular estatal tendrán efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida y acuda a votar al menos el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

2. El resultado de la Consulta Popular municipal tendrá efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida y de conformidad con lo siguiente:

a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;

b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;

c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, y

d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Artículo 40.

1. La Revocación de Mandato, es un instrumento de participación ciudadana, mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos deciden que la persona Titular del Poder Ejecutivo concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, a partir de la pérdida de la confianza.

2. Podrá solicitarse la revocación de mandato únicamente para el cargo del Titular del Ejecutivo del Estado.

Artículo 41.

1. La revocación de mandato sólo podrá solicitarse transcurrida la mitad del periodo constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de Titular del Poder Ejecutivo, y hasta tres meses posteriores al mismo y podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional.
2. Las ciudadanas y ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo al periodo previsto en el párrafo anterior y hasta el último día de conclusión del mismo.
3. El Instituto deberá poner a disposición de las ciudadanas y ciudadanos, un mes antes de que transcurra la mitad del periodo constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de que se trate, los formatos oficiales y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.
4. El Consejo General será la autoridad competente para recibir la solicitud, verificar los requisitos legales, calificar la procedencia; así como el cómputo de los resultados y ordenar, en su caso, los actos que sean necesarios de acuerdo a esta Ley, en los casos relacionados con la Revocación de Mandato.

Artículo 42.

1. Podrán solicitar la revocación de mandato del Titular del Ejecutivo, las y los ciudadanos que tengan vecindad en el Estado y que representen cuando menos el 10% de la Lista Nominal, distribuida en la mitad más uno de los municipios del Estado.
2. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar distribuido en cuando menos el 2% de cada uno de los municipios.

Artículo 43.

1. La solicitud de revocación de mandato deberá ser presentada ante el Consejo General, y deberá contener:
 - a) Nombre y cargo del servidor público al que se solicita sujetar al procedimiento de revocación de mandato;
 - b) El nombre completo, el apellido paterno y materno, la clave de elector de la Credencial para Votar vigente y firma de quienes lo solicitan, y

c) Señalar el nombre de un representante común, con domicilio para oír y recibir notificaciones.

Artículo 44.

1. Toda solicitud de revocación de mandato deberá acompañarse de los formatos oficiales que el Instituto emita para tal efecto.

Artículo 45.

1. Recibida la solicitud, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, verificará los datos de los formatos en los que se recabó el apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción, en los términos del convenio respectivo con el Instituto Nacional.

2. En caso de invalidez de alguna de las firmas que acompañen la solicitud, se notificará a los solicitantes para que manifiesten lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación.

3. La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica deberá resolver la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la verificación de los datos realizada por el Instituto Nacional.

4. En caso de ser procedente la solicitud, la consulta para determinar la revocación de mandato deberá llevarse a cabo el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federal o locales.

Artículo 46.

1. El resultado será vinculante, siempre y cuando participe al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en el Listado Nominal y que de éstas la mayoría absoluta se manifieste a favor de la revocación.

2. Si la consulta diera como resultado la revocación del Titular del Poder Ejecutivo, el Consejo General deberá informar al Poder Legislativo para que inicie el procedimiento que corresponda.

Artículo 47.

1. En la tramitación de la Revocación de Mandato, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con estos.
2. El Instituto promoverá la participación de las ciudadanas y ciudadanos y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Dentro de las actividades de difusión que desarrolle, podrá contemplar la organización y celebración de debates cuando lo considere conveniente.
3. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las ciudadanas y ciudadanos.
4. Durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta de la Revocación de Mandato, es decir, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de consulta, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
5. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA

Artículo 48.

1. La Iniciativa Ciudadana es el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las Instituciones de Educación Superior del Estado, pueden presentar ante la instancia que corresponda:
 - a) La expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes estatales ante el Poder Legislativo, así como reformas a la Constitución del Estado, y
 - b) La expedición, reforma, derogación o abrogación de reglamentos municipales ante los Ayuntamientos.

Artículo 49.

1. No podrán ser objeto de Iniciativa Ciudadana las materias siguientes:

- a) Aquellas relacionadas con el régimen interno y de organización de los Poderes del Estado, así como de los Ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos del Estado, y
- b) Aquellas que restrinjan los derechos humanos.

Artículo 50.

1. La Iniciativa Ciudadana deberá contener los siguientes requisitos:

- a) El propósito de la iniciativa, así como su motivación y articulado;
- b) La autoridad competente, según corresponda, y
- c) El representante común, con domicilio para oír y recibir notificaciones.

2. Las ciudadanas y ciudadanos podrán presentar la Iniciativa Ciudadana, siempre y cuando la solicitud sea apoyada por al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal cuando se trate de Iniciativa Ciudadana Estatal, y de al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio que corresponda cuando se trate de Iniciativa Ciudadana Municipal.

3. Las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos a la iniciativa ciudadana de que se trate deberán asentarse en el formato oficial que establezca el Instituto, los cuales estarán disponibles para los interesados en su portal de internet oficial. De igual manera, procurará que los formatos oficiales estén disponibles para las personas con alguna discapacidad visual y en las lenguas indígenas de los pueblos originarios con mayor representación en el Estado.

Artículo 51.

1. Las Instituciones de Educación Superior del Estado, podrán presentar por conducto de su Rector, Director General o máxima autoridad reconocida en su normatividad o estatutos, iniciativas de leyes y reformas a las ya existentes, siempre que sean aprobadas por las dos terceras partes del total de los miembros del Consejo

Universitario, Junta Directiva o el Órgano Colegiado, sea cual fuere su denominación en dicha Institución de Educación Superior que se encuentre facultado para ello.

2. En la presentación de dichas iniciativas, las Instituciones de Educación Superior deberán observar lo siguiente:

- a) Deberán acompañar copia simple del acta de la sesión o acuerdo certificado en donde se acredite que la iniciativa se encuentra respaldada por las dos terceras partes de la máxima autoridad facultada para ello, y
- b) Deberán acompañar a la iniciativa, copia simple del documento en el que se acredite que el inicialista es el titular de la máxima autoridad de dicha institución.

Artículo 52.

1. La solicitud de Iniciativa Ciudadana deberán presentarse ante el Poder Legislativo o ante el Ayuntamiento que corresponda, según el tipo de iniciativa de que se trate.

2. Una vez recibida la iniciativa ciudadana esta será remitida al Pleno del Poder Legislativo o, en su caso, al Cabildo del Ayuntamiento, los cuales determinarán a la comisión a las que debe turnarse la misma para la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley, y dictamine sobre su viabilidad o inviabilidad.

3. En caso de que, la Iniciativa Ciudadana incumpla con alguno de los requisitos señalados en el párrafo 1 del artículo 50, se prevendrá al solicitante a fin de que, dentro de un plazo de dos días hábiles, subsane las inconsistencias encontradas, bajo el apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento se tendrá por no presentada la Iniciativa Ciudadana.

4. Tratándose del requisito previsto en el párrafo 2 del artículo 50, la Comisión a la que se haya turnado la Iniciativa Ciudadana, solicitará al Instituto la verificación de la situación registral en la Lista Nominal que corresponda, del respaldo ciudadano de la Iniciativa, para ello deberá realizar las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional.

5. El Instituto contará con un plazo de quince días hábiles para obtener los resultados de la verificación de situación registral de cada uno de los apoyos de las ciudadanas y ciudadanos que sustentan la Iniciativa Ciudadana.

6. Recibido el reporte detallado sobre la revisión del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos a la Iniciativa Ciudadana, el Instituto lo remitirá al Poder Legislativo o, en su caso, al Ayuntamiento que corresponda, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Artículo 53.

1. La comisión del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda, deberá resolver sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la Iniciativa Ciudadana en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la recepción del reporte de verificación del apoyo ciudadano que reciba por parte del Instituto.

2. En caso de que la comisión del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda no resuelva dentro del plazo anterior, se considerará que la Iniciativa Ciudadana cumple con todos los requisitos que prevé esta Ley, por lo que deberá dictaminarse sobre su viabilidad o inviabilidad.

3. Cuando la Iniciativa Ciudadana cumpla con todos los requisitos previstos en este Capítulo, la comisión del Poder Legislativo del Estado o del Ayuntamiento que corresponda deberá dictaminar sobre su viabilidad o inviabilidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en caso de los Ayuntamientos, de acuerdo con su normatividad interna aplicable.

Artículo 54.

1. Toda Iniciativa Ciudadana una vez dictaminada por la comisión del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda, deberá someterse a sus respectivos Plenos para su aprobación o rechazo, lo cual deberá suceder en un plazo no mayor a cuatro meses.

2. En la discusión de la Iniciativa Ciudadana ante la comisión o el Pleno del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda, podrá participar con voz el representante común de los promoventes.

Tratándose de iniciativas ciudadanas promovidas por las Instituciones de Educación Superior participará su representante designado para tales efectos.

3. Toda iniciativa ciudadana que sea rechazada por el Pleno del Poder Legislativo, sólo podrá ser presentada hasta su siguiente periodo de sesiones. En el caso de iniciativas ciudadanas rechazadas por el Cabildo del Ayuntamiento, estas solo podrán ser presentadas de nueva cuenta en el año siguiente al de su presentación.

CAPÍTULO OCTAVO

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 55.

1. El Presupuesto Participativo es el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos ejercen el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que destina el Ayuntamiento, para que sus habitantes optimicen su entorno proponiendo proyectos para mejora de sus colonias.

2. Se entenderá por Colonia, aquellas que se refieren a fraccionamientos, colonias, conjuntos habitacionales, ampliaciones, poblados, ejidos, localidades, pueblos, residenciales y zonas industriales, de conformidad con lo establecido en el Catálogo de Colonias que emite el Instituto Nacional.

3. Para tales efectos, cada Ayuntamiento destinará como mínimo un monto equivalente al cuatro por ciento de su presupuesto de egresos anual, y deberá distribuirlo de la siguiente manera:

- a) El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma proporcional entre las colonias en localidad urbana.
- b) El 50% restante se distribuirá de forma proporcional entre las colonias en localidad rural.

Artículo 56.

1. Los recursos asignados para el ejercicio del Presupuesto Participativo deberán satisfacer necesidades colectivas, tales como:

- a) Recuperación de espacios públicos;
- b) Infraestructura rural y urbana;
- c) Seguridad Pública;
- d) Medio Ambiente;
- e) Obras y servicios públicos, y
- f) Actividades recreativas, deportivas y culturales.

Artículo 57.


1. En el proceso del Presupuesto Participativo, el Ayuntamiento deberá realizar lo siguiente:

- a) Adoptar las medidas conducentes desde una perspectiva de género, inclusión y no discriminación para garantizar que la participación se dé en un marco de igualdad;
- b) Emitir convocatoria pública dirigida a la población en general para participar en la consulta de Presupuesto Participativo en el mes de enero de cada año, donde se establecerá por lo menos los siguientes elementos:

- I. El monto de los recursos públicos que se destinarán por colonia;
- II. Periodo y modalidad para el registro de proyectos;
- III. Periodo para determinar la viabilidad y factibilidad de proyectos, y
- IV. La metodología a utilizar para realizar la consulta y la fecha o periodo para la misma;


- c) Difundir los proyectos que se someterán a consulta, así como el monto de los recursos públicos que se destinarán para su ejecución, en su portal oficial, así como a través de todos los medios a su alcance;
- d) Llevar a cabo la votación de los proyectos, cómputo, validación y publicación de resultados;
- e) Ejecutar los proyectos del Presupuesto Participativo;
- f) Rendir informes sobre el avance de los proyectos y ejercicio del gasto, y
- g) Al finalizar el ejercicio fiscal deberá informar a la población la cantidad de obras que fueron realizadas y la inversión que se hizo en cada una de ellas.

2. El Instituto podrá:


- a) Colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realización de la consulta, y
 - b) Convenir con los Ayuntamientos para dar asesoría y apoyo técnico en la organización, desarrollo, cómputo y declaración de sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participativo; así como para supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten.
- 

Artículo 58.


1. El Ayuntamiento deberá conformar un órgano dictaminador para los proyectos que se presenten en el Presupuesto Participativo. Este órgano dictaminador estará obligado a realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos, de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que de él se desprenda.



2. El órgano dictaminador verificará, entre otras cosas, que los proyectos sobre Presupuesto Participativo no afecten suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas como patrimonio cultural, lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad en materia ambiental y demás legislación aplicable.




3. Para la integración del órgano dictaminador, el Ayuntamiento deberá invariablemente considerar dentro de este la participación de tres especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas con los proyectos a dictaminar, ajenos a cualquier ente público, y el restante deberán ser las personas responsables de las dependencias del Ayuntamiento involucradas con la naturaleza de los proyectos. El órgano dictaminador deberá conformarse por número impar, y con una integración máxima de siete personas.



Artículo 59.

1. El Ayuntamiento será el responsable de ejecutar los proyectos ganadores en las Colonias que corresponda, antes de la concusión del año fiscal en que se llevó a cabo la consulta. Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por factores externos a la administración de los proyectos o acciones.



2. En los casos en que no se hayan registrado proyectos en algunas de las colonias del Ayuntamiento, este a través del Cabildo, deberá aprobar ejercer los recursos del Presupuesto Participativo en estas colonias, dando preferencia a aquellas de naturaleza rural, mediante la realización de diversas obras que atiendan alguna de las necesidades colectivas señaladas en el artículo 56 de esta Ley. Lo anterior, en el entendido de que los recursos públicos del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal que corresponda deben ejercerse hasta agotarse en su totalidad

3. De manera bimestral el Ayuntamiento rendirá informes a la ciudadanía sobre los avances del proyecto y la ejecución del gasto. Al finalizar el ejercicio fiscal deberá informar al público en general la cantidad de obras que fueron realizadas y la inversión que se hizo en cada una de ellas.

Artículo 60.

1. La Auditoría Superior del Estado y las sindicaturas de los Ayuntamientos deberán conocer, vigilar y sancionar en todo momento la correcta aplicación de los recursos de Presupuesto Participativo.

2. En los casos en que no se haya concluido alguna de las obras objeto del Presupuesto Participativo en el año fiscal que corresponda, la Auditoría Superior del Estado y las sindicaturas de los Ayuntamientos, aplicarán y, en su caso, sancionarán en el marco de sus atribuciones lo conducente, a efecto de inhibir el mismo hecho en los siguientes ejercicios del Presupuesto Participativo.

CAPÍTULO NOVENO DEL CABILDO ABIERTO

Artículo 61.

1. El Cabildo Abierto, es un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebración de una sesión, en la cual los habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento.

2. Todas las propuestas o solicitudes planteadas por las ciudadanas y ciudadanos en las sesiones de Cabildo Abierto serán abordadas y discutidas por los Integrantes del Ayuntamiento y se les dará respuesta en esa misma sesión, o a más tardar en la próxima sesión de Cabildo Abierto, en orden preferente.

3. Las propuestas o solicitudes que sean presentadas por las ciudadanas y ciudadanos para estos efectos, deberán ser publicadas por el Ayuntamiento en su portal oficial de internet, así como la respuesta justificada de su aprobación o rechazo para tratarse en la sesión de Cabildo Abierto.

4. En caso de ser positiva la respuesta a la propuesta o solicitud de las ciudadanas y ciudadanos planteada en la sesión de Cabildo Abierto, el Ayuntamiento dará difusión por los medios a su alcance, con el propósito de estimular la participación ciudadana responsable en beneficio de la comunidad.

5. Las sesiones de Cabildo Abierto serán públicas, transmitidas en vivo por internet y se llevarán a cabo de manera mensual.

6. El Ayuntamiento en la primer semana de diciembre del año previo a que se celebren las sesiones de cabildo, determinará el calendario anual; así como, en donde habrán de desarrollarse las sesiones de cabildo abierto, las cuales podrán realizarse alternadamente entre la sede oficial y espacios públicos en las diferentes colonias o delegaciones del municipio, mismo que podrá ser modificado, mediante Acuerdo del propio Órgano Colegiado; debiendo notificar al Instituto de dicho calendario, así como de sus modificaciones.

7. A estas sesiones se convocará a las ciudadanas y ciudadanos y podrá invitarse a representantes de los poderes del Estado, de la Federación y servidores públicos municipales.

Artículo 62.

1. Para la realización de las sesiones de Cabildo Abierto, se observará lo previsto en el presente artículo.

2. El Ayuntamiento emitirá la convocatoria para la celebración de la sesión de Cabildo Abierto con una anticipación no menor a cinco ni mayor a diez días hábiles. Dicha convocatoria será fijada en lugares públicos y se le dará la mayor difusión posible.

3. El orden del día para la sesión del Cabildo Abierto deberá incluir como mínimo los siguientes puntos:

- a) Lista de asistencia y declaración del quórum legal;
- b) Aprobación del orden del día;
- c) Presentación de asuntos a tratar;
- d) Lectura del procedimiento previsto en el Reglamento correspondiente de cada Ayuntamiento, para el desarrollo de las sesiones de Cabildo abierto;
- e) Participación de los integrantes del Ayuntamiento;
- f) Participación de las ciudadanas y ciudadanos en orden a su inscripción, y
- g) Asuntos generales.

4. Los habitantes del municipio podrán asistir a la sesión de Cabildo Abierto en calidad de participantes o como público asistente.

5. Las ciudadanas y ciudadanos interesados en asistir como participantes, deberán registrarse previamente, conforme a los plazos, y requisitos señalados en la convocatoria correspondiente.

6. Las ciudadanas y ciudadanos del municipio, deberán presentar sus propuestas o solicitudes ante la Presidencia Municipal, mismas que deberán contener preferentemente, los antecedentes y la propuesta de solución de un asunto de interés público.

7. Por ningún motivo podrá interrumpirse la sesión de Cabildo Abierto, salvo en los siguientes casos:

- a) Por falta de quórum legal para continuar la sesión;
- b) Cuando se pongan en riesgo las instalaciones y/o la seguridad de los miembros del Cabildo o de los asistentes, y
- c) Cuando no se reúnan las condiciones mínimas de orden y/o seguridad para continuar con la sesión.

8. Para lo no previsto en el presente capítulo, se observará lo dispuesto en la normatividad aplicable de los Ayuntamientos.

CAPÍTULO DÉCIMO

CONGRESO ABIERTO

Artículo 63.

1. El Congreso Abierto, es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual, quienes integran el Poder Legislativo, dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las normas que rigen la vida pública, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como la calidad, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de la administración pública, la impartición de justicia, el manejo del presupuesto público y otros asuntos de la vida pública.

2. El Congreso Abierto se promoverá junto con la solicitud de Iniciativa Ciudadana, por medio de petición realizada por el representante de los solicitantes en los términos de los artículos 49 y 50 de esta Ley.

Artículo 64.

1. En toda solicitud de Congreso Abierto se debe hacer mención sobre la reforma o ley a tratar y deberá ser dirigida al Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo quien lo remitirá a la Comisión de Dictamen Legislativo que le corresponda realizar el proceso de análisis y discusión.

2. Una vez recibida la solicitud de Congreso Abierto, el Poder Legislativo tendrá cinco días hábiles para dar respuesta por escrito, fundada y motivada a los solicitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento; en caso de ser procedente la solicitud deberá señalar día, hora y lugar para la realización de la sesión o la mesa técnica legislativa, anexando el orden del día para su desarrollo.

3. Todo el proceso de discusión, análisis y votación de la reforma constitucional o creación o modificación de una Ley deberá ser bajo el principio de máxima publicidad y transparencia proactiva. Para ello, el Poder Legislativo deberá implementar mesas técnicas legislativas y foros virtuales, donde las ciudadanas y ciudadanos promoventes participen de manera efectiva y quede constancia de los estudios, aportaciones y recomendaciones hechas durante el proceso de análisis y discusión.

4. Se entenderá por mesas técnicas legislativas los grupos de trabajo encargados de recibir toda la información cuantitativa y cualitativa del proceso participativo y elaborar y redactar propuestas de modificaciones, adiciones a una norma o ley.

5. Se entenderá por foros virtuales el mecanismo a través del cual las ciudadanas y ciudadanos podrán emitir opiniones y propuestas sobre los proyectos de ley que se analizan en las diferentes comisiones de dictamen legislativo del Poder Legislativo, a través del uso de las tecnologías de la información.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DEL GOBIERNO ABIERTO

Artículo 65.

1. El Gobierno Abierto es el mecanismo que permite la participación democrática de las ciudadanas y ciudadanos en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas públicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

2. Son principios rectores del Gobierno Abierto, la transparencia, la participación y la colaboración, cuyo objetivo es la rendición de cuentas.

3. El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos realizarán anualmente una convocatoria para que, en conjunto con la participación de las ciudadanas y ciudadanos, se defina un plan de trabajo anual que permita atender las problemáticas más relevantes, con compromisos específicos, concretos, incluyentes, estratégicos y medibles.

4. Para la definición de las problemáticas y compromisos, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, en conjunto con las ciudadanas y ciudadanos se auxiliarán por medio de conversatorios, glosas ciudadanas, paneles de discusión y/o mesas de trabajo, para la definición de las problemáticas y compromisos que se asumirán. Los compromisos, actividades y resultados acordados se integrarán en un solo documento al cual se le denominará Plan de Acción, mismo que tendrá una vigencia mínima de un año.

5. El Plan de Acción señalado en el párrafo anterior será presentado a la sociedad en un evento público que, a su vez, marcará el inicio del proceso de implementación de las actividades. A partir de esta fecha el Poder Ejecutivo, así como los Ayuntamientos contarán con un plazo de un año calendario para cumplir con las actividades y los resultados considerados en el referido Plan de Acción.

6. Una vez iniciado el Plan de Acción, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos deberán habilitar en sus portales de internet institucionales toda la evidencia documental de las actividades realizadas en el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como los avances correspondientes.

TÍTULO TERCERO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA

CAPÍTULO PRIMERO DE LA CONVOCATORIA

Artículo 66.

1. Los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana como son Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación de Mandato inician con la publicación de la convocatoria que emita el Instituto en el Periódico Oficial, siempre que la solicitud de un instrumento de participación ciudadana resulte procedente.

2. La convocatoria señalada en el párrafo anterior deberá contener, al menos lo siguiente:

- a) Fundamentos legales aplicables;
- b) Fecha y hora en que habrá de realizarse la jornada de consulta, o en su caso si se celebra en la jornada electoral local los datos de esta;
- c) Breve descripción del acto, norma o tema que se somete a consulta;
- d) La pregunta a consultar;
- e) Circunscripción territorial en que se realizará;
- f) Requisitos para participar, y

g) Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria.

3. La convocatoria que expida el Consejo General deberá publicarse en el Periódico Oficial, en el portal oficial de internet del Instituto, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los Ayuntamientos que correspondan, en por lo menos dos periódicos de mayor circulación en el Estado o Municipios de que se trate, así como colocarse en los lugares de mayor afluencia de ciudadanas y ciudadanos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 67.

1. Los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana como Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación de Mandato, se componen de las etapas siguientes:

a) Preparación: Comprende desde la publicación que realiza el Consejo General de la convocatoria del instrumento de participación ciudadana de que se trate y concluye al iniciarse la jornada de consulta;

b) Jornada de Consulta: Inicia el día de la votación y concluye con la clausura de las casillas o centros de votación;

c) Cómputos y calificación de resultados: Inicia con la remisión de los expedientes de votación al Consejo General y concluye con los cómputos de la votación, y

d) Declaración de los efectos: Comprende desde los resultados y concluye con la notificación de los mismos a la autoridad correspondiente.

2. En los procesos de consulta que se celebren no se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de los partidos políticos que establece la LEEBC.

3. Sin perjuicio de lo anterior, los representantes de los partidos políticos registrados o acreditados ante el Consejo General, podrán participar en la vigilancia de la organización y desarrollo de los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley.

Artículo 68.

1. El Instituto, a través de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, preparará el proyecto para la realización de los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana como Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación de Mandato, para ser aprobado por el Consejo General.

2. Dicho proyecto podrá contemplar la utilización de nuevas tecnologías para su organización y votación, incluyendo la urna electrónica, el voto electrónico y la instalación de centros de votación. La instrumentación de las nuevas tecnologías sólo podrá ser autorizada siempre y cuando garantice la autenticidad y el secreto del voto conforme a lo dispuesto en la LEEBC.

3. En caso de ser necesario, el Instituto solicitará a los poderes Ejecutivo y Legislativo los recursos públicos necesarios para estar en aptitud de organizar los procesos de consulta que prevé esta Ley.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Artículo 69.

1. En las jornadas de consulta de los instrumentos de participación ciudadana que no sean coincidentes con la jornada electoral de un proceso electoral local, el Consejo General determinará la instalación de Centros de Votación como los órganos encargados de recibir la votación o sufragios de las ciudadanas y ciudadanos y realizar el escrutinio y cómputo respectivo.

2. Cuando la jornada de consulta se realice el día de la jornada electoral local se estará a lo que disponga la LEEBC en materia de instalación y ubicación de mesas directivas de casilla, y en caso de que esta sea concurrente con una elección federal se estará a lo dispuesto en la LGIPE.

Artículo 70.

1. Los Centros de Votación estarán integrados, al menos, por seis ciudadanas o ciudadanos, que ejercerán las funciones de presidente, secretario, dos escrutadores y, en su caso, dos suplentes generales, con las atribuciones que, a los miembros de la mesa directiva de casilla establece la LEEBC.

2. En la integración de los Centros de Votación, no podrán participar representantes de los partidos políticos, ni servidoras y servidores públicos del orden de gobierno cuyo acto se someta a consulta.

3. Los Centro de Votación tendrán a su cargo, además de garantizar la libre emisión y efectividad del voto, la secrecía del mismo y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo durante la jornada de consulta; asimismo, hacer llegar oportunamente a los centros de recolección los paquetes que contengan la documentación de la jornada de consulta.

Artículo 71.

1. Las funcionarias y funcionarios de los Centros de Votación serán designados, mediante el método que determine el Consejo General, en cada caso.

Artículo 72.

1. El Consejo General, atendiendo a las necesidades particulares y específicas de cada instrumento de participación ciudadana, decidirá el número y ubicación de los Centros de Votación, utilizando la Lista Nominal con fecha de corte más inmediato a la emisión de la convocatoria. En todo caso, deberá establecerse por lo menos un Centro de Votación por cada veinte secciones electorales.

Artículo 73.

1. Corresponde al Consejo General, el procedimiento de integración, capacitación, instalación y funcionamiento de los Centros de Votación.

2. Para la integración de los Centros de Votación, se seguirán las etapas y procedimientos que prevé la LEEBC sobre el tema de mesas directivas de casilla, adecuando los tiempos al trámite de los instrumentos de participación ciudadana.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL
PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA

Artículo 74.

1. El ejercicio del derecho al voto por parte de las ciudadanas y ciudadanos, podrá realizarse mediante boletas de votación que para tal efecto apruebe el Consejo General, observando lo siguiente:

- a) Entidad, Municipio y Distrito Electoral, de conformidad con la naturaleza del voto y con la aplicación territorial del proceso de consulta;
- b) Talón desprendible con folio;
- c) La pregunta o preguntas aprobadas para la consulta;
- d) Cuadros o círculos para señalar las opciones: "SI" y "NO";
- e) Descripción breve del acto, norma o tema que se somete a consulta, y
- f) Sello y firmas impresas de las personas titulares de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva del Instituto.

2. La votación podrá ejercerse mediante el uso de nuevas tecnologías con la modalidad e instrumentos aprobados por el Consejo General, siempre y cuando se observen las medidas que garanticen la efectividad y secrecía del voto, de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 75.

1. En la jornada de consulta del instrumento de participación ciudadana de que se trate, se podrán reutilizar los materiales electorales como cancelos, urnas, mamparas, entre otros, de procesos electorales o de instrumentos de participación ciudadana pasados, siempre que estos se encuentren en buen estado.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA JORNADA DE CONSULTA

Artículo 76.

1. La jornada de consulta de los instrumentos de participación ciudadana, se desarrollará en el horario y términos que la LEEBC prevé para la jornada electoral de los procesos electorales.

2. El Consejo General será el encargado de determinar las medidas necesarias para que la jornada de consulta de los instrumentos de participación ciudadana se desarrolle de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.

Artículo 77.

1. El Instituto Estatal determinará la viabilidad de realizar conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de los centros de votación o de las casillas, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada de consulta, de conformidad con los lineamientos que emita para tal efecto.

CAPÍTULO SEXTO

DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Artículo 78.

1. Una vez concluida la jornada de consulta del instrumento de participación ciudadana de que se trate, los integrantes del Centro de Votación procederán a realizar el escrutinio y cómputo de los recibidos en este.

2. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes del Centro de Votación determinan lo siguiente:

- a) El número de ciudadanas y ciudadanos que votaron;
- b) El número de votos emitidos en favor y en contra de la consulta del instrumento de participación ciudadana;
- c) El número de votos nulos, y

d) El número de boletas recibidas y sobrantes.

3. Para realizar el escrutinio y cómputo de los instrumentos de participación ciudadana, el Consejo General emitirá las reglas que los integrantes de los Centros de Votación deberán seguir.

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LOS RESULTADOS Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ

Artículo 79.

1. El Instituto, a través del Consejo General, efectuará el cómputo y declaración de validez de los resultados de los instrumentos de participación ciudadana, en los términos establecidos en los lineamientos de cómputo que para tal efecto apruebe.

Artículo 80.

1. El Instituto publicará los resultados oficiales y porcentajes de votación, en el Periódico Oficial, así como en un periódico de mayor circulación en el Estado o en el Municipio que corresponda.

2. El Instituto dará difusión de los resultados, a través de su página oficial de internet.

Artículo 81.

1. El Instituto, a través de la Presidencia del Consejo General, notificará los resultados definitivos del cómputo al solicitante, así como a la autoridad correspondiente, para los efectos legales conducentes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la declaratoria de validez de estos.

Artículo 82.

1. Cuando los resultados de los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana referentes al Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular sean vinculatorios, tendrán efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez que realice el Consejo General.

TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 83.

1. Los actos, omisiones o resoluciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los Ayuntamientos, así como del Instituto, dictados con motivo de la tramitación de alguno de los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley, podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral, a través del Recurso de Inconformidad, de conformidad con lo señalado en la Constitución del Estado y la LEEBC.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 84.

1. En el caso de solicitudes estatales o municipales promovidas por las ciudadanas y ciudadanos, los gastos para la realización de los procesos de consulta de que se trate los erogará el Instituto; por lo tanto, este deberá incluir y aprobar dentro de su proyecto de Presupuesto de Egresos, una partida destinada para su realización.

2. Tratándose de los procesos de consulta promovidos por los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como por los Ayuntamientos, los gastos que se originen para su implementación deberán ser erogados por estos, por lo que deberán establecer en sus proyectos de Presupuestos de Egresos una partida para tal efecto.

Artículo 85.

1. El presupuesto asignado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a los Ayuntamientos, así como al Instituto, para la realización de los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana previstos en

esta Ley, que no se ejerza será devuelto a la Hacienda Pública del Estado, en los términos de la normatividad aplicable.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS
PREVISTOS EN ESTA LEY

Artículo 86.

1. El Instituto, a través del Consejo General, tendrá facultades para ampliar los plazos y términos establecidos en esta Ley, cuando exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos previstos en esta Ley para los diversos instrumentos de participación ciudadana.

2. El acuerdo o acuerdos del Consejo General que determinen ampliaciones a los plazos y términos mencionados en el párrafo anterior, serán enviados para su publicación en el Periódico Oficial, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su aprobación.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS REFORMAS A LA LEY

Artículo 87.

1. Las reformas o adiciones que impliquen modificación a los instrumentos de participación ciudadana que se establecen en la presente Ley, requerirán que el Poder Legislativo realice un referéndum legislativo previo a su aprobación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 16 de febrero de 2001, así como sus reformas y adiciones.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la presente Ley.

CUARTO. Los procesos de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

QUINTO. El Instituto Estatal Electoral de Baja California tendrá un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para adecuar y crear los reglamentos, lineamientos y demás documentos necesarios, derivados de la presente Ley.

SEXTO. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado deberán autorizar las modificaciones necesarias en sus presupuestos de egresos, en el de los Ayuntamientos y del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para la instrumentación y cumplimiento de esta Ley.

SÉPTIMO. El Instituto Estatal Electoral de Baja California deberá de establecer en su proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio presupuestal inmediato siguiente a la publicación de la presente Ley, las necesidades presupuestales respectivas para dar cumplimiento a cabalidad a las atribuciones y obligaciones previstas en la misma.

OCTAVO. El Instituto Estatal Electoral de Baja California en coordinación con los tres poderes públicos del Estado, así como con los Ayuntamientos emprenderá en un plazo de ciento veinte días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley una campaña masiva de educación, capacitación, difusión y fomento de los instrumentos de participación ciudadana reconocidos en esta Ley.

En la ciudad de Mexicali, Baja California, a los _____ días del mes de febrero del año dos mil veinte.

A T E N T A M E N T E

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA

CONSEJERO PRESIDENTE



C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO

CONSEJERA ELECTORAL



C. DANIEL GARCÍA GARCÍA

CONSEJERO ELECTORAL



C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA

CONSEJERA ELECTORAL



C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA

CONSEJERO ELECTORAL

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA

CONSEJERO ELECTORAL

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ

CONSEJERA ELECTORAL

La presente hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Ley que formula el Instituto Estatal Electoral de Baja California, por la que se expide la Nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California, aprobada por el Consejo General en fecha __ de febrero __ de 2020, y que consta de ____ fojas útiles con texto solo en el anverso.

INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE EL DICTAMEN QUINCE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS, EN FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020.

**C. VICTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.**

Las y los que suscriben, CC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, GRACIELA AMEZOLA CANSECO, DANIEL GARCÍA GARCÍA, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA Y OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 46, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 111, 115, fracción V, y 117, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos someter a la consideración de esa Soberanía la siguiente **INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México la participación ciudadana constituye la institución a través de la cual el pueblo mexicano ejerce su derecho soberano de intervenir en los asuntos de Gobierno, ya sea de índole federal, estatal o municipal.

Para llegar a ello, México ha pasado por una serie de cambios que han traído como resultado la creación de diversos mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, esto no siempre ha sido así, ya que esta figura adquirió relevante importancia en México durante los últimos años.

Es así que a partir de la década de los ochenta nacen las consultas populares en México, y se llevan a cabo los primeros comités y consejos consultivos en el gobierno federal, fomentándose así la participación de la sociedad en la planeación del desarrollo del país.

Ahora bien, en 1983 con la reforma del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se invistió de personalidad jurídica a los municipios de los Estados sobre su patrimonio, y se otorgan ciertas competencias reglamentarias; situación que permitió a los municipios ejercer facultades para involucrar a las y los ciudadanos habitantes de su municipio en los asuntos públicos de los ayuntamientos.

A partir de esta reforma, nace la figura del referéndum; sin embargo no fue hasta la década de los noventa que los temas de participación social causaron efectos positivos sobre la normatividad, toda vez que en diversos estados de la república se realizaron reformas a sus constituciones locales en materia de participación ciudadana, abriendo el abanico de posibilidades de crear instrumentos jurídicos que fundamentaran la participación de los ciudadanos en temas públicos de trascendencia para la vida de su comunidad.

De esta forma, es importante resaltar que si bien a partir del reconocimiento del derecho a la participación ciudadana en nuestra Carta Magna se dio inicio al reconocimiento legal del derecho de las ciudadanas y ciudadanos de participar en temas de gobierno que sean de su interés, así como de elegir a sus representantes mediante elecciones democráticas y directas, poco se había impulsado o fomentado a la ciudadanía y las instituciones públicas a participar en las decisiones del poder ejecutivo federal, estatal y municipal, y mucho menos a instrumentar o fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, para que estos se puedan ejercer mediante procedimientos que impulsen su procedencia.

El Instituto Estatal Electoral de Baja California como una instancia obligada a promover valores y prácticas democráticas para incidir en la formación de la ciudadanía, ha aprobado desde 2017 diversos Programas de Cultura Cívica y Política con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la cultura democrática en el Estado.

Con ese fin y teniendo como uno de sus ejes estratégicos el diálogo, se establecieron diversas líneas de acción diseñadas para configurar espacios donde se privilegie la interacción, el intercambio y la discusión de ideas y posiciones entre múltiples actores, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia.

De entre las líneas de acción, destaca la organización de conversatorios con la sociedad civil, jóvenes, miembros de la academia y partidos políticos, con la finalidad de recoger sus impresiones acerca de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley y, en su caso, elaborar con la sociedad en su conjunto, propuestas de reforma al marco legal aplicable, para mejorar la implementación de los instrumentos de participación ciudadana.

Posteriormente, el Consejo General Electoral aprobó el "Programa de Cultura Cívica y Participación Política 2018", el cual entre sus actividades específicas estableció la realización de foros para socializar el "Proyecto de modificación a la Ley de Participación Ciudadana" con diversos grupos de la sociedad civil, instituciones académicas, partidos políticos, cabildos municipales y el Poder Legislativo del Estado. En relación con el cumplimiento de este objetivo se celebraron mesas de trabajo y foros en todos los municipios del Estado.

Dichas acciones trajeron como consecuencia el análisis del Proyecto de Nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California al interior del Instituto Estatal Electoral, una vez concluido el Proceso Local Ordinario 2018-2019 y la posterior emisión de la Iniciativa de Ley que se presenta ante esta Soberanía.

La Iniciativa de Ley que se propone, tiene como objetivo principal privilegiar la participación ciudadana, entendiéndose esta como aquella donde la sociedad posee una injerencia directa en el actuar del Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas.

En ese sentido, los instrumentos de participación ciudadana son muy importantes en los regímenes democráticos, porque nos permiten vigilar y controlar la gestión de nuestros gobernantes; además, es la manera en que la ciudadanía se hace escuchar y puede tomar parte en los asuntos públicos.

Actualmente se cuenta con muchos canales institucionales y con un marco jurídico que regula la injerencia de los actores privados en las políticas gubernamentales. Definitivamente esto se ha logrado gracias al interés de las autoridades por incluir la participación ciudadana en su gestión. Sin embargo, aunque ya está reglamentada, todavía permanece en un estado de aletargamiento. Si bien existe un número de personas que participan activamente en los asuntos públicos, hay una cantidad mucho mayor que no está interesada en esas cuestiones.

La participación ciudadana se ha venido desarrollando en nuestro país de manera constante, pero pausada. Hasta ahora se han aprobado leyes y programas que establecen nuevos mecanismos de participación. El reto es que, a la par de los nuevos espacios, se construya una nueva cultura de participación, así como la manera en que los ciudadanos utilicen estas nuevas herramientas, contribuirá a definir el futuro de la participación ciudadana en nuestro país.

Comúnmente cuando se habla de participación ciudadana, básicamente se parte de la idea que el referéndum y el plebiscito, son participación. Pero cuando hablamos de democracia participativa nos estamos refiriendo a múltiples mecanismos a través de los cuales la ciudadanía interviene en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas. Como sabemos las formas de la democracia evolucionaron a lo largo de la historia y no solamente las formas, sino también la concepción de los alcances y los límites del Estado. Es por ello que, en la Iniciativa de Ley propuesta, se incorporan nuevos instrumentos de participación ciudadana como Cabildo Abierto, Congreso Abierto y el Presupuesto Participativo, además del fortalecimiento y simplificación de los instrumentos ya existentes.

El proceso para construir democracia depende básicamente de tres cosas: de la motivación de los actores gubernamentales, de la capacidad de ejercer presión de los ciudadanos a fin de suscitar la motivación gubernamental y de que ambos tengan, como una perspectiva compartida, la formación de ciudadanía. El binomio autoridades-ciudadanía que propicie la participación ciudadana, está condicionado invariablemente

el entorno, condiciones individuales y voluntad de los individuos, es decir, las razones que llevan a los individuos a participar. En cuanto al entorno, lo más importante a entender es que la participación ciudadana requiere que haya mecanismos a través de los cuales se garantice el ejercicio pleno de los derechos que el propio marco constitucional y legal de un sistema democrático ofrece a sus ciudadanos, que no solamente se entreguen esos derechos como un regalo de las autoridades a la sociedad, sino que la sociedad tenga mecanismos para exigir, para compartir la responsabilidad de que esos derechos efectivamente se cumplan en la realidad, en la práctica cotidiana.

La participación ciudadana es el elemento esencial para el logro del desarrollo humano sostenible. En esta participación el o la ciudadana se integra en forma personal o colectiva en las tomas de decisiones, en la fiscalización, en el control y en la ejecución de las acciones en los asuntos públicos.

En cuanto a los instrumentos de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, se prevé un procedimiento común para su presentación ante el Instituto Estatal Electoral y se definen de manera puntual las etapas del mismo, eliminándose el estudio de la trascendencia que se encuentra en la Ley de Participación Ciudadana vigente, incorporándose el elemento del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos como factor determinante para la procedencia de dichos instrumentos de participación ciudadana, atendiendo al principio de accesibilidad plasmado en la Iniciativa de Ley.

Estos mecanismos constituyen la forma en que las ciudadanas y ciudadanos pueden emitir sus opiniones y el derecho a que cada una de ellas sea escuchada, de manera que puedan participar en las decisiones de los asuntos públicos, a través de una democracia directa o semidirecta.

Sin bien, en la Ley vigente para el Estado, ya se encuentran regulados cinco instrumentos de participación ciudadana, con esta iniciativa se propone la creación de cuatro instrumentos más que permitan a la ciudadana y al ciudadano involucrarse en los asuntos de interés público. Aunado a lo anterior y con base en la experiencia del Instituto Electoral en la organización y desarrollo de instrumentos de participación ciudadana, en la presente iniciativa se proponen procedimientos más sencillos para que las ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho a participar en temas que consideren de trascendencia e importancia en su vida cotidiana.

En ese tenor, la Iniciativa de Ley que se presenta, consta de nueve instrumentos de participación ciudadana a saber: plebiscito, referéndum, consulta popular, revocación de mandato, iniciativa ciudadana, presupuesto participativo, cabildo abierto, congreso abierto y gobierno abierto, correspondiendo a los de nueva creación los último cuatro, los cuales son regulados a través de 4 Títulos, 24 capítulos, 87 artículos y 8 artículos transitorios, estableciéndose en ellos sus generalidades y sus particularidades. A continuación, se presenta el contenido de la Iniciativa de Ley:

TÍTULO PRIMERO “DISPOSICIONES GENERALES”.

Este título contiene dos capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO “OBJETO DE LA LEY”.

En ese capítulo se establece el objeto de la ley, el cual se circunscribe a fomentar, impulsar, promover, consolidar y regular los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito de competencia estatal y municipal, indicando que la misma es de orden e interés público y de observancia general. Se reconoce el derecho humano a la participación ciudadana, y define a esta última; se establece la obligación del Estado para garantizar la utilización de medios de comunicación, que permita entre otras cosas brindar difusión y educación en cuanto al desarrollo de una cultura democrática.

Asimismo, se plasma un glosario con el objeto de evitar reproducciones de locuciones extensas, en virtud de su uso reiterado en el ordenamiento legal, de este modo se hace menos pesado el estilo de las disposiciones contenidas.

Por otro lado, se establece un sistema de distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo del Estado; el Poder Legislativo del Estado; los Ayuntamientos del Estado; el Instituto Estatal Electoral de Baja California, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, los cuales en todo momento deberán fomentar y garantizar el respeto de los derechos previstos en la Ley.

Se indica además la forma en que deberá ser interpretada la ley y, la forma de suplir las deficiencias de la misma, remitiendo para tal efecto a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Baja California, los

acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, los criterios obligatorios establecidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y los principios generales del derecho.

Por último, se establecen los principios rectores de la participación ciudadana que consisten en libertad, democracia, corresponsabilidad, solidaridad, bien general, subsidiariedad, legalidad, sustentabilidad, tolerancia, equidad, no discriminación, máxima publicidad y accesibilidad.

B) CAPÍTULO SEGUNDO “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CIUDADANÍA”.

Se establece lo correspondiente a la vecindad en el Estado; así como los derechos de los ciudadanos en cuanto a los instrumentos de participación ciudadana, de igual forma los requisitos a cumplir por la ciudadanía para participar en los procesos de consulta previstos en la Ley que nos ocupa.

TÍTULO SEGUNDO “DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.

Este título contiene 11 capítulos, a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO “DE LOS INSTRUMENTOS”.

Se enlistan los nueve instrumentos de participación ciudadana que conforman la Ley, mismos que son: Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular, Revocación De Mandato, Iniciativa Ciudadana, Presupuesto Participativo, Cabildo Abierto, Congreso Abierto y Gobierno Abierto.

B) CAPÍTULO SEGUNDO “DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR”.

En este capítulo se integraron las disposiciones comunes en cuanto al procedimiento que se debe llevar a cabo para la realización del Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular con el fin de incorporar el mismo contenido en un solo capítulo y con ello evitar ser repetitivos de un procedimiento que es idéntico para estos tres instrumentos.

Además, se establece que las autoridades que podrán solicitar dichos instrumentos serán el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Legislativo del Estado, el Ayuntamientos del Estado, y las ciudadanas y los ciudadanos del Estado.

Por otro lado, se enlistan las restricciones en cuanto a los temas de consulta y las causales de improcedencia, también se establece el número de consultas que para cada jornada podrán presentar las autoridades, especificándose que las y los ciudadanos no encuentran limitación en este rubro, así como la prohibición de desistimiento de las solicitudes.

Asimismo, se establecen los requisitos del escrito de solicitud del instrumento, así como el trámite interno de verificación de dichos requisitos, y en su caso el derecho de audiencia de la parte solicitante.

En cuanto a la redacción de la pregunta, se desglosan los requisitos que esta deberá cumplir, entre los que destaca que deberá formularse en sentido claro y preciso de manera que genere una respuesta positiva o negativa; que deberá referirse directamente al acto, norma o tema objeto de la consulta; contener un solo enunciado por pregunta, y no contener posicionamientos y ningún tipo de juicio valorativo.

Por lo que se refiere a la revisión de los requisitos de la solicitud, se determina el procedimiento que la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica deberá seguir, entre lo que destaca que de encontrarse alguna inconsistencia o causal de improcedencia se otorgará la garantía de audiencia al solicitante, y cumplidos los términos en ella previsto se procederá a la emisión del proyecto de resolución, que deberá ser aprobado por el Consejo General Electoral, la cual deberá ser afirmativa y deberá ser notificada personalmente al solicitante junto con el formato de solicitud de firmas.

En cuanto a la recolección de las firmas, se desglosa el contenido mínimo de los formatos y la disponibilidad de los mismos; se prevé la recolección mediante mecanismos tecnológicos, el periodo de recolección y el término para su presentación ante el Instituto Estatal Electoral.

Aunado a lo anterior, se establece el procedimiento del Instituto Electoral para llevar a cabo la revisión y valoración de las firmas en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, así como los plazos previstos para la otorgar garantía de audiencia.

En cuanto a los formatos para la presentación de las firmas de apoyo se deja en claro que los únicos considerados para el porcentaje serán los emitidos por el Instituto Electoral, y se establecen los supuestos en los que no serán considerados los apoyos ciudadanos.

Asimismo, se redactan los términos en que deberá presentarse el dictamen final; su contenido; la autoridad que lo emite para su aprobación por el Consejo General Electoral, y el procedimiento a seguir en caso de su procedencia.

En cuanto a la difusión de los instrumentos de participación ciudadana se determina al Instituto Electoral como la única autoridad competente para realizarla, estableciendo limitaciones en la difusión a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, se contempla la realización de las jornadas de consulta simultáneamente con la jornada electoral, siempre que se solicite dentro los plazos previstos en la propia Ley.

C) CAPÍTULO TERCERO "DEL PLEBISCITO".

Se establece el objeto del plebiscito el cual se resume en consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a los actos del titular del Poder Ejecutivo, de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado; definiéndose que se entiende por estos actos; enlistándose los actos que son materia de este instrumento de acuerdo a la autoridad emisora; normando la oportunidad para la presentación de la solicitud respectiva, y la presentación de más de un plebiscitos por los ciudadanos, siempre que no sea de manera simultánea.

Asimismo, se prevén los supuestos de creación y supresión de municipios como actos del Poder Legislativo, remitiéndose a lo establecido en la Constitución Local y en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.

Por otra parte, se indican los porcentajes necesarios para iniciar un plebiscito atendiendo a su ámbito espacial y territorial, de tal suerte que si es de ámbito estatal bastará con el 1% de la ciudadanía; de ser municipal del 8% para municipios menores de 50 mil habitantes, del 4% cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, del 1.5% para un rango comprendido entre doscientos cincuenta mil a quinientos mil y del 1% cuando la lista nominal supere los quinientos mil ciudadanos.

En cuanto a los efectos vinculantes para el plebiscito estatal, se determina que bastará con la mayoría de la votación válida emitida y la votación de al menos el 15% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, mientras para el municipal se determinará de acuerdo al número de la población del municipio.

D) CAPÍTULO CUARTO "DEL REFERÉNDUM".

Se define al referéndum como el proceso mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo a determinada norma o normas para la cual se enuncia de manera específica cada una de ellas; se establece como solicitantes de este instrumento al Poder Legislativo, los Ayuntamientos y las y los ciudadanos; enunciándose cinco tipos de referéndum atendiendo a su materia o a su eficacia, a saber: constitucional, legislativo, reglamentario municipal, constitutivo, abrogatorio y derogatorio.

Por otra parte, se determina como porcentaje de representación del referéndum presentado por la ciudadanía el 1.5% de la lista nominal para referéndum constitucional y el 0.5% para el referéndum legislativo; por lo que respecta al porcentaje para referéndum municipal se establece el 8% para municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, 4% con lista nominal mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, 1.5% cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, y 1% tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil.

Asimismo, se indica que no procederá el trámite simultáneo de instrumentos que se contrapongan entre sí, y de ser así se determina cual será procedente; en cuanto a los efectos vinculantes de este instrumento se

determina que deberán haber obtenido la mayoría de votación válidamente emitida y el porcentaje es establecido de acuerdo al tipo de referéndum y el número de la población de la lista nominal, siendo para el referéndum legislativo del 10%, y para el municipal del 25%, 20%, 15% y 10%, según sea el caso en relación con la cantidad de personas inscritas en lista nominal del municipio de que se trate.

E) CAPÍTULO QUINTO "DE LA CONSULTA POPULAR".

Se define la consulta popular como el instrumento a través del cual se someten a consideración de las ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interés en el Estado o Municipio según corresponda, por medio de preguntas directas.

Aunado a lo anterior, se determina como facultados para su ejercicio a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a los Ayuntamientos y a la ciudadanía que represente cuando menos el 1% de la lista nominal en el ámbito estatal, mientras que en el ámbito municipal del 8%, 4%, 1.5% y 1% cuando la lista nominal sea menor de cincuenta mil, mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, mayor a doscientos cincuenta mil y menor a quinientos mil, y mayor a quinientos mil, respectivamente.

Al igual que los demás instrumentos se establece como requisito para que este instrumento, ya sea estatal o municipal, tenga efecto vinculante que se obtenga la mayoría de votación válidamente emitida, determinándose los porcentajes votación del 15% para el estatal y para la consulta popular municipal el mismo porcentaje que para el referéndum.

F) CAPÍTULO SEXTO "DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO".

Se define a la revocación de mandato como un instrumento de participación ciudadana, mediante el cual la ciudadanía decide la conclusión anticipada de la persona Titular del Poder Ejecutivo al ejercicio del cargo para el que fue electo, a partir de la pérdida de la confianza.

Asimismo, se establece el periodo en el que podrá realizarse el procedimiento, mismo que corresponde a partir del mes previo a la mitad del mandato del Titular del Ejecutivo y hasta tres meses después, así como que la solicitud solo podrá hacerse una sola vez durante el mandato constitucional.

Como autoridad competente para recibir la solicitud de este instrumento, se determina al Consejo General Electoral y como solicitantes a la ciudadanía que represente cuando menos el 10% de la lista nominal distribuida en la mitad más uno de los municipios, distribuido por lo menos el 2% a cada municipio.

Por otra parte, se establecen los requisitos que deberá contener la solicitud y que esta deberá presentarse mediante los formatos oficiales que emita el Instituto Electoral.

Asimismo, se determina como autoridad competente de la verificación de los requisitos a la Comisión de Participación Ciudadana y de Educación Cívica en colaboración con el INE, así como la resolución de procedencia; los términos de las etapas del proceso y el derecho a la garantía de audiencia a los solicitantes ante la invalidez de las firmas.

Por lo que respecta a la vinculatoriedad del proceso, será necesario que participe cuando menos el 40% de las personas inscritas en el listado nominal y que de estas voten a favor la mayoría absoluta.

Dentro de las limitantes que se observan en este instrumento a los solicitantes, particulares y órganos de gobierno se encuentra la prohibición del uso de recursos públicos para recabar firmas y la realización de promoción o propaganda, facultando únicamente para ello al Instituto Estatal Electoral.

G) CAPÍTULO SÉPTIMO "DE LA INICIATIVA CIUDADANA".

Se define a la iniciativa ciudadana como el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las Instituciones de Educación Superior del Estado, pueden presentar ante el Poder Legislativo y los Ayuntamientos la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes estatales o de reglamentos municipales, respectivamente.

Asimismo, se establecen las materias que no podrán ser objeto de este instrumento, así como los requisitos que este deberá contener entre los que se encuentran el propósito, la autoridad competente y el representante común con domicilio para oír y recibir notificaciones, observándose como un requisito más que la solicitud sea apoyada por al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del Estado y al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio, según

sea Iniciativa Ciudadana Estatal o Municipal; reiterándose de nueva cuenta que los formatos utilizados deberás ser los emitidos y publicados por el Instituto Electoral.

Para el caso de las Instituciones de Educación Superior del Estado deberán ser aprobadas por las dos terceras partes del total de los miembros y se marca disposiciones especiales para la presentación de la solicitud.

A diferencia de los instrumentos anteriores, se determina que el procedimiento de la iniciativa ciudadana cuando se presente ante el Poder Legislativo o en el Ayuntamiento, según sea el caso, será a través de sus comisiones u organización interna, quienes revisaran el cumplimiento de los requisitos y dictaminarán sobre su viabilidad e inviabilidad, limitándose la competencia del Instituto Electoral a la verificación de la situación registral en la Lista Nominal que corresponda con la colaboración del INE.

Finalmente, se establecen las limitantes para su posterior presentación cuando éstas han sido rechazadas por el Pleno Poder Ejecutivo o el Pleno del Ayuntamiento respectivo.

H) CAPÍTULO OCTAVO "DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO".

Se define al presupuesto participativo como el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que destina el Ayuntamiento, para que sus habitantes optimicen su entorno proponiendo proyectos para mejora de sus colonias.

Se determina 4% como porcentaje del monto que deberá ser destinado del presupuesto de egresos anual, del cual el 50% se distribuirá en las colonias de la localidad urbana y el otro 50% a las colonias de la localidad rural.

Asimismo, se enuncian las necesidades que deberán ser atendidas con este presupuesto, el proceso que deberá seguir el Ayuntamiento para su realización, y se establece que Instituto Electoral podrá participar de la siguiente manera: colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realización de la consulta, y convenir con los Ayuntamientos para dar asesoría y apoyo técnico en la organización, desarrollo, cómputo y

declaración de sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participativo, así como para supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten.

Se establece además que para el desarrollo de este instrumento el Ayuntamiento deberá conformar un órgano dictaminador, quien deberá realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyecto, así como su integración.

Otro aspecto a resaltar es lo correspondiente a la disposición que establece que en caso que no se ejerciera la totalidad del recurso asignado al Presupuesto Participativo, éste deberá ser destinado por parte de los Ayuntamientos a la satisfacción de las necesidades colectivas de la comunidad, tales como recuperación de espacios públicos, infraestructura rural y urbano, seguridad pública, medio ambiente, obras y servicios públicos, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.

Por último, se establecieron a la Auditoría Superior del Estado y a las Sindicaturas de los Ayuntamientos como las autoridades responsables de la vigilancia de la aplicación del recurso asignado o la sanción correspondiente, en su caso.

I) CAPÍTULO NOVENO "DEL CABILDO ABIERTO".

Se define al cabildo abierto como un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebración de una sesión, en la cual los habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento.

En ese orden de ideas, se establece que todas las solicitudes presentadas deberán ser discutidas y analizadas por el Ayuntamiento en la sesión de que se trate a o más tardar dentro de la sesión siguiente, también se dispuso la obligatoriedad de la difusión en el portal de internet tanto de la solicitud como de la respuesta recaída a la misma.

Asimismo, se determina la obligatoriedad de la celebración de las sesiones de cabildo abierto de forma mensual, con carácter público y con transmisión en tiempo real en internet, así como la elaboración de un calendario anual para la celebración de sesiones.

Finalmente, se establece el procedimiento para la celebración de cabildo abierto, entre el que destaca la emisión de una convocatoria de 5 a 10 días hábiles antes de la celebración de la sesión, el contenido y orden de los asuntos enlistados, así como la participación de las ciudadanas y ciudadanos que solicitaron la inclusión de algún asunto en el orden del día.

J) CAPÍTULO DÉCIMO "DEL CONGRESO ABIERTO".

Se define al Congreso Abierto como un mecanismo mediante el cual, quienes integran el Poder Legislativo, dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las normas que rigen la vida pública, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como la calidad, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de la administración pública, la impartición de justicia, el manejo del presupuesto público y otros asuntos de la vida pública.

Un aspecto a resaltar es que esta figura se ligó con el instrumento de Iniciativa Ciudadana, para promover la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la discusión de las iniciativas en las sesiones de dictaminación o en la mesa técnica legislativa correspondiente. Incluyéndose la posibilidad de la realización de foros virtuales aprovechando el uso de tecnologías de la información.

K) CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO "DEL GOBIERNO ABIERTO".

Se define al gobierno abierto como el mecanismo que permite la participación democrática de la ciudadanía en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas públicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

Para lo anterior, se establece la obligación a cargo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos de realizar una convocatoria anual para que con la colaboración de la ciudadanía se emita el plan de trabajo anual con el objeto de atender las problemáticas más relevantes, con compromisos específicos, concretos, incluyentes, estratégicos y medibles, que finalmente con los resultados acordado por las partes se denominará "Plan de Acción".

De conformidad con lo anterior, se determina que a partir de la presentación del Plan de Acción al público se contará con un año para el cumplimiento sus actividades las cuales deberán ser documentadas en los portales de internet del Poder Ejecutivo y del Ayuntamiento.

TÍTULO TERCERO “DE LOS PROCESOS DE LA CONSULTA”.

Este título contiene 7 capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO “DE LA CONVOCATORIA”.

Se determina que los procesos de consulta inician con la publicación de una convocatoria en el Periódico Oficial emitida por el Instituto Electoral, misma que deberá contener los siguientes requisitos: fundamentos legales aplicables; fecha y hora en que habrá de realizarse la jornada de consulta, o en su caso si se celebra en la jornada electoral local los datos de esta; breve descripción del acto, norma o tema que se somete a consulta; la pregunta a consultar; circunscripción territorial en que se realizará; requisitos para participar, y el lugar y fecha de la emisión de la convocatoria.

B) CAPÍTULO SEGUNDO “DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA”.

En este capítulo se establece la organización y desarrollo del proceso de consulta para el Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación De Mandato, indicándose que este se compone de las siguientes etapas: preparación, jornada de consulta cómputos y calificación de resultados y declaración de los efectos.

Por otra parte, se determina la participación de los partidos políticos en la vigilancia, organización y desarrollo de estos procesos.

Asimismo, se define al instituto como el órgano encargado de preparar el proyecto de para la realización de estos procesos a través de la Comisión de Participación Ciudadana y de Educación Cívica, y de su aprobación a través del Consejo General Electoral.

Por último, para la realización de estos procesos se prevé la utilización de nuevas tecnologías como la urna electrónica, el voto electrónico y la instalación de centros de votación; asimismo se contempla la posibilidad de requerir por el Instituto apoyo económico a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en caso de ser necesario.

C) CAPÍTULO TERCERO “DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN”.

En este capítulo se establece que los centros de votación serán instalados a determinación del Consejo General únicamente en las jornadas de consulta que no sean coincidentes a la jornada electoral; la forma en que estos deberán integrarse; sus atribuciones; la forma en que los funcionarios que integraran los centros de votación serán designados y la determinación del número y ubicación de los centros de votación.

Se estableció además que en el caso de la realización de las jornadas de consulta sean coincidentes con la jornada electoral local se estará a lo que dispuesto en la Ley Electoral local en materia de instalación y ubicación de mesas directivas de casilla y en caso de elecciones concurrentes conforme a la dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

D) CAPÍTULO CUARTO “DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA”.

En este capítulo se establece que para el ejercicio del voto en las jornadas de consulta podrán ser utilizadas boletas de votación, o en su caso el uso de la tecnología siempre y cuando se observen las medidas que garanticen la efectividad y secrecía del voto, de conformidad con la normatividad aplicable.

E) CAPÍTULO QUINTO “DE LA JORNADA DE CONSULTA”.

Se establece que la jornada de consulta se deberá desarrollar en el horario y términos que la Ley Electoral local prevé para la jornada electoral de los procesos electorales, así como la viabilidad de realizar conteos rápidos.

F) CAPÍTULO SEXTO “DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN”.

Se define al escrutinio y cómputo como el procedimiento por el cual los integrantes del centro de votación determinan el número de ciudadanas y ciudadanos que votaron; el número de votos emitidos en favor y en contra de la consulta del instrumento de participación ciudadana; el número de votos nulos, y el número de

boletas recibidas y sobrantes. Asimismo, se establece la facultad del Consejo General Electoral de emitir las reglas que se deberán seguir para llevar a cabo dicho procedimiento.

G) CAPÍTULO SÉPTIMO “DE LOS RESULTADOS Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ”.

Se establece que el Consejo General será el órgano encargado de efectuar el cómputo y declaración de validez de los instrumentos de participación ciudadana; que estos deberán publicarse en el Periódico Oficial, en un periódico de mayor circulación en el Estado o en el Municipio que corresponda y a través de la página de internet oficial del Instituto Electoral; que sus resultados deberán notificarse al solicitante y a la autoridad correspondiente; el término de la notificación, y que en caso de este resulte vinculante tendrá efectos durante los tres años siguientes una vez hecha la declaración de validez por el Consejo General Electoral.

TÍTULO CUARTO “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS”.

Este título contiene 4 capítulos a saber:

A) CAPÍTULO PRIMERO “DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN”.

Se establece al recurso de inconformidad como el medio de impugnación procedente para recurrir los actos, omisiones o resoluciones dictados con motivo de la tramitación de los instrumentos de participación ciudadana.

B) CAPÍTULO SEGUNDO “DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.

En este capítulo se establece que el Instituto Electoral es el responsable de erogar los recursos necesarios para realizar procesos de consulta promovidos por las ciudadanas y ciudadanos; para el caso de los procesos promovidos por autoridades de los tres niveles de gobierno, la erogación corre a cargo de estos. En ambos casos, tanto el Instituto como las autoridades deben establecer una partida presupuestal en su proyecto de presupuestos de egresos para tales efectos.

C) CAPÍTULO TERCERO “DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTA LEY”.

Se indica que los plazos de la Ley podrán ser ampliados por el Consejo General cuando exista imposibilidad material para realizar actividades o actos para los instrumentos de participación ciudadana, y que estos deberán ser publicados en el Periódico Oficial dentro de los tres días siguientes a su aprobación.

D) CAPÍTULO CUARTO “DE LAS REFORMAS A LA LEY”.

Se establece la obligatoriedad de la realización de un referéndum Legislativo para reformas o adiciones a la Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Se establecen 8 artículos transitorios relativos al inicio de vigencia de la ley, la abrogación de la Ley de Participación expedida el 16 de febrero de 2001 así como sus reformas o adiciones; la derogación de todas las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la Ley; a la tramitación de los procesos de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta norma; los plazos con los que cuenta el Instituto Electoral a partir de la entrada en vigor de esta Ley para adecuar su normatividad interna; la obligación de los poderes Legislativo y Ejecutivo para autorizar las modificaciones en sus presupuestos de egresos, en el de los Ayuntamientos y del Instituto Electoral para el cumplimiento de la Ley; la obligación del Instituto Electoral de establecer en su proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal inmediato siguiente a la publicación de la Ley las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones en materia de participación ciudadana, y la implementación de una campaña masiva de educación, capacitación, difusión y fomento de la ley por parte de los tres poderes del Estado, el Ayuntamiento y el Instituto Electoral.

En resumen, la Iniciativa de Ley que se presenta pretende simplificar la tramitación de los instrumentos de participación ciudadana con la finalidad de promover la democracia participativa, con el reforzamiento de los instrumentos ya existentes de manera que sean más prácticos, eficaces y accesibles para los solicitantes, así como la adición de nuevos instrumentos a partir de los cuales las ciudadanas y ciudadanos adquieren mayor participación y presencia en los temas públicos.

Con base en los motivos expuestos, el Instituto Estatal Electoral de Baja California somete a la consideración de esa XXIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la presente iniciativa de ley por la que se expide la:

NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO ÚNICO. Se **EXPIDE** la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO OBJETO DE LA LEY

Artículo 1.

1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 5, Apartado C, 8, fracción IV, inciso b), 12, 28, 34, 76, 85 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, es de orden social e interés público y de observancia general en materia de participación ciudadana en el Estado de Baja California; tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, consolidar y regular los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito de competencia Estatal y Municipal.

2. Las disposiciones de esta Ley reconocen el derecho humano a la participación ciudadana, entendiéndose este como el derecho de las personas habitantes del Estado para intervenir en las decisiones públicas, así como deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, e incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno.

3. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, por lo que el Estado debe garantizar la utilización de los medios de comunicación a su alcance, para proveer la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática.

Artículo 2.

1. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- a) Ayuntamientos: Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Baja California;
- b) Centros de Votación: Los espacios públicos que además de cumplir con los requerimientos de ubicación, cumplan con las condiciones que permitan incorporar una infraestructura tecnológica más robusta y segura que la utilizada en las casillas electorales, permitiendo un alto flujo de votantes;
- c) Consejo General: El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California;
- d) Constitución del Estado: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;
- e) Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- f) Credencial para Votar: La credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral;
- g) Estado: Al Estado Libre y Soberano de Baja California;
- h) Infraestructura física: Se refiere a la construcción de obras civiles de gran tamaño, como puentes, puertos y autopistas;
- i) Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral;
- j) Instituto o Instituto Electoral: El Instituto Estatal Electoral de Baja California;
- k) Jornada de Consulta: La jornada de votación de los instrumentos de participación ciudadana;
- l) LEEBC: La Ley Electoral del Estado de Baja California;
- m) Ley: La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California;
- n) LGIPE: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
- o) Lista Nominal: La lista nominal de electores con fotografía elaborada por el Instituto Nacional Electoral en la parte correspondiente al Estado de Baja California;
- p) Padrón Electoral: El padrón electoral elaborado por el Instituto Nacional Electoral en la parte correspondiente al Estado de Baja California;
- q) Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Estado de Baja California;

- r) Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California;
- s) Poder Legislativo: El Poder Legislativo del Estado de Baja California;
- t) Tribunal Electoral: El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;
- u) Urna Electrónica: La máquina receptora de votos y emisora de comprobantes de votación y resultados de la jornada de consulta, y
- v) Voto Electrónico: El conjunto de elementos técnicos y metodológicos diseñados por los órganos del Instituto, y aprobados por el Consejo General, para llevar a cabo de manera automatizada la jornada de consulta y cómputo y calificación de resultados a través de sistema electrónico por internet.

Artículo 3.

1. La aplicación y ejecución de las normas contenidas en esta Ley, dentro de su respectivo ámbito de competencia, corresponden al:

- a) Poder Ejecutivo;
- b) Poder Legislativo;
- c) Ayuntamientos;
- d) Instituto Electoral, y
- e) Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

2. Para el desempeño de sus funciones, los órganos previstos en esta Ley, contarán con el apoyo de las autoridades estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de su competencia. Los cuales establecerán las garantías necesarias para que los instrumentos de participación ciudadana sean reales, efectivos y democráticos.

3. Es obligación de las autoridades estatales y municipales, en su ámbito de competencia, fomentar y garantizar el respeto de los derechos previstos en esta Ley.

Artículo 4.

1. La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará tomando en cuenta su objeto, así como los principios rectores de la participación ciudadana previstos en el artículo 5, atendiendo indistintamente a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

2. A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto en la LEEBC, en los acuerdos del Consejo General dictados dentro de su competencia, los criterios obligatorios que dicte el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y a los principios generales del derecho.

Artículo 5.

1. Los principios rectores de la participación ciudadana son:

- a) Libertad: Facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.
- b) Democracia: Participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones comunes y en igualdad de condiciones.
- c) Corresponsabilidad: Compromiso y deber compartido entre las ciudadanas y ciudadanos y el gobierno, de aceptar y atender el resultado de las decisiones que mutuamente se convinieron.
- d) Solidaridad: Disposición recíproca de la sociedad y Gobierno para apoyarse y ayudarse mutuamente de modo fraterno, surge de los intereses por el bienestar de nuestro Estado y se basa en un sentimiento de pertenencia y unidad.
- e) Bien General: Fin social hacia el cual tienden todos los objetivos del Gobierno y las personas en su conjunto.
- f) Subsidiariedad: Presencia justa del poder político que respete la libertad e iniciativa de los gobernados.
- g) Legalidad: Toda acción que se lleve a cabo deberá estar apegada y sustentada en la normatividad vigente.
- h) Sustentabilidad: Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones del presente asegurando que impactarán de manera positiva los recursos en el futuro.
- i) Tolerancia: Respeto y consideración hacia la diversidad y la diferencia de quienes conforman nuestra sociedad, así como a sus opiniones y expresiones.

j) **Equidad:** Entendida como un criterio de justicia que se basa en las decisiones tomadas apegadas a la normatividad, buscando el mayor beneficio de las personas.

k) **No Discriminación:** El impedimento a toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por objeto o resultado impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

l) **Máxima Publicidad:** Todos los actos y la información en materia de instrumentos de participación ciudadana son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los casos expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas circunstancias, y

m) **Accesibilidad:** Permite que cualquier instrumento de participación ciudadana sea utilizado por las ciudadanas y ciudadanos, evitando al máximo los obstáculos legales que impidan su ejercicio.

n) **Inclusión:** Fundamento de la democracia y de la ciudadanía que engloba y comprende a la diversidad social y cultural que forma parte de la sociedad, a través de la concertación y de integrar sus distintas experiencias individuales y colectivas, sus ideologías, creencias, filiaciones políticas y opiniones en los procesos participativos.

CAPÍTULO SEGUNDO

DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS

Artículo 6.

1. Adquieren la ciudadanía mexicana, los hombres y mujeres que reúnan los requisitos previstos en los artículos 34 de la Constitución Federal y 8 de la Constitución del Estado.

2. Las ciudadanas y ciudadanos en relación con los instrumentos de participación ciudadana reconocidos en la Constitución del Estado y esta Ley, tendrán los derechos y obligaciones siguientes:

a) Ejercer los derechos que les otorga esta Ley, sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes;

- b) Promover, participar, ejercer y hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana a que se refiere esta Ley;
- c) Ser informado, capacitado y tener acceso a la información relativa a los instrumentos de participación ciudadana;
- d) Cumplir con las disposiciones de esta Ley y aquellas disposiciones que de ella emanen;
- e) Los demás que establezca esta Ley, y la demás normatividad aplicable.

Artículo 7.

1. Para los efectos de esta Ley, son vecinos del Estado las ciudadanas y ciudadanos que tengan residencia efectiva en su territorio de por lo menos seis meses. La calidad de vecino no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de dirección nacional de partido político, por motivo de estudios o por causas ajenas a su voluntad, tenga que residir fuera del territorio del Estado por más de seis meses.

2. La calidad de vecino se acreditará mediante protesta de decir verdad, a través de la dirección que conste en la credencial para votar con fotografía.

Artículo 8.

1. En los procesos de consulta previstos en esta Ley solo podrán participar las ciudadanas y ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Tener vecindad en el estado o municipio de que se trate, con residencia efectiva de por lo menos seis meses;
- b) Estar inscrito en la Lista Nominal;
- c) Tener credencial para votar, y
- d) No estar suspendido en sus derechos políticos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS INSTRUMENTOS

Artículo 9.

1. Los instrumentos de participación ciudadana son:

- a) Plebiscito;
- b) Referéndum;
- c) Consulta Popular;
- d) Revocación de Mandato;
- e) Iniciativa Ciudadana;
- f) Presupuesto Participativo;
- g) Cabildo Abierto;
- h) Congreso Abierto, y
- i) Gobierno Abierto.

CAPÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES COMUNES PARA
PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR

Artículo 10.

1. El Instituto, a través del Consejo General, es el órgano responsable de la organización y desarrollo de los procesos de consulta relacionados con los instrumentos de participación ciudadana como Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular.

2. El Consejo General será la autoridad competente para recibir la solicitud, verificar los requisitos legales, calificar la procedencia; así como el cómputo de los resultados y ordenar, en su caso, los actos que sean

necesarios de acuerdo a esta Ley, en los casos relacionados con los instrumentos de participación ciudadana referidos en el párrafo anterior.

Artículo 11.

1. Podrán solicitar la instrumentación de los instrumentos de participación ciudadana como son el Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, conforme a lo previsto en esta Ley:

- a) El Titular del Poder Ejecutivo;
- b) El Poder Legislativo, siempre que sea solicitado por las dos terceras partes de sus integrantes;
- c) Los Ayuntamientos, siempre que sea solicitado por las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, y
- d) Las ciudadanas y ciudadanos, conforme lo prevé esta Ley.

Artículo 12.

1. No podrán someterse a consulta, mediante algún instrumento de participación ciudadana, los actos, normas o temas, respecto de lo siguiente:

- a) Aquellos que realice la autoridad que corresponda por mandato de autoridad judicial;
- b) Aquellos relacionados con el régimen interno y de organización de los Poderes del Estado, así como de los Ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos del Estado, y
- c) Aquellos que restrinjan los derechos humanos.

Artículo 13.

1. Serán causas de improcedencia de los instrumentos de participación ciudadana reconocidos en esta Ley, las siguientes:

- a) Que no sean objeto de algún instrumento de participación ciudadana;
- c) Que el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea;
- d) Que la solicitud realizada por las ciudadanas y ciudadanos, no sea respaldada por el porcentaje requerido por esta Ley;

- e) Que se haya consumado y no pueda restituirse a la situación que guardaban con anterioridad, y
- f) Que los actos o normas que se pretendan someter a consulta no existan.

Artículo 14.

1. Las autoridades señaladas en el artículo 11, podrán presentar hasta tres solicitudes para cada jornada de consulta respecto de los instrumentos de participación ciudadana como el Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular. Tratándose de solicitudes promovidas por las ciudadanas y ciudadanos estas no tendrán límite alguno.
2. Las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser motivo de desistimiento una vez que se haya presentado la solicitud.

Artículo 15.

1. Para solicitar el inicio de los instrumentos de participación ciudadana como el Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, se deberá presentar ante el Instituto, un escrito que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Nombre completo, apellido paterno y materno, firma y copia de la credencial para votar de la persona solicitante;
- b) El tipo de instrumento de participación ciudadana solicitado;
- c) Propósito del instrumento de participación ciudadana de que se trate, así como su motivación;
- d) Precisar el acto, norma o tema y autoridad implicados en el instrumento de participación ciudadana que se solicita;
- e) Contener la redacción de la propuesta de pregunta para la consulta, y
- f) Domicilio ubicado en la ciudad sede del Instituto, para oír y recibir notificaciones.

2. En caso de que la solicitud provenga de las autoridades señaladas en el artículo 11, además de lo establecido en el párrafo anterior, deberá acompañarse el documento que acredite que la solicitud fue aprobada por el número de integrantes que esta Ley requiere.

Artículo 16.

1. La redacción de la propuesta de pregunta para la jornada de consulta, cumplirá con los requisitos siguientes:

- a) Se formulará en sentido claro y preciso, sin tecnicismos, de manera que permita una respuesta afirmativa o negativa;
- b) Referirse directamente al acto, norma o tema objeto de la consulta;
- c) Contener un solo enunciado por pregunta, y
- d) No contener posicionamientos y ningún tipo de juicio valorativo.

2. Cuando la redacción de la propuesta de pregunta incumpla con alguno de los requisitos señalados, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica prevendrá al solicitante dentro del plazo previsto en el artículo 17, señalando las inconsistencias encontradas, a efecto de que, dentro del plazo de dos días hábiles reformule la redacción de la misma. De no cumplirse con lo requerido, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica procederá a elaborar una nueva propuesta de pregunta bajo las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 17.

1. Una vez recibida la solicitud por el Instituto, el Consejero Presidente la turnará a la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, a fin de que en un plazo no mayor a tres días hábiles determine si la misma cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior. En caso de que, la solicitud incumpla con alguno de los requisitos señalados en los incisos a) al e) del artículo 15, se prevendrá al solicitante a fin de que, dentro de un plazo de dos días hábiles, subsane las inconsistencias encontradas, bajo el apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento se tendrá por no presentada la solicitud.

2. En caso de que la solicitud no contenga domicilio para oír y recibir notificaciones, o bien este se señale fuera de la ciudad sede del Instituto, las notificaciones se practicarán a través de los estrados del Instituto.

Artículo 18.

1. Si la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica advierte el cumplimiento de los requisitos formales señalados en los artículos 15 y 16 procederá de la siguiente manera:

- a) Llevará a cabo la revisión de la ausencia de cualquier causal de improcedencia o impedimento legal previsto en los artículos 12 y 13, con excepción de la referida al porcentaje de firmas de apoyo que debe sustentar la solicitud promovida por las ciudadanas y ciudadanos;
- b) Se dará vista con la solicitud de inicio a la autoridad implicada a fin de que, dentro del plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su interés convenga;
- c) Concluido lo anterior, se realizará el proyecto de resolución que corresponda, para ser propuesto al Consejo General. El proyecto de resolución respectivo será presentado dentro de los diez días hábiles siguientes a que concluya el plazo referido en el inciso anterior.

Artículo 19.

1. La resolución del Consejo General que apruebe el inicio del instrumento de participación ciudadana deberá ser notificada personalmente al solicitante, para lo cual deberá entregarse el formato oficial para la recolección de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, en los términos previstos en esta Ley.

2. La recolección de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos se realizará a través del formato oficial en instrumento de papel y/o, en su caso, mediante los mecanismos tecnológicos que apruebe el Consejo General.

3. El formato oficial para la recolección de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos contendrá, al menos:

- a) El tipo de instrumento de participación ciudadana de que se trate;
- b) El acto, norma o tema, según corresponda, que se pretende someter a consulta;
- c) La propuesta de pregunta;
- d) El espacio para el folio de cada hoja;

- e) El espacio para asentar nombre completo, apellidos paterno y materno, clave de elector, y firma de la ciudadana o ciudadano solicitante; y
- f) La fecha de expedición.

Artículo 20.

1. El periodo para recolectar las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos será de cuarenta y cinco días naturales, y este plazo iniciará a partir de que el formato oficial quede a disposición del solicitante. Se entenderá lo anterior, una vez que la resolución aprobada por el Consejo General sea notificada en forma personal al solicitante, acto en que se hará entrega de un ejemplar impreso del formato oficial, así como en medio digital.
2. El Instituto pondrá a disposición permanente de las personas interesadas el formato oficial, tanto en sus oficinas, así como en su portal oficial de internet. De igual manera, procurará que los formatos oficiales estén disponibles para las personas con alguna discapacidad visual y en las lenguas indígenas de los pueblos originarios con mayor representación en el Estado.

Artículo 21.

1. Concluido el plazo para recolectar las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, dentro de los tres días hábiles siguientes, la persona solicitante deberá presentar ante el Instituto la totalidad de los formatos oficiales recabados.
2. Una vez recibidos los formatos oficiales que respaldan la solicitud del instrumento de participación ciudadana, el Instituto procederá a su verificación de su situación registral en la Lista Nominal que corresponda, para ello deberá realizar las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional.

Artículo 22.

1. El Instituto contará con un plazo de quince días hábiles para obtener los resultados de la verificación de la situación registral de cada uno de los apoyos de las ciudadanas y ciudadanos que sustentan la solicitud.

2. Recibido el reporte detallado sobre la revisión del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica notificará dentro de los dos días hábiles siguientes al solicitante, a efecto de que dentro de un plazo de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga respecto de las inconsistencias encontradas.

Artículo 23.

1. En caso de que la recolección de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos se realice en formatos distintos a los aprobados por el Consejo General, estos no serán considerados para el porcentaje de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos exigido por esta Ley. Asimismo, no serán computados aquellos formatos oficiales que se hayan entregado de forma extemporánea.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los apoyos de las ciudadanas y ciudadanos no serán contabilizados para efecto del porcentaje requerido por esta Ley, en los supuestos siguientes:

- a) Nombres o claves de elector con datos erróneos;
- b) La ciudadana o ciudadano no tenga su domicilio en la demarcación territorial en la que se delimita el instrumento de participación ciudadana de que se trate;
- c) La ciudadana o ciudadano no sea localizado en la Lista Nominal que corresponda, y
- d) Cuando una misma persona haya otorgado su respaldo dos o más veces, solo se contabilizará una de las firmas.

Artículo 24.

1. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de los plazos señalados en el artículo 22, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica presentará al Consejo General el dictamen por el que se determina la revisión del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que se acompaña a la solicitud.

2. El Dictamen que formule la Comisión de Participación Ciudadana y Educación precisará, cuando menos el número y porcentaje de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que resultaron válidos e inválidos, así como la propuesta de procedencia o improcedencia del instrumento de participación ciudadana.

3. En caso de que en el Dictamen se determine la procedencia del instrumento de participación ciudadana, una vez aprobado por el Consejo General se deberá notificar en un plazo no mayor a tres días hábiles a la autoridad implicada, a los solicitantes y publicarse en el Periódico Oficial, y en su caso, en un diario de mayor circulación en el Estado o, en su caso, en uno del Municipio que corresponda.

Artículo 25.

1. En la tramitación de los instrumentos de participación ciudadana como el Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con estos.

2. El Instituto promoverá la participación de las ciudadanas y ciudadanos y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Dentro de las actividades de difusión que desarrolle, podrá contemplar la organización y celebración de debates cuando lo considere conveniente.

3. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las ciudadanas y ciudadanos.

4. Durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana señalados en el párrafo 1, es decir, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de consulta, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

5. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

Artículo 26.

1. Las jornadas de consulta de los instrumentos de participación ciudadana referente al Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular podrán verificarse simultáneamente con una jornada electoral, siempre y cuando se soliciten a más tardar ciento ochenta días naturales antes de la jornada electoral respectiva.

2. Las jornadas de consulta de los instrumentos de participación ciudadana solicitadas en año no electoral o treinta días después de la jornada electoral, se verificarán dentro de los noventa días siguientes de la emisión de la convocatoria.

3. Se excluye de lo señalado en el párrafo 1 del presente artículo la jornada de consulta relativa a los instrumentos de participación ciudadana correspondiente a la Revocación de Mandato, para lo cual se estará a lo previsto en el apartado correspondiente de esta Ley.

Artículo 27.

1. Los actos, normas o temas que hayan sido objeto de plebiscito, referéndum o consulta popular, respectivamente, no podrán serlo de uno posterior dentro del mismo año calendario en que se hayan consultado.

**CAPÍTULO TERCERO
DEL PLEBISCITO**

Artículo 28.

1. El plebiscito tiene por objeto el consultar a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a:

- a) Los actos del Poder Ejecutivo;
- b) Los actos del Poder Legislativo, y
- c) Los actos de los Ayuntamientos;

2. Se entiende por actos del Poder Ejecutivo aquellos emitidos por su Titular, comprendiéndose también los emitidos por las personas titulares de las secretarías o dependencias de la administración pública centralizada o paraestatal.
3. Se entiende por actos de los Ayuntamientos aquellos emitidos por la persona que ocupa la Presidencia municipal, comprendiéndose también los emitidos por el Cabildo y las personas titulares de las secretarías o dependencias de la administración pública municipal.
4. El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos podrán consultar mediante el plebiscito a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo previo a la realización de actos o decisiones de su competencia.
5. Las ciudadanas y ciudadanos podrán solicitar se someta a plebiscito un acto de autoridad estatal o municipal previo a su realización, o una vez aprobado y, en su caso, publicado en el Periódico Oficial o la gaceta municipal, según corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su emisión o publicación.

Artículo 29.

1. Para efectos del presente capítulo se identifican como actos materia de plebiscito, de manera enunciativa, más no limitativa los siguientes:

a) En el Poder Ejecutivo:

- I. La creación de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la población indígena del Estado; así como de las personas con discapacidad o preferencias sexuales diferentes, así como sujetas a cualquier forma de discriminación;
- II. La construcción de infraestructura física;
- III. La planeación del Desarrollo Estatal y Regional;
- IV. Las políticas de preservación del medio ambiente;
- V. La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas;
- VI. La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;

VII. Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico;

VIII. Los permisos de uso de suelo, y

IX. La contratación de deuda pública.

b) En el Poder Legislativo:

I. La creación, fusión y supresión de municipios;

II. La aprobación sobre la formación de nuevos municipios o territorios; y

III. El arreglo de límites municipales.

c) En los municipios:

I. El otorgamiento de concesiones, permisos y la prestación de los servicios públicos municipales;

II. La contratación de deuda pública;

III. La desincorporación y enajenación de bienes del dominio público;

IV. Las políticas de preservación del medio ambiente;

V. La creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas;

VI. El cambio de denominación del Municipio, y

VII. Los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico.

Artículo 30.

1. Tratándose del Plebiscito para someter a consulta los actos del Poder Legislativo se estará a lo siguiente:

a) Cuando la solicitud se trate de la formación o supresión de un municipio, el plebiscito deberá aplicarse a las ciudadanas y ciudadanos del Municipio que se pretenda afectar. En el caso de la fusión de dos o más Municipios, este deberá aplicarse en cada uno de ellos, y

b) En la formación de un municipio o en su supresión, se estará a lo dispuesto en los artículos 76 de la Constitución del Estado y 27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.

Artículo 31.

1. Podrán iniciar un plebiscito en el ámbito estatal, las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno por ciento de la Lista Nominal.

2. Las ciudadanas y ciudadanos podrán iniciar un plebiscito en el ámbito municipal de conformidad con las reglas siguientes:

a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal;

b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro por ciento de la Lista Nominal;

c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y

d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal.

3. Las ciudadanas y ciudadanos podrán respaldar más de un plebiscito, pero no procederá el trámite simultáneo de los plebiscitos que se contrapongan entre sí, en este caso procederá la solicitud que tenga más firmas de apoyo.

Artículo 32.

1. Los resultados del plebiscito estatal tendrán efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación y acuda a votar al menos el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

2. El resultado del plebiscito municipal tendrá efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación y de conformidad con lo siguiente:

- a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;
- b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;
- c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, y
- d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

CAPÍTULO CUARTO

DEL REFERÉNDUM

Artículo 33.

1. El referéndum es el proceso mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a la norma o normas siguientes:

- a) La modificación, reforma, adición o derogación de disposiciones de la Constitución del Estado;
- b) La creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos que expida el Poder Legislativo, y
- c) La creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de reglamentos municipales.

2. El Poder Legislativo y los Ayuntamientos mediante el referéndum podrán consultar a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo previo a la aprobación de la norma o normas objeto del referéndum, de acuerdo al ámbito de su competencia y a las reglas siguientes:

- a) Tratándose de referéndum constitucional, en el caso del Poder Legislativo con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, y en caso de que sean los Ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando menos la mitad más uno de los municipios del Estado con la aprobación de la mayoría calificada de los integrantes del Cabildo;

- b) Tratándose de referéndum legislativo, con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo, y
- c) En caso de referéndum municipal, con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento respectivo.

3. Las ciudadanas y ciudadanos podrán solicitar se someta a referéndum la norma o normas una vez publicadas en el Periódico Oficial o gaceta municipal, según corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su publicación.

Artículo 34.

1. El referéndum podrá ser:

a) Atendiendo a la materia:

- I. Referéndum constitucional, que tiene por objeto aprobar o rechazar modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución del Estado;
- II. Referéndum legislativo, que tiene por objeto aprobar o rechazar la creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de las leyes o decretos que expida el Poder Legislativo, y
- III. Referéndum reglamentario municipal, que tiene por objeto aprobar o rechazar, la creación, modificación, derogación o abrogación de reglamentos municipales.

b) Atendiendo a su eficacia:

- I. Constitutivo, que tiene por resultado aprobar en su totalidad el ordenamiento que se someta a consulta;
- II. Abrogatorio, que tiene por resultado rechazar totalmente el ordenamiento que se someta a consulta, y
- III. Derogatorio, que tiene por resultado rechazar sólo una parte del total del ordenamiento que se somete a consulta.

Artículo 35.

1. Podrán iniciar un referéndum las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal cuando se trate de referéndum constitucional, y cuando corresponda a referéndum legislativo deberá representar cuando menos el punto cinco por ciento de la Lista Nominal.

2. Tratándose de la solicitud de referéndum municipal, este se solicitará de conformidad con las reglas siguientes:

a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal;

b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro por ciento de la Lista Nominal;

c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y

d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal.

3. Las ciudadanas y ciudadanos podrán respaldar más de un referéndum, pero no procederá el trámite simultáneo de los referéndums que se contrapongan entre sí, en este caso procederá la solicitud que tenga más firmas de apoyo.

Artículo 36.

1. Los resultados del referéndum constitucional tendrán efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida y acuda a votar al menos el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y este se distribuya en la mitad más uno de los municipios del Estado.

2. Los resultados del referéndum legislativo tendrán efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación y acuda a votar al menos el equivalente al diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

3. El resultado del referéndum municipal tendrá efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación y, de conformidad con lo siguiente:

- a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos inscrita en la Lista Nominal;
- b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos inscrita en la Lista Nominal;
- c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, y
- d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

CAPÍTULO QUINTO DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 37.

1. La Consulta Popular es el instrumento a través del cual los poderes Ejecutivo y Legislativo, los Ayuntamientos y las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, someten a consideración de las ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interés en el Estado o Municipio según corresponda, por medio de preguntas directas.

Artículo 38.

1. Podrán iniciar una consulta popular las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno por ciento de la Lista Nominal.

2. Las ciudadanas y ciudadanos podrán iniciar una consulta popular en el ámbito municipal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal;

b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro por ciento de la Lista Nominal;

c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal. y

d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil deberá ser presentada por al menos un número de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal.

3. Las ciudadanas y ciudadanos podrán respaldar más de una solicitud de consulta popular, pero no procederá el trámite simultáneo de las consultas que se contrapongan entre sí, en este caso procederá la solicitud que tenga más firmas de apoyo.

Artículo 39.

1. Los resultados de la Consulta Popular estatal tendrán efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida y acuda a votar al menos el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

2. El resultado de la Consulta Popular municipal tendrá efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida y de conformidad con lo siguiente:

- a) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;
- b) Tratándose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;
- c) Tratándose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, y
- d) Tratándose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Artículo 40.

1. La Revocación de Mandato, es un instrumento de participación ciudadana, mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos deciden que la persona Titular del Poder Ejecutivo concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, a partir de la pérdida de la confianza.

2. Podrá solicitarse la revocación de mandato únicamente para el cargo del Titular del Ejecutivo del Estado.

Artículo 41.

1. La revocación de mandato sólo podrá solicitarse transcurrida la mitad del período constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de Titular del Poder Ejecutivo, y hasta tres meses posteriores al mismo y podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional.

2. Las ciudadanas y ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo al periodo previsto en el párrafo anterior y hasta el último día de conclusión del mismo.

3. El Instituto deberá poner a disposición de las ciudadanas y ciudadanos, un mes antes de que transcurra la mitad del periodo constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de que se trate, los formatos oficiales y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

4. El Consejo General será la autoridad competente para recibir la solicitud, verificar los requisitos legales, calificar la procedencia; así como el cómputo de los resultados y ordenar, en su caso, los actos que sean necesarios de acuerdo a esta Ley, en los casos relacionados con la Revocación de Mandato.

Artículo 42.

1. Podrán solicitar la revocación de mandato del Titular del Ejecutivo, las y los ciudadanos que tengan vecindad en el Estado y que representen cuando menos el 10% de la Lista Nominal, distribuida en la mitad más uno de los municipios del Estado.

2. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar distribuido en cuando menos el 2% de cada uno de los municipios.

Artículo 43.

1. La solicitud de revocación de mandato deberá ser presentada ante el Consejo General, y deberá contener:

- a) Nombre y cargo del servidor público al que se solicita sujetar al procedimiento de revocación de mandato;
- b) El nombre completo, el apellido paterno y materno, la clave de elector de la Credencial para Votar vigente y firma de quienes lo solicitan, y
- c) Señalar el nombre de un representante común, con domicilio para oír y recibir notificaciones.

Artículo 44.

1. Toda solicitud de revocación de mandato deberá acompañarse de los formatos oficiales que el Instituto emita para tal efecto.

Artículo 45.

1. Recibida la solicitud, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, verificará los datos de los formatos en los que se recabó el apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción, en los términos del convenio respectivo con el Instituto Nacional.
2. En caso de invalidez de alguna de las firmas que acompañen la solicitud, se notificará a los solicitantes para que manifiesten lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación.
3. La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica deberá resolver la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la verificación de los datos realizada por el Instituto Nacional.
4. En caso de ser procedente la solicitud, la consulta para determinar la revocación de mandato deberá llevarse a cabo el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federal o locales.

Artículo 46.

1. El resultado será vinculante, siempre y cuando participe al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en el Listado Nominal y que de éstas la mayoría absoluta se manifieste a favor de la revocación.
2. Si la consulta diera como resultado la revocación del Titular del Poder Ejecutivo, el Consejo General deberá informar al Poder Legislativo para que inicie el procedimiento que corresponda.

Artículo 47.

1. En la tramitación de la Revocación de Mandato, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con estos.
2. El Instituto promoverá la participación de las ciudadanas y ciudadanos y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Dentro de las

actividades de difusión que desarrolle, podrá contemplar la organización y celebración de debates cuando lo considere conveniente.

3. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las ciudadanas y ciudadanos.

4. Durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta de la Revocación de Mandato, es decir, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de consulta, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

5. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA INICIATIVA CIUDADANA

Artículo 48.

1. La Iniciativa Ciudadana es el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las Instituciones de Educación Superior del Estado, pueden presentar ante la instancia que corresponda:

a) La expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes estatales ante el Poder Legislativo, así como reformas a la Constitución del Estado, y

b) La expedición, reforma, derogación o abrogación de reglamentos municipales ante los Ayuntamientos.

Artículo 49.

1. No podrán ser objeto de Iniciativa Ciudadana las materias siguientes:

a) Aquellas relacionadas con el régimen interno y de organización de los Poderes del Estado, así como de los Ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos del Estado, y

b) Aquellas que restrinjan los derechos humanos.

Artículo 50.

1. La Iniciativa Ciudadana deberá contener los siguientes requisitos:

- a) El propósito de la iniciativa, así como su motivación y articulado;
- b) La autoridad competente, según corresponda, y
- c) El representante común, con domicilio para oír y recibir notificaciones.

2. Las ciudadanas y ciudadanos podrán presentar la Iniciativa Ciudadana, siempre y cuando la solicitud sea apoyada por al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal cuando se trate de Iniciativa Ciudadana Estatal, y de al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio que corresponda cuando se trate de Iniciativa Ciudadana Municipal.

3. Las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos a la iniciativa ciudadana de que se trate deberán asentarse en el formato oficial que establezca el Instituto, los cuales estarán disponibles para los interesados en su portal de internet oficial. De igual manera, procurará que los formatos oficiales estén disponibles para las personas con alguna discapacidad visual y en las lenguas indígenas de los pueblos originarios con mayor representación en el Estado.

Artículo 51.

1. Las Instituciones de Educación Superior del Estado, podrán presentar por conducto de su Rector, Director General o máxima autoridad reconocida en su normatividad o estatutos, iniciativas de leyes y reformas a las ya existentes, siempre que sean aprobadas por las dos terceras partes del total de los miembros del Consejo Universitario, Junta Directiva o el Órgano Colegiado, sea cual fuere su denominación en dicha Institución de Educación Superior que se encuentre facultado para ello.

2. En la presentación de dichas iniciativas, las Instituciones de Educación Superior deberán observar lo siguiente:

- a) Deberán acompañar copia simple del acta de la sesión o acuerdo certificado en donde se acredite que la iniciativa se encuentra respaldada por las dos terceras partes de la máxima autoridad facultada para ello, y

b) Deberán acompañar a la iniciativa, copia simple del documento en el que se acredite que el inicialista es el titular de la máxima autoridad de dicha institución.

Artículo 52.

1. La solicitud de Iniciativa Ciudadana deberán presentarse ante el Poder Legislativo o ante el Ayuntamiento que corresponda, según el tipo de iniciativa de que se trate.

2. Una vez recibida la iniciativa ciudadana esta será remitida al Pleno del Poder Legislativo o, en su caso, al Cabildo del Ayuntamiento, los cuales determinarán a la comisión a las que debe turnarse la misma para la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley, y dictamine sobre su viabilidad o inviabilidad.

3. En caso de que, la Iniciativa Ciudadana incumpla con alguno de los requisitos señalados en el párrafo 1 del artículo 50, se prevendrá al solicitante a fin de que, dentro de un plazo de dos días hábiles, subsane las inconsistencias encontradas, bajo el apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento se tendrá por no presentada la Iniciativa Ciudadana.

4. Tratándose del requisito previsto en el párrafo 2 del artículo 50, la Comisión a la que se haya turnado la Iniciativa Ciudadana, solicitará al Instituto la verificación de la situación registral en la Lista Nominal que corresponda, del respaldo ciudadano de la Iniciativa, para ello deberá realizar las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional.

5. El Instituto contará con un plazo de quince días hábiles para obtener los resultados de la verificación de situación registral de cada uno de los apoyos de las ciudadanas y ciudadanos que sustentan la Iniciativa Ciudadana.

6. Recibido el reporte detallado sobre la revisión del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos a la Iniciativa Ciudadana, el Instituto lo remitirá al Poder Legislativo o, en su caso, al Ayuntamiento que corresponda, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Artículo 53.

1. La comisión del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda, deberá resolver sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la Iniciativa Ciudadana en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la recepción del reporte de verificación del apoyo ciudadano que reciba por parte del Instituto.
2. En caso de que la comisión del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda no resuelva dentro del plazo anterior, se considerará que la Iniciativa Ciudadana cumple con todos los requisitos que prevé esta Ley, por lo que deberá dictaminarse sobre su viabilidad o inviabilidad.
3. Cuando la Iniciativa Ciudadana cumpla con todos los requisitos previstos en este Capítulo, la comisión del Poder Legislativo del Estado o del Ayuntamiento que corresponda deberá dictaminar sobre su viabilidad o inviabilidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en caso de los Ayuntamientos, de acuerdo con su normatividad interna aplicable.

Artículo 54.

1. Toda Iniciativa Ciudadana una vez dictaminada por la comisión del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda, deberá someterse a sus respectivos Plenos para su aprobación o rechazo, lo cual deberá suceder en un plazo no mayor a cuatro meses.
2. En la discusión de la Iniciativa Ciudadana ante la comisión o el Pleno del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda, podrá participar con voz el representante común de los promoventes. Tratándose de iniciativas ciudadanas promovidas por las Instituciones de Educación Superior participará su representante designado para tales efectos.
3. Toda iniciativa ciudadana que sea rechazada por el Pleno del Poder Legislativo, sólo podrá ser presentada hasta su siguiente periodo de sesiones. En el caso de iniciativas ciudadanas rechazadas por el Cabildo del Ayuntamiento, estas solo podrán ser presentadas de nueva cuenta en el año siguiente al de su presentación.

CAPÍTULO OCTAVO

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 55.

1. El Presupuesto Participativo es el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos ejercen el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que destina el Ayuntamiento, para que sus habitantes optimicen su entorno proponiendo proyectos para mejora de sus colonias.

2. Se entenderá por Colonia, aquellas que se refieren a fraccionamientos, colonias, conjuntos habitacionales, ampliaciones, poblados, ejidos, localidades, pueblos, residenciales y zonas industriales, de conformidad con lo establecido en el Catálogo de Colonias que emite el Instituto Nacional.

3. Para tales efectos, cada Ayuntamiento destinará como mínimo un monto equivalente al cuatro por ciento de su presupuesto de egresos anual, y deberá distribuirlo de la siguiente manera:

- a) El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma proporcional entre las colonias en localidad urbana.
- b) El 50% restante se distribuirá de forma proporcional entre las colonias en localidad rural.

Artículo 56.

1. Los recursos asignados para el ejercicio del Presupuesto Participativo deberán satisfacer necesidades colectivas, tales como:

- a) Recuperación de espacios públicos;
- b) Infraestructura rural y urbana;
- c) Seguridad Pública;
- d) Medio Ambiente;
- e) Obras y servicios públicos, y
- f) Actividades recreativas, deportivas y culturales.

Artículo 57.

1. En el proceso del Presupuesto Participativo, el Ayuntamiento deberá realizar lo siguiente:

a) Adoptar las medidas conducentes desde una perspectiva de género, inclusión y no discriminación para garantizar que la participación se dé en un marco de igualdad;

b) Emitir convocatoria pública dirigida a la población en general para participar en la consulta de Presupuesto Participativo en el mes de enero de cada año, donde se establecerá por lo menos los siguientes elementos:

I. El monto de los recursos públicos que se destinarán por colonia;

II. Periodo y modalidad para el registro de proyectos;

III. Periodo para determinar la viabilidad y factibilidad de proyectos, y

IV. La metodología a utilizar para realizar la consulta y la fecha o periodo para la misma;

c) Difundir los proyectos que se someterán a consulta, así como el monto de los recursos públicos que se destinarán para su ejecución, en su portal oficial, así como a través de todos los medios a su alcance;

d) Llevar a cabo la votación de los proyectos, cómputo, validación y publicación de resultados;

e) Ejecutar los proyectos del Presupuesto Participativo;

f) Rendir informes sobre el avance de los proyectos y ejercicio del gasto, y

g) Al finalizar el ejercicio fiscal deberá informar a la población la cantidad de obras que fueron realizadas y la inversión que se hizo en cada una de ellas.

2. El Instituto podrá:

a) Colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realización de la consulta, y

b) Convenir con los Ayuntamientos para dar asesoría y apoyo técnico en la organización, desarrollo, cómputo y declaración de sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participativo; así como para supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten.

Artículo 58.

1. El Ayuntamiento deberá conformar un órgano dictaminador para los proyectos que se presenten en el Presupuesto Participativo. Este órgano dictaminador estará obligado a realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos, de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que de él se desprenda.

2. El órgano dictaminador verificará, entre otras cosas, que los proyectos sobre Presupuesto Participativo no afecten suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas como patrimonio cultural, lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad en materia ambiental y demás legislación aplicable.

3. Para la integración del órgano dictaminador, el Ayuntamiento deberá invariablemente considerar dentro de este la participación de tres especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas con los proyectos a dictaminar, ajenos a cualquier ente público, y el restante deberán ser las personas responsables de las dependencias del Ayuntamiento involucradas con la naturaleza de los proyectos. El órgano dictaminador deberá conformarse por número impar, y con una integración máxima de siete personas.

Artículo 59.

1. El Ayuntamiento será el responsable de ejecutar los proyectos ganadores en las Colonias que corresponda, antes de la conclusión del año fiscal en que se llevó a cabo la consulta. Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por factores externos a la administración de los proyectos o acciones.

2. En los casos en que no se hayan registrado proyectos en algunas de las colonias del Ayuntamiento, este a través del Cabildo, deberá aprobar ejercer los recursos del Presupuesto Participativo en estas colonias, dando preferencia a aquellas de naturaleza rural, mediante la realización de diversas obras que atiendan alguna de las necesidades colectivas señaladas en el artículo 56 de esta Ley. Lo anterior, en el entendido de que los recursos públicos del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal que corresponda deben ejercerse hasta agotarse en su totalidad

3. De manera bimestral el Ayuntamiento rendirá informes a la ciudadanía sobre los avances del proyecto y la ejecución del gasto. Al finalizar el ejercicio fiscal deberá informar al público en general la cantidad de obras que fueron realizadas y la inversión que se hizo en cada una de ellas.

Artículo 60.

1. La Auditoría Superior del Estado y las sindicaturas de los Ayuntamientos deberán conocer, vigilar y sancionar en todo momento la correcta aplicación de los recursos de Presupuesto Participativo.

2. En los casos en que no se haya concluido alguna de las obras objeto del Presupuesto Participativo en el año fiscal que corresponda, la Auditoría Superior del Estado y las sindicaturas de los Ayuntamientos, aplicarán y, en su caso, sancionarán en el marco de sus atribuciones lo conducente, a efecto de inhibir el mismo hecho en los siguientes ejercicios del Presupuesto Participativo.

**CAPÍTULO NOVENO
DEL CABILDO ABIERTO**

Artículo 61.

1. El Cabildo Abierto, es un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebración de una sesión, en la cual los habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento.

2. Todas las propuestas o solicitudes planteadas por las ciudadanas y ciudadanos en las sesiones de Cabildo Abierto serán abordadas y discutidas por los Integrantes del Ayuntamiento y se les dará respuesta en esa misma sesión, o a más tardar en la próxima sesión de Cabildo Abierto, en orden preferente.

3. Las propuestas o solicitudes que sean presentadas por las ciudadanas y ciudadanos para estos efectos, deberán ser publicadas por el Ayuntamiento en su portal oficial de internet, así como la respuesta justificada de su aprobación o rechazo para tratarse en la sesión de Cabildo Abierto.

4. En caso de ser positiva la respuesta a la propuesta o solicitud de las ciudadanas y ciudadanos planteada en la sesión de Cabildo Abierto, el Ayuntamiento dará difusión por los medios a su alcance, con el propósito de estimular la participación ciudadana responsable en beneficio de la comunidad.
5. Las sesiones de Cabildo Abierto serán públicas, transmitidas en vivo por internet y se llevarán a cabo de manera mensual.
6. El Ayuntamiento en la primer semana de diciembre del año previo a que se celebren las sesiones de cabildo, determinará el calendario anual; así como, en donde habrán de desarrollarse las sesiones de cabildo abierto, las cuales podrán realizarse alternadamente entre la sede oficial y espacios públicos en las diferentes colonias o delegaciones del municipio, mismo que podrá ser modificado, mediante Acuerdo del propio Órgano Colegiado; debiendo notificar al Instituto de dicho calendario, así como de sus modificaciones.
7. A estas sesiones se convocará a las ciudadanas y ciudadanos y podrá invitarse a representantes de los poderes del Estado, de la Federación y servidores públicos municipales.

Artículo 62.

1. Para la realización de las sesiones de Cabildo Abierto, se observará lo previsto en el presente artículo.
2. El Ayuntamiento emitirá la convocatoria para la celebración de la sesión de Cabildo Abierto con una anticipación no menor a cinco ni mayor a diez días hábiles. Dicha convocatoria será fijada en lugares públicos y se le dará la mayor difusión posible.
3. El orden del día para la sesión del Cabildo Abierto deberá incluir como mínimo los siguientes puntos:
 - a) Lista de asistencia y declaración del quórum legal;
 - b) Aprobación del orden del día;
 - c) Presentación de asuntos a tratar;
 - d) Lectura del procedimiento previsto en el Reglamento correspondiente de cada Ayuntamiento, para el desarrollo de las sesiones de Cabildo abierto;

- e) Participación de los integrantes del Ayuntamiento;
- f) Participación de las ciudadanas y ciudadanos en orden a su inscripción, y
- g) Asuntos generales.

4. Los habitantes del municipio podrán asistir a la sesión de Cabildo Abierto en calidad de participantes o como público asistente.

5. Las ciudadanas y ciudadanos interesados en asistir como participantes, deberán registrarse previamente, conforme a los plazos, y requisitos señalados en la convocatoria correspondiente.

6. Las ciudadanas y ciudadanos del municipio, deberán presentar sus propuestas o solicitudes ante la Presidencia Municipal, mismas que deberán contener preferentemente, los antecedentes y la propuesta de solución de un asunto de interés público.

7. Por ningún motivo podrá interrumpirse la sesión de Cabildo Abierto, salvo en los siguientes casos:

- a) Por falta de quórum legal para continuar la sesión;
- b) Cuando se pongan en riesgo las instalaciones y/o la seguridad de los miembros del Cabildo o de los asistentes, y
- c) Cuando no se reúnan las condiciones mínimas de orden y/o seguridad para continuar con la sesión.

8. Para lo no previsto en el presente capítulo, se observará lo dispuesto en la normatividad aplicable de los Ayuntamientos.

CAPÍTULO DÉCIMO

CONGRESO ABIERTO

Artículo 63.

1. El Congreso Abierto, es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual, quienes integran el Poder Legislativo, dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las normas que rigen la vida pública, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así

como la calidad, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de la administración pública, la impartición de justicia, el manejo del presupuesto público y otros asuntos de la vida pública.

2. El Congreso Abierto se promoverá junto con la solicitud de Iniciativa Ciudadana, por medio de petición realizada por el representante de los solicitantes en los términos de los artículos 49 y 50 de esta Ley.

Artículo 64.

1. En toda solicitud de Congreso Abierto se debe hacer mención sobre la reforma o ley a tratar y deberá ser dirigida al Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo quien lo remitirá a la Comisión de Dictamen Legislativo que le corresponda realizar el proceso de análisis y discusión.

2. Una vez recibida la solicitud de Congreso Abierto, el Poder Legislativo tendrá cinco días hábiles para dar respuesta por escrito, fundada y motivada a los solicitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento; en caso de ser procedente la solicitud deberá señalar día, hora y lugar para la realización de la sesión o la mesa técnica legislativa, anexando el orden del día para su desarrollo.

3. Todo el proceso de discusión, análisis y votación de la reforma constitucional o creación o modificación de una Ley deberá ser bajo el principio de máxima publicidad y transparencia proactiva. Para ello, el Poder Legislativo deberá implementar mesas técnicas legislativas y foros virtuales, donde las ciudadanas y ciudadanos promoventes participen de manera efectiva y quede constancia de los estudios, aportaciones y recomendaciones hechas durante el proceso de análisis y discusión.

4. Se entenderá por mesas técnicas legislativas los grupos de trabajo encargados de recibir toda la información cuantitativa y cualitativa del proceso participativo y elaborar y redactar propuestas de modificaciones, adiciones a una norma o ley.

5. Se entenderá por foros virtuales el mecanismo a través del cual las ciudadanas y ciudadanos podrán emitir opiniones y propuestas sobre los proyectos de ley que se analizan en las diferentes comisiones de dictamen legislativo del Poder Legislativo, a través del uso de las tecnologías de la información.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DEL GOBIERNO ABIERTO

Artículo 65.

1. El Gobierno Abierto es el mecanismo que permite la participación democrática de las ciudadanas y ciudadanos en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas públicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.
2. Son principios rectores del Gobierno Abierto, la transparencia, la participación y la colaboración, cuyo objetivo es la rendición de cuentas.
3. El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos realizarán anualmente una convocatoria para que, en conjunto con la participación de las ciudadanas y ciudadanos, se defina un plan de trabajo anual que permita atender las problemáticas más relevantes, con compromisos específicos, concretos, incluyentes, estratégicos y medibles.
4. Para la definición de las problemáticas y compromisos, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, en conjunto con las ciudadanas y ciudadanos se auxiliarán por medio de conversatorios, glosas ciudadanas, paneles de discusión y/o mesas de trabajo, para la definición de las problemáticas y compromisos que se asumirán. Los compromisos, actividades y resultados acordados se integrarán en un solo documento al cual se le denominará Plan de Acción, mismo que tendrá una vigencia mínima de un año.
5. El Plan de Acción señalado en el párrafo anterior será presentado a la sociedad en un evento público que, a su vez, marcará el inicio del proceso de implementación de las actividades. A partir de esta fecha el Poder Ejecutivo, así como los Ayuntamientos contarán con un plazo de un año calendario para cumplir con las actividades y los resultados considerados en el referido Plan de Acción.
6. Una vez iniciado el Plan de Acción, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos deberán habilitar en sus portales de internet institucionales toda la evidencia documental de las actividades realizadas en el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como los avances correspondientes.

TÍTULO TERCERO

DE LOS PROCESOS DE CONSULTA

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 66.

1. Los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana como son Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación de Mandato inician con la publicación de la convocatoria que emita el Instituto en el Periódico Oficial, siempre que la solicitud de un instrumento de participación ciudadana resulte procedente.

2. La convocatoria señalada en el párrafo anterior deberá contener, al menos lo siguiente:

- a) Fundamentos legales aplicables;
- b) Fecha y hora en que habrá de realizarse la jornada de consulta, o en su caso si se celebra en la jornada electoral local los datos de esta;
- c) Breve descripción del acto, norma o tema que se somete a consulta;
- d) La pregunta a consultar;
- e) Circunscripción territorial en que se realizará;
- f) Requisitos para participar, y
- g) Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria.

3. La convocatoria que expida el Consejo General deberá publicarse en el Periódico Oficial, en el portal oficial de internet del Instituto, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los Ayuntamientos que correspondan, en por lo menos dos periódicos de mayor circulación en el Estado o Municipios de que se trate, así como colocarse en los lugares de mayor afluencia de ciudadanas y ciudadanos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN
DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 67.

1. Los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana como Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación de Mandato, se componen de las etapas siguientes:

- a) Preparación: Comprende desde la publicación que realiza el Consejo General de la convocatoria del instrumento de participación ciudadana de que se trate y concluye al iniciarse la jornada de consulta;
- b) Jornada de Consulta: Inicia el día de la votación y concluye con la clausura de las casillas o centros de votación;
- c) Cómputos y calificación de resultados: Inicia con la remisión de los expedientes de votación al Consejo General y concluye con los cómputos de la votación, y
- d) Declaración de los efectos: Comprende desde los resultados y concluye con la notificación de los mismos a la autoridad correspondiente.

2. En los procesos de consulta que se celebren no se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de los partidos políticos que establece la LEEBC.

3. Sin perjuicio de lo anterior, los representantes de los partidos políticos registrados o acreditados ante el Consejo General, podrán participar en la vigilancia de la organización y desarrollo de los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley.

Artículo 68.

1. El Instituto, a través de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, preparará el proyecto para la realización de los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana como Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular y Revocación de Mandato, para ser aprobado por el Consejo General.

2. Dicho proyecto podrá contemplar la utilización de nuevas tecnologías para su organización y votación, incluyendo la urna electrónica, el voto electrónico y la instalación de centros de votación. La instrumentación de las nuevas tecnologías sólo podrá ser autorizada siempre y cuando garantice la autenticidad y el secreto del voto conforme a lo dispuesto en la LEEBC.
3. En caso de ser necesario, el Instituto solicitará a los poderes Ejecutivo y Legislativo los recursos públicos necesarios para estar en aptitud de organizar los procesos de consulta que prevé esta Ley.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Artículo 69.

1. En las jornadas de consulta de los instrumentos de participación ciudadana que no sean coincidentes con la jornada electoral de un proceso electoral local, el Consejo General determinará la instalación de Centros de Votación como los órganos encargados de recibir la votación o sufragios de las ciudadanas y ciudadanos y realizar el escrutinio y cómputo respectivo.
2. Cuando la jornada de consulta se realice el día de la jornada electoral local se estará a lo que disponga la LEEBC en materia de instalación y ubicación de mesas directivas de casilla, y en caso de que esta sea concurrente con una elección federal se estará a lo dispuesto en la LGIPE.

Artículo 70.

1. Los Centros de Votación estarán integrados, al menos, por seis ciudadanas o ciudadanos, que ejercerán las funciones de presidente, secretario, dos escrutadores y, en su caso, dos suplentes generales, con las atribuciones que, a los miembros de la mesa directiva de casilla establece la LEEBC.
2. En la integración de los Centros de Votación, no podrán participar representantes de los partidos políticos, ni servidoras y servidores públicos del orden de gobierno cuyo acto se someta a consulta.
3. Los Centro de Votación tendrán a su cargo, además de garantizar la libre emisión y efectividad del voto, la secrecía del mismo y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo durante la jornada de consulta;

- a) Entidad, Municipio y Distrito Electoral, de conformidad con la naturaleza del voto y con la aplicación territorial del proceso de consulta;
- b) Talón desprendible con folio;
- c) La pregunta o preguntas aprobadas para la consulta;
- d) Cuadros o círculos para señalar las opciones: "SI" y "NO";
- e) Descripción breve del acto, norma o tema que se somete a consulta, y
- f) Sello y firmas impresas de las personas titulares de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva del Instituto.

2. La votación podrá ejercerse mediante el uso de nuevas tecnologías con la modalidad e instrumentos aprobados por el Consejo General, siempre y cuando se observen las medidas que garanticen la efectividad y secrecía del voto, de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 75.

1. En la jornada de consulta del instrumento de participación ciudadana de que se trate, se podrán reutilizar los materiales electorales como cancelles, urnas, mamparas, entre otros, de procesos electorales o de instrumentos de participación ciudadana pasados, siempre que estos se encuentren en buen estado.

CAPÍTULO QUINTO DE LA JORNADA DE CONSULTA

Artículo 76.

1. La jornada de consulta de los instrumentos de participación ciudadana, se desarrollará en el horario y términos que la LEEBC prevé para la jornada electoral de los procesos electorales.

2. El Consejo General será el encargado de determinar las medidas necesarias para que la jornada de consulta de los instrumentos de participación ciudadana se desarrolle de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.

asimismo, hacer llegar oportunamente a los centros de recolección los paquetes que contengan la documentación de la jornada de consulta.

Artículo 71.

1. Las funcionarias y funcionarios de los Centros de Votación serán designados, mediante el método que determine el Consejo General, en cada caso.

Artículo 72.

1. El Consejo General, atendiendo a las necesidades particulares y específicas de cada instrumento de participación ciudadana, decidirá el número y ubicación de los Centros de Votación, utilizando la Lista Nominal con fecha de corte más inmediato a la emisión de la convocatoria. En todo caso, deberá establecerse por lo menos un Centro de Votación por cada veinte secciones electorales.

Artículo 73.

1. Corresponde al Consejo General, el procedimiento de integración, capacitación, instalación y funcionamiento de los Centros de Votación.

2. Para la integración de los Centros de Votación, se seguirán las etapas y procedimientos que prevé la LEEBC sobre el tema de mesas directivas de casilla, adecuando los tiempos al trámite de los instrumentos de participación ciudadana.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL
PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA

Artículo 74.

1. El ejercicio del derecho al voto por parte de las ciudadanas y ciudadanos, podrá realizarse mediante boletas de votación que para tal efecto apruebe el Consejo General, observando lo siguiente:

Artículo 77.

1. El Instituto Estatal determinará la viabilidad de realizar conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de los centros de votación o de las casillas, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada de consulta, de conformidad con los lineamientos que emita para tal efecto.

CAPÍTULO SEXTO
DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Artículo 78.

1. Una vez concluida la jornada de consulta del instrumento de participación ciudadana de que se trate, los integrantes del Centro de Votación procederán a realizar el escrutinio y cómputo de los recibidos en este.

2. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes del Centro de Votación determinan lo siguiente:

- a) El número de ciudadanas y ciudadanos que votaron;
- b) El número de votos emitidos en favor y en contra de la consulta del instrumento de participación ciudadana;
- c) El número de votos nulos, y
- d) El número de boletas recibidas y sobrantes.

3. Para realizar el escrutinio y cómputo de los instrumentos de participación ciudadana, el Consejo General emitirá las reglas que los integrantes de los Centros de Votación deberán seguir.

**CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS RESULTADOS
Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ**

Artículo 79.

1. El Instituto, a través del Consejo General, efectuará el cómputo y declaración de validez de los resultados de los instrumentos de participación ciudadana, en los términos establecidos en los lineamientos de cómputo que para tal efecto apruebe.

Artículo 80.

1. El Instituto publicará los resultados oficiales y porcentajes de votación, en el Periódico Oficial, así como en un periódico de mayor circulación en el Estado o en el Municipio que corresponda.
2. El Instituto dará difusión de los resultados, a través de su página oficial de internet.

Artículo 81.

1. El Instituto, a través de la Presidencia del Consejo General, notificará los resultados definitivos del cómputo al solicitante, así como a la autoridad correspondiente, para los efectos legales conducentes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la declaratoria de validez de estos.

Artículo 82.

1. Cuando los resultados de los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana referentes al Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular sean vinculatorios, tendrán efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez que realice el Consejo General.

TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 83.

1. Los actos, omisiones o resoluciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los Ayuntamientos, así como del Instituto, dictados con motivo de la tramitación de alguno de los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley, podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral, a través del Recurso de Inconformidad, de conformidad con lo señalado en la Constitución del Estado y la LEEBC.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 84.

1. En el caso de solicitudes estatales o municipales promovidas por las ciudadanas y ciudadanos, los gastos para la realización de los procesos de consulta de que se trate los erogará el Instituto; por lo tanto, este deberá incluir y aprobar dentro de su proyecto de Presupuesto de Egresos, una partida destinada para su realización.

2. Tratándose de los procesos de consulta promovidos por los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como por los Ayuntamientos, los gastos que se originen para su implementación deberán ser erogados por estos, por lo que deberán establecer en sus proyectos de Presupuestos de Egresos una partida para tal efecto.

Artículo 85.

1. El presupuesto asignado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a los Ayuntamientos, así como al Instituto, para la realización de los procesos de consulta de los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley, que no se ejerza será devuelto a la Hacienda Pública del Estado, en los términos de la normatividad aplicable.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS
PREVISTOS EN ESTA LEY

Artículo 86.

1. El Instituto, a través del Consejo General, tendrá facultades para ampliar los plazos y términos establecidos en esta Ley, cuando exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos previstos en esta Ley para los diversos instrumentos de participación ciudadana.

2. El acuerdo o acuerdos del Consejo General que determinen ampliaciones a los plazos y términos mencionados en el párrafo anterior, serán enviados para su publicación en el Periódico Oficial, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su aprobación.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS REFORMAS A LA LEY

Artículo 87.

1. Las reformas o adiciones que impliquen modificación a los instrumentos de participación ciudadana que se establecen en la presente Ley, requerirán que el Poder Legislativo realice un referéndum legislativo previo a su aprobación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 16 de febrero de 2001, así como sus reformas y adiciones.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la presente Ley.

CUARTO. Los procesos de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

QUINTO. El Instituto Estatal Electoral de Baja California tendrá un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para adecuar y crear los reglamentos, lineamientos y demás documentos necesarios, derivados de la presente Ley.

SEXTO. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado deberán autorizar las modificaciones necesarias en sus presupuestos de egresos, en el de los Ayuntamientos y del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para la instrumentación y cumplimiento de esta Ley.

SÉPTIMO. El Instituto Estatal Electoral de Baja California deberá de establecer en su proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio presupuestal inmediato siguiente a la publicación de la presente Ley, las necesidades presupuestales respectivas para dar cumplimiento a cabalidad a las atribuciones y obligaciones previstas en la misma.

OCTAVO. El Instituto Estatal Electoral de Baja California en coordinación con los tres poderes públicos del Estado, así como con los Ayuntamientos emprenderá en un plazo de ciento veinte días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley una campaña masiva de educación, capacitación, difusión y fomento de los instrumentos de participación ciudadana reconocidos en esta Ley.

En la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veinte.

A T E N T A M E N T E
"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA
CONSEJERO PRESIDENTE

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO
CONSEJERA ELECTORAL

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA
CONSEJERO ELECTORAL

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA
CONSEJERA ELECTORAL

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA
CONSEJERO ELECTORAL

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA
CONSEJERO ELECTORAL

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ
CONSEJERA ELECTORAL

La presente hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Ley que formula el Instituto Estatal Electoral de Baja California, por la que se expide la Nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California, aprobada por el Consejo General en fecha 26 de febrero de 2020, y que consta de 34 fojas útiles con texto por su anverso y reverso.